

Educación para habitar
Migración, urbanización e historia social en Medellín. Fundación Casitas de la
Providencia, 1960-1970

Trabajo de grado para optar al título de socióloga

Kelly Johanna López Roldán

Asesor
Dr. Óscar Calvo Isaza
Departamento de Historia
Universidad de Antioquia

Departamento de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Antioquia
Medellín
2016

A la memoria de Mariana Porras Castrillón (1994-2013)

Contenido

Introducción	5
1. Conocer y “erradicar”	30
1.1. El tugurio	30
1.2. La Fundación Casitas de la Providencia y la política de erradicación (del centro a la periferia).....	35
1.3. Describir y Prescribir: el conocimiento de la ciudad y el trabajo social	43
2. Experimento social	58
2.1. El desalojo de La Alpujarra y el traslado al barrio Villa Socorro	58
2.2. Rehabilitación social o reeducación del habitante urbano: las familias piloto.....	71
2.3. El papel de las trabajadoras sociales, las damas de la caridad y las monjas	79
3. Experiencia social.....	93
3.1. Resistencia y conflictos cotidianos.....	94
3.2. Central Nacional Provivienda.....	103
3.3. La parroquia y los sacerdotes	112
3.4. Organización política.....	122
Conclusión	131
Fuentes y bibliografía.....	134

Introducción

Una cuestión clásica de la sociología gira en torno a la configuración de la sociedad, si las instituciones, la herencia histórica o las estructuras se imponen sobre los anhelos de los individuos, o si son estos con su voluntad y contactos recíprocos y cotidianos los que dan vida a la sociedad. En igual medida los sociólogos se han preguntado por la construcción de ordenes sociales, y si instituciones como la iglesia, el estado, los partidos políticos o la familia, pueden regular los comportamientos de grupos sociales e individuos. Tales interrogantes han emergido en y para pensar la modernidad como una época de constantes cambios. Lo que ha coincidido con procesos como la industrialización, la urbanización, la consolidación de los estados nacionales y la emergencia de nuevos sujetos y grupos sociales que han sido objeto de sus interpretaciones, hasta el punto de llegar a identificarlos como parte del pensamiento sociológico por excelencia.

Ciudad, fábrica, Estado, clases sociales, a la par de dominación, control y resistencia, hacen parte de las categorías claves que han constituido la particularidad de la disciplina. En diferentes ocasiones, la sociología se ha remitido al pasado, cargada de preguntas, buscando comprender tanto las transformaciones como las continuidades que han permitido dar vida a sus objetos, haciendo aparecer las épocas de transición como hitos fundamentales para entender el presente. Por ejemplo, cómo la acumulación originaria del capital exigió del campesinado una disciplina acorde con el trabajo asalariado, y a través de ese disciplinamiento la moralización de la conducta económica se apoyó en la religión, en una serie de prácticas y disposiciones de los sujetos con respecto a un sistema de valores (sociales y familiares) que sirvieron a los propósitos de la producción fabril. Al tiempo, cómo el tránsito hacia las ciudades exigió una nueva disposición del individuo para ajustarse a una serie de estímulos nerviosos que derivaron en actitudes calculadoras e intelectualistas de un nuevo tipo social denominado ‘urbanita’; a la par de las imposiciones que realizaron las instituciones sobre los grupos sociales (marginados, pobres) para lograr un ordenamiento espacial y social acorde a los intereses de otros grupos, a través de lo que hemos llamado Estado.

Pero ¿El Estado logra imponerse a la sociedad? ¿Ha adquirido autonomía, ubicándose en una esfera externa? La respuesta no ha sido ni puede ser definitiva, la pregunta por el Estado ha ocupado un lugar importante en los debates de los científicos sociales y su estudio ha sido una pieza fundamental para comprender el surgimiento y desarrollo de la modernidad. El Estado ha sido conceptualizado tanto como mecanismo de dominación, como un espacio de intermediación de grupos sociales; pero a pesar de las diferencias teóricas, ha siempre se ha utilizado como recurso para definir la porosa frontera entre lo público y lo privado. Además de las definiciones inspiradas en el contractualismo y la filosofía ilustrada; se ha vuelto célebre la conceptualización weberiana del “monopolio legítimo de la fuerza”, que, junto con los trabajos de Tilly o Elias, representan solo una pequeña muestra de los intentos por comprender sus particularidades. Y aunque las teorías pueden inspirar ejercicios fundamentales de discusión académica, es imprescindible preguntarse, en igual medida, cómo es posible estudiarlo: qué observar, dónde dirigirse, en qué escala.

Debemos empezar por lo que en apariencia es más simple, es decir, por las instituciones que identificamos como piezas del engranaje ‘Estado’, sin la ingenua pretensión de que a partir de ellas llegaremos a conocer la totalidad, y con la precaución de no tomar la parte por el todo. Al emprender una empresa de esta naturaleza es necesario cuestionarse sobre las posturas que tienden a reafirmar una especie de mistificación de las instituciones. Por un lado, está la postura que considera que es necesario entender el papel que desempeñan porque sin ellas no serían posibles los procesos sociales, que, en pocas palabras, hacen uso de una exaltación en la que no tienen cabida los grupos sociales como actores sociales; por otro, la tendencia a observarlas desde la orilla de los sectores populares, con una actitud reivindicativa, afirman que las instituciones solo son mecanismos de dominación que coartan, al parecer con éxito, la vida de los grupos sociales subalternos. Tal vez ello explica por qué es difícil encontrar una historia de las instituciones que dé cuenta de cómo el día a día de los funcionarios, sus avatares y visiones del mundo configuran aquello que aparece tan abstracto e inaccesible como el poder estatal.

¿Por qué es necesario estudiar las instituciones y dar historicidad al poder? Para dar cuenta de sus transformaciones, de cómo funcionan en la práctica y de las relaciones entre grupos sociales. Entender en su justa proporción y, en contexto, que los intentos de control

en muchas ocasiones no son más que eso, y que la capacidad de acción, de dominación, depende de muchos factores que se escapan a la voluntad de quien desea imponerse. Un acercamiento al funcionamiento de las instituciones delata el sentido de las configuraciones sociales modernas y de lo que se ocupa la disciplina sociológica, a saber, de la emergencia de diversos sentidos, que, en conflicto, configuran, dan vida o expresan lo que constituye la sociedad en una determinada época: lo no se contiene en las pretensiones, disposiciones o imposiciones de grupos hegemónicos; ni se consagra con la voluntad y las reivindicaciones de grupos sociales subalternos. La sociedad es el resultado de los conflictos y los encuentros entre grupos sociales, por lo que, tanto los intentos de control, como la resistencia hacen parte de los procesos sociales, de allí que no sea posible estudiar uno sin tomar en consideración el otro.

El punto de partida es entonces el reconocimiento de lo infructuoso que es estudiar las instituciones a partir de sí mismas, ya que son las relaciones que establecen con otros grupos las que nos permiten entender su incidencia en la sociedad, y si efectivamente logran dominar ¿Cómo lo hacen? ¿Los planes logran ejecutarse según el propósito inicial? Una primera respuesta se relaciona con una lectura, desde la perspectiva histórica, del conocimiento producido por las instituciones estatales, pues nos permitirá valorar la construcción de un poder que se sustenta en la estigmatización de un grupo o conjunto de grupos, y la eficacia de la aplicación de planes y políticas institucionales en el largo plazo, es decir, a qué avatares estuvieron sujetos los intentos de control y cómo debieron adaptarse a circunstancias impuestas por el contexto social en momentos de conflicto con otros grupos sociales. Es necesario comenzar a ver los archivos como objetos de investigación más que como fuentes para la extracción de datos, para comprender el estado, como muestra Ann Stoler en el caso de los archivos coloniales holandeses, es necesario hacer una lectura etnográfica de los documentos producidos por el Estado con el fin de entender los sistemas de conocimiento (territorio y población), así como el arte de gobernar, cómo se intentan ordenar.¹

Resulta paradójico que actualmente se llegue más fácilmente a las versiones (orales) de la gente del común, que al quehacer de funcionarios del Estado, a pesar de contar con

¹ Ann Stoler, “Archivos coloniales y el arte de gobernar”, *Revista Colombiana de Antropología*, 46.2 (2010): 465-496.

archivos históricos repletos de documentos sobre la visión de los mismos en un momento determinado queda consagrado en informes, correspondencia, censos, cartografía, aerofotografías, actas, y cuando son tenidos en cuenta por los investigadores sociales como fuentes más que como objetos, en un ejercicio extractivista, sin cuestionarse sobre lo que podría decir sobre el poder; más allá de la veracidad de la información contenida en los documentos, el enfoque debería cambiar para comenzar a leerlos como acervos que contienen las claves para comprender cómo el Estado produce conocimiento sobre grupos sociales, las clasificaciones que justifican la omisión o intervención en un determinado territorio, en un momento preciso, la sistematicidad y las transformaciones que operan en su seno con respecto a ciertas actitudes, personas, grupos, e incluso, comunidades enteras. No se tiene en cuenta que allí se conservan los “secretos” del Estado, lo que en un momento constituyó lo que no podía ser dicho o publicado, al igual que la circulación de lo que podía ser conocido por un grupo selecto de funcionarios, industriales, clérigos, la prensa o la sociedad en general. Allí está contenido, según la naturaleza de cada documento, aquello que debía mantenerse oculto y lo debía ser publicado (imagen).

Según P. Abrams la atribución de un carácter de secreto a los asuntos relacionados con Estado es lo que ha contribuido a su mistificación, pensar que hay algo oculto al público, que no permite conocer los alcances del poder, a quién vigila, quién opera los programas, a qué dificultades se enfrenta.² Esta idea ha contribuido a concederle cada vez un carácter más abstracto, de ahí la dificultad para estudiarlo. Sin embargo, Ann Stoler ha mostrado como esa fascinación por lo “clasificado” y lo “confidencial”, por los secretos del Estado no tienen ese velo fantástico que le atribuimos,³ pues si nos atrevemos a adentrarnos en el estudio de la documentación producida por los Estados a lo largo del siglo XX, por ejemplo, de la información que ha sido ‘desclasificada’, y que ha pasado de los archivos de gestión de las oficinas gubernamentales al resguardo de los archivos históricos, veremos que, a pesar de que contiene algunos informes de la policía secreta y de vigilancia hecha algunos sujetos considerados ‘peligrosos’, gran parte de la información que allí reposa versa sobre asuntos cotidianos y, en apariencia, inocuos: registros de reuniones, correspondencia, estudios, informes, censos y otras estadísticas. Después de develar el

² Abrams, Philip. “Notas sobre la dificultad de estudiar el estado (1977)”, *Virajes*, 2.2 (2000): 79-98.

³ Stoler 469.

contenido que subyace al poder estatal, se nos impone el reto de reflexionar de manera crítica sobre la elaboración de los documentos, comenzar a entender los archivos como lugares de producción del conocimiento, con el presupuesto de que estos no expresan ‘verdades’ en sí, por lo que se debemos prestar atención a las condiciones sociales y políticas en las que se produjeron esos documentos, y centrarnos especialmente en los sistemas de clasificación de territorio y población.

En los archivos subyace un tipo de inteligibilidad, de allí que sea tan prolíficos para entender cómo se han construido las visiones sobre un determinado grupo, los sistemas de clasificación de la población y el diseño de las políticas, por ejemplo: cómo con la ayuda de algunas disciplinas científicas, como el trabajo social de mediados del siglo XX, las estadísticas, los censos, las descripciones ‘etnográficas’, proveyeron una ‘epistemología’ que le permitió a las instituciones conocer las formas de vida de la gente: alimentación, creencias, roles al interior de la familia, disposición de la casa y determinar cómo esta influía (si tenían o no puertas o ventanas) en las relaciones que tales poblaciones establecían con el entorno y entre los miembros del grupo familiar (privacidad, intimidad). Ciencia que imponía, que busca transformar al otro, que juzgaba su forma de vida y que desarrolló matices autoritarios,⁴ pues el conocimiento se construía y utilizaba con el propósito de descalificar a ‘otro’, sus prácticas y sus valores.

Una lectura de los archivos a contracorriente puede contribuir a reconstruir las historias populares, “desde abajo”. Los investigadores que se inscriben en esta corriente hacen una lectura de las “fuentes de las clases altas desde abajo”, con el fin de revelar el lenguaje normativo y los sesgos inherentes a las percepciones estatistas”,⁵ en ocasiones en deviene en la muestra de los abusos de los poderosos o en el descredito a la información, haciendo un proceso de falseamiento del contenido de la fuente. Aunque este enfoque es fundamental, no es suficiente, es necesario acercarse también a los archivos leídos a corriente para entender cómo opera la inteligibilidad del poder, cómo intenta simplificar, clasificar, ordenar tanto la población como el espacio. Dar voz a quienes han sido acallados es una labor ardua e imprescindible, sin embargo, es importante replantear la manera de leer las expresiones escritas del poder, lo que contiene y lo que calla, aprender a leer entre

⁴ James Scott, *Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed* (Yale University Press, 1998)

⁵ Stoler 478.

líneas, lo que implica personificar el poder, darle vida y encarnarlo en la labor cotidiana de los funcionarios.

Como muestra Ann Stoler, lo que preocupaba a las autoridades holandesas con respecto a sus colonias, tenía que ver con aquellas familias jóvenes con gran número de niños que podían ser estimulados, por su ambiente y estilo de vida “hacia las sensibilidades culturales equivocadas”, lo que los hacía estar “peligrosamente fuera de lugar”.⁶ Los expertos encargados de realizar las comisiones de estudio y las estadísticas se aseguraban de seleccionar los “‘casos’ individuales para medir las gradaciones de la moralidad”,⁷ así como lo hacían las trabajadoras sociales durante la década de 1960 en Medellín, estas herramientas permitieron a los funcionarios predecir y neutralizar las ‘amenazas’ políticas, y al tiempo reafirmar su autoridad para observar, clasificar y vigilar a otros grupos sociales.

La exaltación de las características negativas de los casos individuales se fijan los derroteros sobre los cuales se juzga el grupo, de allí que cada familia no sea juzgada por las cualidades individuales, sino por pertenecer al grupo considerado diferente e inferior, si no es porque presenta síntomas de degradación, porque podría llegar a contagiarse, a aprender de los elementos malogrados tales conductas, de allí la legitimación de una pronta intervención, de la separación de los que pueden llegar a salvarse y los condenados. Esta estigmatización o prejuicio social opera como “un arma que los grupos superiores usan contra otros grupos en la lucha de poder y por conservar su predominio social”.⁸

La historia no es un mero preludio del presente como afirma Elias, pues a través de ella podemos comprender las “secuencias de largo alcance en el desarrollo social”,⁹ cómo se van constituyendo grupos y delimitándose las relaciones por medio del recurso al “nosotros” y los “otros”. La historia nos permite juzgar estos procesos y desnaturalizar las categorías que muchas veces tomamos como intrínsecas, que alcanzó como consagración las consideraciones construidas en torno a la distinción racial. La historia nos permite acercarnos a la comprensión de los sentidos y categorías que utilizan quienes en un determinado momento se abrogan el derecho de señalar y controlar a los demás; y como los últimos encuentran en tal estigma las bases para construir su identidad, ya sea como

⁶ Stoler 483.

⁷ Stoler 487.

⁸ Norbert Elias, “La relación entre establecidos y marginados”, *El extranjero. Sociología del extraño* (Madrid: Sequitur, 2012) 62.

⁹ Elias 74.

inmigrantes, latinos, pobres, humildes, y tejen un discurso reivindicativo que les permite resistir o enfrentarse a los poderosos.

La ciudad: el Estado dentro de las márgenes

Es común reconocer que el ámbito en el que las instituciones actúan, es decir, su zona de influencia, se encuentra en las ciudades, como centros donde se desarrollan las políticas, se construyen las sedes administrativas y residen gran parte de los funcionarios estatales. Una veta de investigación, prolífica e interesante, la han construido quienes se han acercado a la configuración o, mejor, el surgimiento y consolidación del poder estatal en las márgenes, es decir, en las zonas rurales, alejadas de los centros urbanos, donde se presupone una presencia mínima e incluso nula del Estado. Estos trabajos nos han llevado a cuestionar las categorías de nación, Estado y han hechos sugerentes aportes sobre las diferentes maneras y estrategias que utilizan tanto las instituciones como las comunidades para relacionarse, para gobernar las primeras; para obtener autonomía y resistir las segundas. Sin embargo, es necesario comprender, en igual medida, cómo ha actuado el Estado dentro de las márgenes, cómo se ha operado en el centro, sin caer en la tentación de asociar centralidad con eficacia del poder, y, en consecuencia, distancia con relajamiento de la dominación. Por ende, es necesario acercarnos a los intentos de ordenar las ciudades, y de educar la población que las habita, para conocer cómo se ha desplegado el poder (privado y público) en el ámbito urbano, y cómo los grupos sociales lo han experimentado, se han adaptado o resistido a tales imposiciones, creando nuevas maneras de habitar la ciudad.

¿Cómo se construyen las ciudades?¹⁰ Uno de los hitos de la historia latinoamericana ha sido la transición del campo a la ciudad, la inmigración de millones de campesinos a los centros urbanos a mediados del siglo XX. Ese desplazamiento trajo consigo profundas transformaciones demográficas, sociales, políticas y económicas y cambió de manera definitiva nuestras sociedades. Se ha aceptado que el proceso de urbanización se llevó a cabo mediante la informalidad, es decir, que no fue direccionado por instituciones ni se

¹⁰ Haremos uso indistinto de las categorías ciudad y urbe. Entendemos ciudad a partir del proceso de urbanización y masificación. No establecemos una distinción entre *urbs* y *polis* o *city*, pues consideramos que los intentos de ocupación y ordenación del espacio son parte de un proceso social y político, de conflicto entre grupos sociales que disputan beneficios materiales y simbólicos a través de su apropiación. Ciudad-urbe como parte del proceso de apropiación y distinción que los grupos sociales entre sí y que se puede leer en el espacio.

ajustó a un proceso de planificación espacial o social, de allí que nuestras ciudades sean descritas comúnmente, hasta el día de hoy, como producto de la improvisación y la desorganización social. Sin embargo, la urbanización hizo emerger una serie de conflictos por el espacio, que enfrentaron visiones del mundo y la sociedad, que se hicieron patentes a través de disputas por espacios que se debatían entre la ocupación de hecho, y el ‘derecho’ a la propiedad.

A través de algunas instituciones estatales, especializadas en la cuestión de la vivienda, las elites industriales y comerciales entraron en una contienda política en busca de obtener beneficios materiales y simbólicos, intentando hacerse con el gobierno de las ciudades, enfrentándose con sectores populares, en gran proporción compuestos por campesinos inmigrantes que, buscando nuevos horizontes de vida, invadían terrenos en las áreas centrales. ¿A qué problemas se enfrentaron estas comunidades? ¿A través de estos conflictos es posible comprender entonces cómo se construye una ciudad? Para dirimir algunos de estos interrogantes debemos acercarnos a las discusiones en torno a conceptos y métodos de la sociología urbana y política, la historiografía y las teorías sobre grupos subalternos.

Según E.P. Thompson la transición de una sociedad agrícola a una industrial incluye, a la par de un sistema de poder y relaciones de propiedad, una moralización de la conducta económica que se expresa a través de instituciones religiosas. Muestra cómo, de forma simultánea a la introducción de la disciplina del tiempo en el contexto industrial, comienzan a circular una serie de discursos sobre la depravación de las costumbres de algunos grupos sociales, asociados con la sociedad tradicional, aparece con más fuerza “crítica moral de la ociosidad”.¹¹ La preocupación de los reformadores sociales se centra en la niñez y en la juventud, en los niños harapientos que vagaban por las calles sin mucho que hacer, más que perder el tiempo, aprendiendo los vicios del juego, se proponía como solución la educación, “un entrenamiento en el hábito de la industriosisidad; cuando el niño llegara a los seis o siete años debía estar “acostumbrado, para no decir naturalizado al Trabajo y la Fatiga”.¹²

¹¹ Edward Thompson, “Tiempo, disciplina y capitalismo”, *Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, de Edward Thompson, 237- 293 (Barcelona: Editorial Crítica, 1984) 280.

¹² Thompson 276.

Ante la evidencia de un relajamiento de las costumbres los reformadores sociales no solo se preocuparon por la juventud descarriada, se ocuparon en clasificar los pobres y en establecer distinciones entre quienes podían ser arrebatados de los brazos de la negligencia y quienes estaban condenados a llevar una vida de ‘excesos’ y libertinaje. Las leyes de pobres nos hablan entonces del disciplinamiento de la sociedad fuera del ámbito de la producción fabril. Pero ¿Quiénes eran dignos de asistencia? Aquellos que se podían transformar por medio de una serie de disposiciones, solo quienes podían ajustarse a algunos requerimientos: jóvenes, en el seno de una familia, ojalá cristiana, que pudiesen reencauzar su comportamiento y aprender valores ajustados a la civilización y la industria. Los pobres que eran clasificados como merecedores de la caridad debían ser separados de los elementos depravados con el fin de interrumpir la influencia contaminante y lograr así su transformación.

David Ward¹³ evidencia cómo en las ciudades industriales europeas se estableció una correlación entre aislamiento espacial y social, con patrones de vida desviados. Los pobres no solo eran depravados, sino que se encontraban congregados, amplificando las consecuencias negativas de la degradación, especialmente hacia los niños y jóvenes que habitaban tales guetos, pues esa era otra característica: el aislamiento. Los habitantes de los *slum* se alejaban cada vez más de los valores de la sociedad industrial, se los señalaba como territorios donde proliferaba la delincuencia, la pereza y el libertinaje. Ward muestra cómo durante el siglo XIX tuvo lugar un cambio de actitud hacia los problemas sociales, bajo el supuesto que “la pobreza y otras discapacidades podían ser reformadas no por ayudas caritativas o políticas de bienestar social, sino por el retiro de los pobres a instituciones que los instruirían en las formas de la sobriedad y la autodisciplina y que servirían como ejemplo de una administración ordenada de los asuntos humanos al resto de la sociedad”.¹⁴

Tales formas de vida desviada como producto del aislamiento social y de la coexistencia en ambientes sobrepoblados, tenían como una vía para su neutralización la reubicación de los pobres en nuevos entornos donde se les debían proporcionar otras condiciones de habitabilidad con respecto a los espacios, las divisiones al interior de la vivienda, privacidad, sin olvidarnos de la (re)educación.

¹³ David Ward, “The Victorian Slum: An Enduring Myth?”, *Annals of the Association of American Geographers*, 66.2 (1976): 323-336.

¹⁴ David Ward 324.

Los pobres eran definidos como un grupo social distinto, debido a que el aislamiento social y espacial había hecho emerger una cultura, la ‘cultura de la pobreza’. Con el desarrollo de estas concepciones y ante el apremio con que debían ser disueltos esos focos de insurrección, emergieron disciplinas especializadas en el conocimiento y tratamiento de sus habitantes. El trabajo social emerge como ingeniería social. Las trabajadoras sociales no solo tuvieron la misión de desentrañar las particularidades del mundo de los tugurios, sino que eran las encargadas de intervenirlos, de educar a los pobladores, de proporcionarles los elementos que le facilitarían su adaptación al medio urbano, y, por ende, velar por el abandono del comportamiento desviado. La premisa básica era conocer para cambiar, acercarse al otro para transformarlo. Describir y prescribir.

Pero la solución, más que el confinamiento en un nuevo espacio, era lograr a través de ese traslado a un ambiente controlado ofrecerles una “influencia moral legítima”.¹⁵ De esta manera se establecía una vinculación sistemática de la moral con lo económico, la disposición y el comportamiento el trabajo se aducían como explicación principal al desajuste que representaban quienes no lograban insertarse de manera satisfactoria en la producción industrial. Las investigaciones sobre las familias pobres pretendían evidenciar su falta de moral, la negligencia, la pereza y la relajación de los valores, más que una falta de elementos materiales para sobrevivir en el grupo, los pobres carecían de educación.

Es posible rastrear referencias similares en la Francia del siglo XIX, como muestra Donzelot, los denominados filántropos aseguraban que el hacinamiento favorecía la promiscuidad y el contagio, un funcionario, en una de las comisiones de estudio de las regiones manufactureras francesas que “allí donde el trabajo es incierto y los niños son abandonados a sí mismos, florecen “el pauperismo y las utopías”,¹⁶ niños que al crecer podrían ir por el camino de las revueltas y engrosar las filas de la rebeldía en la Comuna, que atizaron las preocupaciones de Napoleón III y el barón de Haussmann, de allí que las medidas para reformar las costumbres de los potenciales revolucionarios debía implementarse una renovación urbana del centro de París. En este caso, los reformadores proponían como remedio a la insurrección restricciones al vagabundeo de los niños, centrados en tres componentes: evitar tanto el “abandono (degradación física), apropiación (explotación),

¹⁵ Jacques Donzelot, *La policía de las familias* (España: Magazín de troncos, 1990) 67.

¹⁶ Donzelot 72.

peligrosidad”.¹⁷ Para de esta manera introducir la civilización en el hogar a través de los niños, la *policía de las familias* tenía su punto de apoyo en un complejo tutelar de la infancia. El criterio para la distribución de las ayudas tenía en cuenta “antes al niño que al anciano, porque “después de la infancia aún queda toda la virilidad, mientras que la mayor parte de los ancianos indigentes ha vivido durante ella como hombres indignos de ser ayudados más tarde”. Antes a la mujer que al hombre, ya que, a través de ella, se ayuda también al niño.¹⁸

En los intentos de control convergen estrategias de dominación material (quién tiene la potestad para decidir los usos que se dan a sectores de la ciudad), y una concepción, un discurso y una serie de iniciativas orientadas a transformar a grupos específicos de población según la visión moral del grupo dominante, ambas iniciativas destinadas a imponer a otras las ideas y prácticas, y a impedir que otros desarrollen o disientan de su visión, idealizada de la ciudad y la sociedad.

¿Por qué fue tan incómoda la presencia de unos pobres y los de otros no para la configuración de una ciudad? El espacio no puede verse como algo arbitrario para centrarse en la clasificación de la población, ya que, por ubicarse en una zona determinada de una ciudad, por ejemplo, ciertos grupos pueden ponerse en el punto de mira de los funcionarios, ser vistos como obstáculos en la consolidación de un proyecto de ciudad industrial, comercial o portuaria y por esto entran en el punto de mira de los funcionarios, por las presiones ejercidas por industriales, comerciantes o banqueros, para investigar, desplazar o controlar algunos individuos o grupos. Los tugurios en la en Colombia fueron una muestra de ello, pues asentaron cerca de terminales marítimos, centros turísticos o zonas industriales, que habían sido pensados por los funcionarios, en muchas ocasiones los propios empresarios, comerciantes o banqueros, como ‘espacios en ‘blanco’, sobre los que se había superpuesto en el plano una serie de construcciones acordes con la visión de arquitectos, industriales y comerciantes, guiados por la promesa de apuntalar con ellos un nuevo potencial económico, de allí que erradicar, es decir, desalojar, desplazar, trasladar, mover la población a un espacio en el que no interfiera con tales proyecciones, con el alumbramiento de esa ciudad en gestación, se convirtió en una misión fundamental a la que

¹⁷ Donzelot 81.

¹⁸ Donzelot 68.

se dedicaron varias instituciones, creadas con esa finalidad como la Fundación Casitas de la Providencia en la ciudad de Medellín.

Pero la Fundación Casitas no sólo se ocupó de desalojar la población que interfería con obras de renovación urbana en el centro de la ciudad, sino que intentó implementar un programa de ‘rehabilitación social’ en los barrios construidos para alojar a la población erradicada, en teoría, la totalidad de las familias no eran aptas para el traslado a tales barrios, por lo que debían pasar por una serie de filtros o criterios de selección. ¿Por qué se hizo tanto hincapié en los criterios de selección? Aunque en la práctica no se observaron con la misma regularidad con que se registraron, los criterios de selección de las familias que podían ser beneficiarias de las ayudas estatales se amparaban en una particular visión de la pobreza, que, última instancia, evidencia las ansiedades de los poderosos, lo que nos permite comprender como se gesta y desarrolla el poder, pues solo se refuerza con un sentimiento del ‘nosotros’ y un discurso cada vez más general y amenazante sobre los ‘otros’, quienes eventualmente pueden llegar a ocupar posiciones de poder. La angustia ante la posible pérdida la posición, capacidad de acción y control ante nuevos valores, como el socialismo, por ejemplo, por medio de los cuales otros grupos podían conquistar espacios políticos, y en efecto en muchas ocasiones fue así, los sectores populares que emergían como nuevos sujetos sociales en el contexto urbano apoyaron líderes de organizaciones de izquierda, pues a través de ellas podían reivindicar algunas de sus demandas. Por lo que es importante comprender cómo se construye y se consolidan los procesos de diferenciación social, como la base de la desigualdad entre grupos sociales, y al mismo tiempo, cómo tal diferenciación se espacializa y sirve para impulsar los intentos de ordenación del espacio urbano. En la diferenciación reposan los elementos del poder, en la distinción que un grupo hace y reafirma sobre otros, en muchos casos se los tacha como moralmente débiles, inferiores, y eso justifica tanto la vigilancia (estudio y seguimiento) como el control, y, en última instancia, la dominación. Estos ejercicios permiten entonces que el Estado haga una revisión de su propia factibilidad.¹⁹

Es necesario reconstruir una historia de la ciudad, de cómo se edificó, se urbanizó, y, a la par, una historia de los habitantes, de los grupos que disputaron espacios de la ciudad y al mismo tiempo construyeron referentes, prácticas, y maneras diferenciadas de habitarla.

¹⁹ Stoler 486.

Un relato sobre la construcción de la desigualdad de recursos y poder, pues tales diferenciaciones dan cuenta de disputas en el plano simbólico y material, como intentos de ordenar el espacio y la sociedad, aunque tal vez no exista tal distinción, pues a través de uno se lograba el otro, con los desplazamientos de la población venía el disciplinamiento; pero sin la promesa de cambiar al otro, de adaptar al ‘marginado’, al extranjero en la ciudad, no hubiese sido posible ese desplazamiento y conquista de ciertos espacios de la ciudad.

Pero la ciudad constituye, paradójicamente, un espacio donde gobernar se convierte en una tarea ardua, pues posee un carácter intrínsecamente turbulento y contradictorio,²⁰ no se conforma con los intentos que se empeñan en homogeneizarla para consagrar un orden político que facilite el gobierno de un grupo sobre otros. Quien gobierna, aunque se coloque en el centro de mira, siempre alberga la sospecha, muchas veces fundada, de que bajo sus ojos hay cada vez más fragmentos que se escapan de su dominio, un mundo subrepticio que se emplaza cerca de él, que se encuentra tan cerca de él que le dificulta la distinción de las propias formas. De esta manera quienes pretenden dominar buscan, de forma cada vez más desesperada, exagerar aquello que desean suprimir, campando en las generalizaciones y los prejuicios, estiran, agigantan los defectos del otro, y terminan, por ejemplo, asociando la pobreza con la delincuencia, la suciedad o la promiscuidad; y, por miedo al contagio, a la contaminación de sus propios elementos traslada constantemente la sospecha al ámbito a sus dominios, y castiga duramente a quien considera le ha traicionado. De esta manera la ansiedad y la angustia son sentimientos que afectan también a los poderosos que, aunque trazan un plan, la incertidumbre termina siendo también para ellos, un imperativo, pues no se sabe en qué medida su ejecución de una política ocasionará una reacción desventajosa para la propia posición, batalla pues es un terreno anegadizo donde todo el tiempo está en juego su supremacía, y, a pesar de tener una posición ventajosa frente a los demás grupos sociales, nunca alcanza la seguridad de la eficacia de su poder, pues no sabe cuánto durará o qué contradicciones surgirán en el proceso.

Como diría Manuel Delgado refiriéndose a la *urbs*, esta no constituye la sociedad, “sino la sociedad produciéndose”.²¹ El problema de la integración, la homogeneización del

²⁰ Manuel Delgado, *Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis* (Medellín: Universidad de Antioquia, 1999) 23.

²¹ Delgado 23.

proyecto modernizador tiene lugar en ella, de construcción de una identidad, de los referentes que dan vida a la nación, donde tiene lugar la centralización. Pero ¿Cómo se puede domeñar aquello que se ha reconocido como el escenario de la diversificación social?

Si la marginalidad no era la cualidad intrínseca de un grupo, sino un atributo, aplicado desde fuera, es necesario comprender cómo se construyó. La llegada de campesinos inmigrantes se entendía como una intrusión inevitable, se convirtieron en un grupo al que se le atribuían características negativas, como el atraso, se le señalaba como ‘incivilizado’; pero no solo se exaltaba su cualidad sino lo peligroso de la cantidad, de lo ‘numeroso’ que podía llegar a ser, hasta el punto de considerar que se trataba de una plaga, de un mal que se reproducía, se propagaba, contaminaba y obstaculizaba el progreso de una ciudad. “De este modo, los inmigrantes pueden ser pensados como una masa indeseable que ha conseguido infiltrarse hasta el corazón mismo de la *polis*, y que se ha instalado allí como un cuerpo mórbido y en continuo crecimiento, un tumor maligno o una infección de los que hay que interrumpir el avance”.²²

Algunos autores hacen hincapié en la complementariedad que opera a través de la distinción entre grupos, aunque parezcan antagónicos. La marginalidad, por ejemplo, constituye una categoría que se construyó y fue utilizada para reconocer y denominar un grupo social, no fue una desinteresada descripción de un conjunto de individuos desviados. La atribución de características negativas afianza las relaciones entre el grupo que señala, pues de ellas obtiene la legitimidad para diseñar e intentar imponer políticas, consolidando de esta manera su propio poder, su autoridad para gobernar e imponer un ideal de ciudadano, de habitante. Señalar a otros también puede ayudar a eximir de la responsabilidad a quienes gobiernan, pues se puede culpar a otros grupos de los males sociales, legitimando los intentos de control de un grupo con respecto al otro, con el argumento que trabaja para salvaguardar del orden social.

El orden urbano denota un intento de legibilidad del espacio (sectores-funciones), de simplificación, la reconstrucción de los centros urbanos implica el necesario desplazamiento de los pobres que los habitan a la periferia, como evidencia Scott

²² Delgado 91.

refiriéndose a Haussman en el caso de París, proyecto que se amparó en la bandera de una ciudad económicamente próspera y militarmente segura.²³

En el caso de la Fundación Casitas de la Providencia las trabajadoras sociales eran las arquitectas y constructoras del nuevo orden social pensado por la élite antioqueña. Empeñándose en producir “enormes cambios en los hábitos de vida de la gente, el trabajo, los patrones de vida, conducta moral y visión del mundo”.²⁴ Scott designa tales empeños como autoritarios, ya que operan bajo el supuesto de que la gente es incivilizada, que sus valores y prácticas son inadecuados, de allí que deban someterse a un proceso de transformación, de educación en los ‘verdaderos’ valores. Las trabajadoras sociales acompañaban los ejercicios de descripción de las familias de una serie de prescripciones dirigidas a garantizar ambientes armónicos, facilitar ejercicio del gobierno, además de contener y suprimir las expresiones conflictivas, es decir la disidencia y el inconformismo. Decisiones al margen de los criterios técnicos y científicos expuestos por ellas.

Hasta aquí es posible afirmar entonces que las concepciones sobre la pobreza determinaron el papel del estado –instituciones públicas- y otras instituciones de cuño privado (caridad, beneficencia), constituyendo un conjunto de relaciones sociológicas entre grupos sociales diferenciados, especialmente en la etapa o proceso de inmigración de campesinos a la ciudad, lo que produjo un extrañamiento (marginalización) de estas poblaciones, que justificó su desplazamiento de las áreas centrales. Esto evidencia que las relaciones de poder en el contexto urbano entre estos grupos sociales se materializaron en la disputa por el centro de la ciudad; y, en el plano simbólico, con los intentos de dominación política en los barrios, con los cuales las élites buscaban direccionar el cambio social, en síntesis, las formas de vida y relacionamiento de las familias consideradas ‘marginales’.

Sin embargo, aquí partimos del supuesto que los subordinados tienen una vida social más allá de los límites impuestos por el poder.²⁵ Con la convicción de que aquellos que experimentan desfavorables condiciones de vida, construyen un discurso que les permite comunicarse entre sí, fuera de la égida de los mecanismos de vigilancia y control de los poderosos. Aunque el discurso oculto no es exclusivo de los sectores populares, pues también las elites tienen mecanismos de comunicación que se ocultan a la vista del público,

²³ Scott, *Seeing like* 63.

²⁴ Scott, *Seeing like* 89.

²⁵ James Scott, *Los dominados y el arte de la resistencia* (México: ERA, 2004) 19.

es el discurso público, lo que puede ser dicho, lo que les permite eufemizar su poder; mientras que para los sectores populares el discurso oculto implica la deslegitimación de la dominación que en apariencia logra la élite, el discurso público de los subalternos puede confundirse con la aceptación pasiva de las imposiciones de los poderosos. De allí que se privilegie el discurso público de las elites (documentación) y el discurso oculto de los sectores populares (prácticas de resistencia, contravenciones simbólicas al poder). El discurso público ofrece siempre pruebas convincentes de hegemonía²⁶ que se expresa en los intentos de ocultar o por lo menos matizar los conflictos. Privilegiar el discurso público nos puede llevar a la conclusión de que los sectores populares aceptan los condicionamientos de las instituciones o se resignan a acatarlos, y, en consecuencia, actúan pasivamente ante el poder.

Ambos discursos se encuentran interrelacionados por lo que debemos acercarnos a cada uno de ellos, pues aportan piezas sobre un determinado proceso social, histórico, que tenga como presupuesto una imagen dinámica de las relaciones de poder, en la que tanto la elite como los sectores subordinados tienen capacidad de acción e incidencia dentro en los acontecimientos, en consecuencia, son ambos los que determinan cualquier configuración sociohistórica. De allí deriva un esfuerzo metodológico por comprender tanto las expresiones del discurso público de las elites, como el discurso oculto de los grupos subordinados. Por un lado, las instituciones y sus iniciativas; por otro, la experiencia social que las adapta y las transforma de manera particular.

Ceñirse a la lectura de la documentación histórica implica aceptar y adoptar “el *autorretrato* de las elites dominantes, donde estas aparecen como quieren verse a sí mismas [...] una construcción discursiva muy partidista y parcial”,²⁷ aunque su lectura es necesaria porque delata las aspiraciones de dominación por parte de las elites, no es suficiente para dar cuenta del proceso social. En consecuencia, para evitar la tentación de interpretar el contenido de los documentos como la realidad, de extrapolar intenciones de dominación con sus resultados, es indispensable comprender que los documentos de archivo hacen parte del discurso oficial, por ende, están plagados de “eufemismos y silencios”,²⁸ que tienen como propósito ocultar las contradicciones y conflictos que se presentan a quien pretende

²⁶ Scott, *Los dominados* 27.

²⁷ Scott, *Los dominados* 42.

²⁸ Scott, *Los dominados* 76.

controlar, pues es en el reconocimiento de ese terreno de inflexión donde descansa la posibilidad de disidencia de los subalternos; es necesario entonces contrastar la versión oficial con las versiones no oficiales que tienen como recurso principal la memoria, la historia oral, de los referentes contruados a partir de la cotidianidad.

Conformarse con la versión de la Fundación Casitas de la Providencia representaba entonces la reafirmación del retrato que la elite de Medellín construyó de sí misma, y, en consecuencia, aceptar que las instituciones se transforman como consecuencia del desinterés o la voluntad de los funcionarios, no por el apremio y los condicionamientos que imponen las circunstancias, en las que otros grupos sociales han tenido una activa participación. De manera que una visión dual e interrelacionada de las relaciones de poder entre grupos sociales, tanto desde la teoría como desde el método, nos permite acercarnos a la realidad presente y pasada con el fin desnaturalizar el poder, dejar de entenderlo como monolítico, arbitrario, incólume, invariable o estático; lo que favorecerá el reconocimiento de la capacidad de los sectores subalternos, nunca inermes, resignados o aceptando sin más valores impuestos por los poderosos.

Interpretar, por ejemplo, los silencios en que se desarrolló la resistencia de los habitantes de Villa Socorro, como los que se encuentran en la documentación de Casitas, sin tener una versión contrastada dejaba por fuera muchos de los conflictos y solo en momentos álgidos, con la mención tímida de algunos personajes ‘problemáticos’ para los funcionarios permitían entrever la existencia de una serie de obstáculos a la acción institucional, y un reconocimiento, tácito, a la capacidad de acción de los sectores populares.

Es necesario reflexionar en torno a algunas perspectivas teóricas y metodológicas que sirvieron como referente y antecedente de esta investigación. En primer lugar, los estudios subalternos, que tuvieron su auge durante la década de 1960 y que apostaba por una lectura de la historia en clave de los sectores populares. La corriente historiográfica denominada “historia desde abajo”, cuestionó el papel que se daba a los grupos subalternos en la historia, apartándose de las tendencias que entendían a tales grupos como carentes de conciencia y víctimas pasivas de la historia,²⁹ reconociéndolos como partícipes en la construcción de los procesos sociales. Los investigadores de esta corriente se remitieron al

²⁹ Saurabh Dube, “Historias desde abajo en India”, *Estudios de Asia y África*, 32.2 (1997): 219.

pasado en busca de las evidencias de descontento social que daban fe de una desobediencia a las normas impuestas por el poder, y que se manifestaban en acciones cotidianas de resistencia, que iban desde la apatía hasta la contravención de las leyes, manifestaciones que, por su naturaleza, no quedaban registradas en la documentación de archivo.

Como muestra Dube las posturas que contravienen el orden impuesto se pueden sustentar en una visión religiosa del mundo y en una acepción de las categorías de gobernante y gobernado.³⁰ La aceptación de estos valores, que pueden ser compartidos con los dominadores no debe entenderse como una adopción indiscriminada, ya que los sectores subalternos realizan sus propias lecturas sobre la religión y política, de allí que surja la heterodoxia y organizaciones políticas que se apoyan en esas interpretaciones. Aunque religión y política sean los pilares del poder, en ellos también se encuentran las claves que los sectores populares utilizan para subvertir ese orden, ya sea exigiendo una observación estricta por parte de una elite que se ha desviado en la práctica de los valores que predica, o en una reinterpretación casi radical de los valores, como el evangelio leído en clave de los sectores populares hecha por sacerdotes jóvenes en los barrios reciente fundación en Medellín durante las décadas de 1960 y 1970.

En el caso de la religión como bastión para la resistencia de los sectores populares urbanos se trataba de una “proceso cultural creativo de reinterpretación, apropiación y subversión de símbolos, ideas y prácticas”³¹ del catolicismo, que se ajustaron a los fines de estos grupos y les permitieron hacer frente a los desalojos y los avances de la acción policial, en muchos casos obtuvieron un margen de maniobra que obligó a las instituciones a negociar o a replantear las estrategias de control.

Como nuestro interés particular se centró en el funcionamiento de las instituciones estatales, de la cotidianidad y la formación del estado, debíamos recurrir a un enfoque que nos permitiera recoger las reflexiones sobre los sectores subalternos, que entendiera a las instituciones como parte de la sociedad, y no como una unidad separada de ella, como si actuara con una lógica propia. Una perspectiva analítica que nos permitiera estudiar el Estado “no por separado, como una unidad formalmente cerrada y autónoma, sino como parte de un proceso mayor, que lo incluye”.³²

³⁰ Dube 230-231.

³¹ Dube 214.

³² Joel Migdal, *Estados débiles, Estados fuertes* (México: Fondo de Cultura Económica, 2011) 11.

Philip Abrams en el año 1977 con sus *Notas sobre la dificultad de estudiar el estado*, nos invitaba a asumir el reto de comprender la construcción histórica del Estado, pues gracias a ella podríamos encontrar los fundamentos de su poder: en el ocultamiento permite la institucionalización política, su separación de la sociedad, que nos lleva a suponer que en existe un plano de autonomía, en el que secretamente construye y reproduce el poder que termina imponiéndose sobre la sociedad. Aseguraba que mientras nos sigamos vedando del estudio de las instituciones, de su funcionamiento y cotidianidad, contribuiríamos al proceso de reificación del poder estatal, y en consecuencia a pensar y seguir refiriéndonos al ‘estado’, ‘elites’, ‘poder’ como estructuras invariables, ahistóricas, monolíticas y en último término demasiado poderosas, como difíciles de permear o siquiera pensar en oponerles resistencia. Como resultado tendremos una negación de conexiones y conflictos que nos muestran una incompatibilidad entre su imagen y la eficacia de la dominación.³³ Debemos tener en cuenta entonces que las instituciones se constituyen como resultado de una práctica colectiva, por ende, son producto de

“una serie de posturas fugazmente unificadas, sin consistencia sostenida de propósito, relacionadas con asuntos transitorios. La duradera unidad de práctica que el conjunto de instituciones políticas es capaz de lograr, le es sobreimpuesta, de manera palpable, por intereses y organizaciones económicas, fiscales y militares “externas”.”³⁴

En este sentido Migdal propone el reconocimiento del Estado como limitado, configurado por “una imagen un conjunto de prácticas que no siempre van en el mismo sentido”,³⁵ de una imagen de coherencia, racionalidad apartada de los conflictos, y al tiempo, en la práctica, como definido por las acciones de una serie de funcionarios que rara vez se ciñen a los estrictos marcos fijados por la teoría (imagen). Por ende, siempre se debe tener en cuenta la dimensión empírica de los programas estatales, cómo son llevados a la práctica y qué implicaciones trae para las instituciones y las personas que son intervenidas por ellos. Migdal nos incita a estudiar el Estado en la sociedad, para, por medio de enfoques teóricos, evidenciar las limitaciones reales de su poder, y de esta manera poder comprender “la transformación mutua del estado y de otros grupos sociales”.³⁶

Como lo expresa Migdal esta corriente del estudio del Estado en la sociedad se encuentra en sintonía con las teorías subalternas del sur de Asia y los trabajos de James

³³ Abrams 95.

³⁴ Abrams 96

³⁵ Migdal, *Estados débiles* 13

³⁶ Joel Migdal, “Estudiar el estado”, *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, 8 (2008): 23

Scott, que cuestionaban la concepción mecánica de la dominación y el cambio social, ignorando el papel de los sectores subalternos en las transformaciones en la sociedad. Es posible afirmar entonces que esta perspectiva es una secuela que surgió después de replantear el papel de las gentes del común en la historia, lo que ha devenido en la reafirmación de la construcción de la sociedad como un proceso complejo constituido por las consecuencias no buscadas que emergen de los conflictos sociales, solo en los encuentros y los enfrentamientos de los grupos sociales es posible pensar la sociedad, la sociedad como producto de las relaciones, no de intenciones o acciones aisladas.

¿Por qué estudiar la Fundación Casitas de la Providencia? por qué no se hacía referencia ni era común encontrar trabajos sobre esta institución, su nombre era desconocido, y solo la mencionaban aquellos que habían trabajado con vastedad la época y alguna documentación relacionada o producida por esta institución; aun así, había muchos malentendidos y generalizaciones con respecto a su existencia, desaparición, enfoque y la incidencia que había tenido en la historia de Medellín, de ahí que fuese difícil valorar la importancia de estudiarla.

La investigación tenía por objeto el estudio de la Fundación Casitas de la Providencia para dar cuenta su incidencia como institución estatal encargada de la erradicación de tugurios en la ciudad de Medellín durante la década de 1960. Los hallazgos contribuyeron a comprender cómo a partir de ella se creó una particular visión sobre la pobreza en algunos sectores de la ciudad, que fue la base de los programas de erradicación, es decir, de desalojo de las familias que habitaban los tugurios de las zonas centrales de Medellín, para después proveerles casa en barrios construidos por la Fundación en el norte de la ciudad y, una vez allí, ejecutar programas de rehabilitación social.

Para comprender los programas de la Fundación fue necesario establecer una distinción, a la manera en que James Scott en *Los dominados y el arte de la resistencia* utilizó para diferenciar entre dominación material y simbólica. La primera tiene que ver con los beneficios que las elites extraen de los grupos subordinados, ya sea en forma de trabajo, dinero, servicios; la segunda tiene que ver con las pretensiones de conseguir muestras simbólicas como respeto, ciertas formas de conducta y una actitud de humildad y aceptación de las reglas que los grupos dominantes establecen para los subordinados. En el caso de Casitas de la Providencia lo podemos evidenciar por medio de sus programas, el

primero, la erradicación de tugurios en el centro de la ciudad como forma de garantizar espacios para la materialización del ideal de ciudad industrial por parte de elite y los beneficios de extraídos de la valorización del suelo urbano en una fracción del eje del río, debido a la concentración de capital y servicios; por otro lado, la consecución de beneficios derivados de una dominación simbólica en los barrios por medio del programa de rehabilitación, es decir, de sumisión de la comunidad y la aceptación de los reglamentos de la Fundación.

La pregunta por la aplicación de los programas de la Fundación Casitas de la Providencia surgió después de una lectura de la documentación histórica de archivo, en la que comúnmente “se tiende a rescatar una relación hegemónica de las relaciones de poder”.³⁷ Quedaban por fuera de la versión oficial algunas cuestiones inexplicables, como la presencia fragmentaria y esporádica de algunos personajes y situaciones que parecían velar un conflicto, un descontento y un discurso oculto, que por sus propias características no aparecía en los documentos. Por ejemplo, en momentos álgidos, se mencionaba la presencia de organizaciones como Provivienda o, en medio de series documentales como actas y correspondencia, aparecían informes remitidos por la Policía Seguridad y Control sobre seguimientos al sacerdote Vicente Mejía, quien fue vicario del barrio Villa Socorro, y a partir de esa experiencia radicalizó su postura, hasta identificarse como un abanderado de las reivindicaciones y la resistencia abierta de los sectores populares, especialmente de los tugurianos, en contra de autoridades como Casitas de la Providencia, la policía y la jerarquía eclesial.

Como propósito era hacer una etnografía de los archivos que permitiera develar la formación del Estado a partir de las prácticas cotidianas de algunas de sus instituciones, en este estudio, de Casitas de la Providencia, fue necesario interpelar a los habitantes del barrio Villa Socorro, en un intento por develar su capacidad de acción y las transformaciones operadas en la Fundación para controlar una población numerosa. Los habitantes del barrio me brindaron una historia llena de contradicciones, conflictos y transformaciones inesperadas, tanto para la institución como para sus propias vidas, que no se encontraban consagradas o siquiera enunciadas en los documentos consultados en las primeras fases de investigación.

³⁷ Scott, *Los dominados* 21.

Como lo expresan los investigadores Patricia Londoño, Alba Serna y John Betancur, en un estudio general sobre las formas de movilización política en barrios populares de Medellín entre 1960 y 1980, “en las actas de la Junta de la Fundación [Casitas de la Providencia] no se consigna comentario alguno acerca de la forma violenta como se dio dicho traslado [a Villa Socorro]. Es difícil conocer la razón del silencio acerca de los conflictos entre la institución y los habitantes de los tugurios”.³⁸ Estos investigadores adujeron como posibles causas el deseo de testimoniar los aspectos ‘loables’ de la Fundación, o una omisión por considerar estos eventos como algo esperado, que conocían todos los miembros de la institución, por ende, registrarlos en los documentos pudo ser considerado como secundario o innecesario.

La historia de la Fundación Casitas de la Providencia, entidad encargada de la erradicación de tugurios en la ciudad de Medellín, permite develar cómo se configuró el poder en un intento de salvaguardar sectores estratégicos para el crecimiento de la ciudad, así como un intento de educar a una población en un ambiente signado por la disputa ideológica, un esfuerzo por materializar una utopía en un momento de experimentación social que tuvo implicaciones profundas para la historia de Medellín. La Fundación Casitas de la Providencia evidencia que, a partir de las instituciones es posible analizar los intereses, conflictos y disputas que configuran la sociedad en el contexto urbano.

El barrio Villa Socorro fue construido por Casitas de la Providencia, a la par de otros barrios, sucedió al barrio Santander, y precedió a los barrios Efe Gómez y Pablo Sexto, edificados finalizando la década de 1960. Se estudió este caso por varias razones: en principio porque fue el proyecto masivo de construcción de vivienda —mil viviendas construidas por etapas—, en el cual la Fundación Casitas implementó un modelo de control social denominado ‘Rehabilitación’, orientado a corregir hábitos de las familias trasladadas de los tugurios, condicionando los espacios de sociabilidad, la casa y la familia, la parroquia, los lugares de encuentro, las relaciones entre vecinos y la organización política. En segundo lugar, debido a su densidad e historia, pues muchos de los habitantes que llegaron en aquella época aún habitan el barrio y conservan la memoria de su experiencia, dando cuenta de los sentidos que atribuyeron a muchos de los programas de la Fundación y

³⁸ Alba Serna, Patricia Londoño, y Jhon Betancur. *Composición social y movilización política en barrios populares de Medellín* (Medellín: Departamento de Sociología- Centro de Investigaciones Sociales. Universidad de Antioquia, 1981) 36.

de otras instituciones que tuvieron presencia en el barrio. Por último, porque es un caso representativo de la transición de programas públicos al ámbito privado, evidenciando cómo progresivamente la cuestión de la vivienda pasó de la administración estatal a la privada, a organizaciones religiosas y de beneficencia, como la Fundación Almuerzo Navideño y la Congregación de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz.

La historia de Villa Socorro evidencia cómo este barrio se convirtió en un espacio social donde comenzó a gestarse un discurso oculto, de resistencia a las restricciones que pretendía imponer Casitas de la Providencia. Después del acercamiento a las prácticas cotidianas de los pobladores de Villa Socorro, sus sentidos y la configuración de una experiencia y un discurso colectivo, fue posible reconstruir una “imagen dinámica de las relaciones de poder”.³⁹ Lo que demuestra que en la búsqueda por los sentidos y las experiencias de los habitantes urbanos es posible construir nuevas interpretaciones sobre la acción estatal en relación con sectores populares, que permiten comprender la incidencia y las adaptaciones a las que debe someterse el poder para sobrevivir y garantizar su supremacía.

Para lograr esta versión contrastada de la historia de la Fundación Casitas de la Providencia se recurrió a diversas técnicas de investigación y materiales: la investigación documental, se centró en la consulta y sistematización de documentos producidos por la Fundación Casitas de la Providencia e instituciones como Planeación Municipal o el Concejo de Medellín, en series documentales como actas, correspondencia, estudios socioeconómicos e informes de las trabajadoras sociales (censos, recomendaciones, programas, estadísticas); la historia oral, realización de entrevistas a los habitantes de los barrios Andalucía, Santa Cruz y Villa Socorro, además de una trabajadora social de la Fundación, se complementó con entrevistas realizadas por los investigadores del Grupo de Investigación en Historia Social al gerente regional del Instituto de Crédito Territorial, Diter Castrillón, y al sacerdote Vicente Mejía, primer vicario del barrio Villa Socorro.

Para situar los conflictos en el ámbito urbano se recurrió a técnicas de lectura territorial (conflictos y usos del espacio urbano), apoyadas en los sistemas de información geográfica, que sirvieron para denotar las transformaciones en los espacios intervenidos por la Fundación. Se recurrió a la cartografía base de Planeación Municipal, el plano de “Las

³⁹ Scott, *Los dominados* 28.

Amarillas de Combiser” conservado por el Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, y algunas aerofotografías (1959, 1976, 1981-83) que conserva el Centro de Documentación de Planeación Municipal.

Un recurso fundamental para comprender las concepciones de la Fundación con respecto a los habitantes de tugurios fueron las tesis de las trabajadoras sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, que conserva la biblioteca de esa institución.

Además, se consultaron algunos estudios realizados en la década de 1950 por el Instituto de Crédito Territorial en el Caribe Colombiano (Cartagena) en la Biblioteca Luis Ángel Arango, así como la consulta y sistematización de alguna bibliografía que sirvió de referencia a las trabajadoras sociales durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente los trabajos de Josephina Albano y Caroline Ware.

Archivos personales de algunos habitantes de Villa Socorro, de la Fundación Almuerzo Navideño –actualmente Fundación de Atención a la Niñez (FAN)- y Luz Posada de Greiff, asistente de Jorge Restrepo Uribe, fundador de Casitas de la Providencia, durante la década de 1980.

Por último, se consultaron las historias de barrio en la colección patrimonial de la Universidad de Antioquia, asimismo la colección de prensa, tanto en la UdeA como en la Biblioteca Pública Piloto.

El trabajo se encuentra dividido en tres capítulos. El primer capítulo da cuenta del contexto en el que tiene lugar el surgimiento de la Fundación Casitas de la Providencia que se inscribe en un contexto de cambio social, determinado por la urbanización acelerada generada por la migración de campesinos a la ciudad de Medellín durante las décadas de 1950 y 1960. Se ocupa de la construcción de una imagen de los tugurios, los intereses que justificaron la creación de la Fundación, en pocas palabras, las políticas de erradicación que impulsaron el desplazamiento de población del centro a la periferia, sustentadas en la segregación social y espacial de los pobres; y en última instancia del conocimiento de la ciudad que se pretendía controlar, centrado en el trabajo social, como uno de los pilares de la Fundación, que contribuyó a construir una visión sobre los habitantes de tugurios.

El segundo capítulo se ocupa del intento de construcción de un orden social en el barrio Villa Socorro, que albergó a las familias erradicadas de La Alpujarra. Se centra en el

programa de rehabilitación social propuesto por Casitas de la Providencia como un intento de reeducar sus habitantes, de direccionar sus vidas. Por último, evidencia cómo las contradicciones y conflictos suscitados por la ejecución del programa obligaron a los directivos de la institución a rediseñar el modelo, lo que implicó una reasignación de funciones de la Fundación con respecto a la dimensión social, que terminó en manos privadas, de religiosas y damas de la caridad.

El tercer capítulo se centra en las formas de resistencia y conflictos cotidianos entre los habitantes de Villa Socorro y la Fundación Casitas de la Providencia. La presencia de la Central Nacional Provienda en el barrio y el papel que tuvieron los sacerdotes en el proceso de resistencia de los pobladores. Por último, se ocupa de la organización política, que permite comprender por qué fue necesario un nuevo enfoque de las relaciones de poder que devolviera a los sectores populares la capacidad de acción e incidencia en los procesos sociales.

1. Conocer y “erradicar”

Como la ciudad es donde ha surgido el problema político, esto es, el problema del control social, también es ahí donde debe ser estudiado.

Robert Erza Park, “La ciudad y otros ensayos de ecología urbana”

En este capítulo nos ocuparemos del contexto en el que se inscribe la investigación, es decir, la segunda mitad del siglo XX, momento en el que la migración masiva de campesinos a las ciudades latinoamericanas como una época de cambio, de transición de una sociedad rural a una urbana. Los campesinos que arribaron a la ciudad de Medellín entre las décadas 1940 y 1960, ocuparon las áreas centrales empiezan a ser interpretados de manera particular por los funcionarios de la oficina de Planeación municipal. Ante las presiones por despejar estas zonas para el desarrollo de obras de renovación urbana (construcción del centro administrativo en el corazón de la ciudad y algunas vías en el entorno del río Medellín) se creó la Fundación Casitas de la Providencia, entidad que tenía como misión exclusiva la erradicación de tugurios en la zona central de Medellín, compuesta por industriales, jerarcas de la iglesia católica, concejales y funcionarios de planeación y valorización; pero la puesta en marcha de este proyecto no podía efectuarse sin el apoyo de un grupo de trabajadoras sociales que se encargarían de conocer a los habitantes de los tugurios, su estilo de vida, composición familiar, oficio, escolaridad, religiosidad, y las condiciones de habitabilidad de tales asentamientos, con el fin de facilitar la erradicación de familias a barrios construidos por la Fundación en el norte de la ciudad, y allí implementar un proyecto de ‘rehabilitación’ social, centrado en cambiar las prácticas y maneras de pensar de los integrantes de las familias seleccionadas. Es un relato de cómo se pretendió conocer y erradicar una forma de habitar la ciudad en una época de cambio.

1.1. El tugurio

La configuración social y urbana de las ciudades latinoamericanas está marcada por la etapa de masificación originada por la migración campo-ciudad. El proceso de poblamiento de las urbes fue determinado por paulatinas migraciones de individuos y sus familias, procedentes de diferentes territorios y motivados por diversas circunstancias. Un

éxodo, al que se le atribuyen raíces en la violencia partidista y en la carencia de un régimen de protección social que impulsó al campesino a trasladarse a los centros urbanos en busca de beneficios como salarios y prestaciones.⁴⁰

Los tugurios eran vistos como la materialización del fracaso en el intento de adaptarse a las dinámicas socioeconómicas urbanas, la población que los ocupaba fue vista como marginal, aunque habitaba la ciudad, se encontraba privada de los beneficios de la industrialización, su forma de vida era vista como la negación de los principios aceptados por el conjunto de grupos articulados por la producción fabril. Los tugurios eran edificaciones hechas con materiales desechables (lata, cartón, madera), con limitado acceso a servicios de acueducto, alcantarillado y electricidad. Albergaban a campesinos inmigrantes, que en muchos casos no habían logrado incorporarse a las actividades económicas de la ciudad, se encontraban desempleados o desempeñando oficios por los que devengaban bajos salarios.

La proliferación de tugurios fue aceptada como correlato de la consolidación de la industria, “como tributo que pagan las ciudades por su industrialización”,⁴¹ pues las transformaciones económicas conllevaron a “una explosión demográfica imprevista y que, por consiguiente, se convierte en desorganización urbana, decadencia de sectores, cambios en el uso de la tierra”.⁴² Las condiciones inhumanas que vivían las familias tugurianas eran consideradas la expresión de una deficiencia técnica asociada con la administración de recursos, de ahí que el Estado se viera en la obligación de solventarla, y así evitar el problema social que implicaba la persistencia de los tugurios. El Estado se veía obligado a purgar sus culpas, al carecer de una política de planificación del espacio urbano, aunada a medidas preventivas, que contuviesen la invasión de terrenos y el establecimiento de tugurios. El Estado tenía la obligación de regular el acceso a la propiedad, y en caso de transgresión, asegurar la conservación a quienes ostentaban el título de propiedad, y el acceso a quienes habían fracasado en el intento de convertirse en propietarios.

⁴⁰ Rubén Darío Utria, “Bases de la rehabilitación urbanística” (Bogotá: Consejo Nacional de Estudios Sociales, 1956) 31.

⁴¹ Inés Naranjo y Margarita Quijano. *Cómo afecta la organización familiar el ambiente de la vivienda-tugurio* (Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1963) IX.

⁴² Consejo de Planeación Municipal, “Acta N° 6”. Medellín, marzo 18 de 1963. AHM, Medellín. F. Personería, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C33, L2, f. 140.

A los ojos de las elites, los tugurianos eran un tipo de población flotante, a la que asignaron una variedad de formas, algunas como producto de la imaginación, otras cimentadas en el prejuicio. Desde la pasividad, hasta la sublevación, los habitantes de tugurio se convirtieron en una amenaza para el orden social soñado por la elite industrial de Medellín. Bajo el supuesto de que la mezcla entre ingenuidad e inconformismo, característica de los tugurianos, podía abonar el terreno para el arraigo de nuevas ideologías, especialmente del socialismo que, con sus promesas de transformación de las condiciones de vida de los pobres, seducía a quienes no habían logrado integrarse al sistema de producción industrial o tenían un limitado acceso a los réditos de la industria y el progreso. Después de la Revolución Cubana y a lo largo de la década de 1960, los avances del socialismo en Latinoamérica generaron angustia en aquellos que se habían empeñado en diseñar y edificar un orden social acorde con el capitalismo industrial, resultado de una disciplina laboral, austeridad católica y pensamiento pragmatismo.

La supuesta peligrosidad de los tugurios era atribuida a la maleabilidad del comportamiento de sus habitantes, a quienes se atribuía un estado de indeterminación y un acervo de comportamientos potencialmente peligrosos, que, en caso de continuar en aislamiento y lejos de la dirección de instituciones como la iglesia, la escuela, la asistencia social y, en especial, del Estado se convertirían en una amenaza para el orden social armónico que deseaban los industriales antioqueños. Su peligrosidad radicaba en el supuesto de que era una población propensa a ser movilizada y catalizada por agentes externos que amenazaban la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Como manifestación extrema de la desigualdad social, el tugurio era observado como un espacio de inflexión de la sociedad, y aunque el tuguriano era considerado una persona pasiva y económicamente inestable, podía reaccionar ante la amenaza de perder su morada. Esta doble condición los hacía mostrarse desintegrados de la sociedad, sin guardar relación alguna con ella, y a la vez construir un “sentimiento de unión como medio de defensa”.⁴³

La proliferación y persistencia de los tugurios, como evidencia de desorganización social, condenaban al conjunto de la sociedad a la imposibilidad del restablecimiento de un equilibrio basado en la propiedad, el Estado debía asegurar su propia existencia a través de

⁴³ Nora Arredondo y Rocío Atehortúa, “Estudio socio-económico familiar y de vivienda. Análisis de la situación actual de los grupos de ‘tugurios’ situados en la zona central de Medellín, con miras a futuros planes de vivienda”, *Revista Universidad de Antioquia* 170 (1968): 1090.

la regulación de estos conflictos emergentes, enfilando toda su potencia para eliminar los tugurios, núcleos “donde empiezan los movimientos izquierdistas”,⁴⁴ los sentimientos de sus moradores podían ser movilizados por falsas promesas que alimentaban aspiraciones de cambio y daban un aliciente al inconformismo.

A la par de las migraciones, la fisionomía de los centros urbanos se transformaba a medida que la industria, el comercio y el turismo se afianzaban como principales actividades económicas. Tal consolidación requería una zonificación, una renovación de usos del suelo para ajustar los terrenos a los requerimientos de las nuevas actividades. La producción industrial asociada con el urbanismo moderno exigía la división de la ciudad por sectores y la zonificación por actividades, determinadas según las proyecciones y la oferta de servicios, en consecuencia, era necesario delimitar los usos de globos de tierra en la zona central, lo que incidía en la valorización del suelo urbano. El único obstáculo a los proyectos de renovación urbana en varios sectores de la ciudad, en terrenos que habían sido abandonados o retenidos de manera especulativa, era que estos habían servido como de los campesinos inmigrantes, que por medio de redes familiares llegaban e instalaban sus ranchos y comenzaban a insertarse en circuitos de trabajo en plazas de mercado, la industria de la construcción, la extracción de materiales del río Medellín y el trabajo doméstico.⁴⁵ Las áreas centrales de la ciudad eran espacios en transición: conservaban la fisionomía de épocas pasadas, pero estaban a la espera de una actualización a los usos industriales, que eventualmente fueron ocupados por migrantes de manera espontánea, lo que desató un conflicto social y espacial entre grupos sociales, que tuvo como uno de los principales protagonistas a la Fundación Casitas de la Providencia. De esta manera, sectores específicos de la ciudad se convirtieron en escenarios de disputa, sujetos a presiones económicas y políticas que se extendieron por varias décadas.

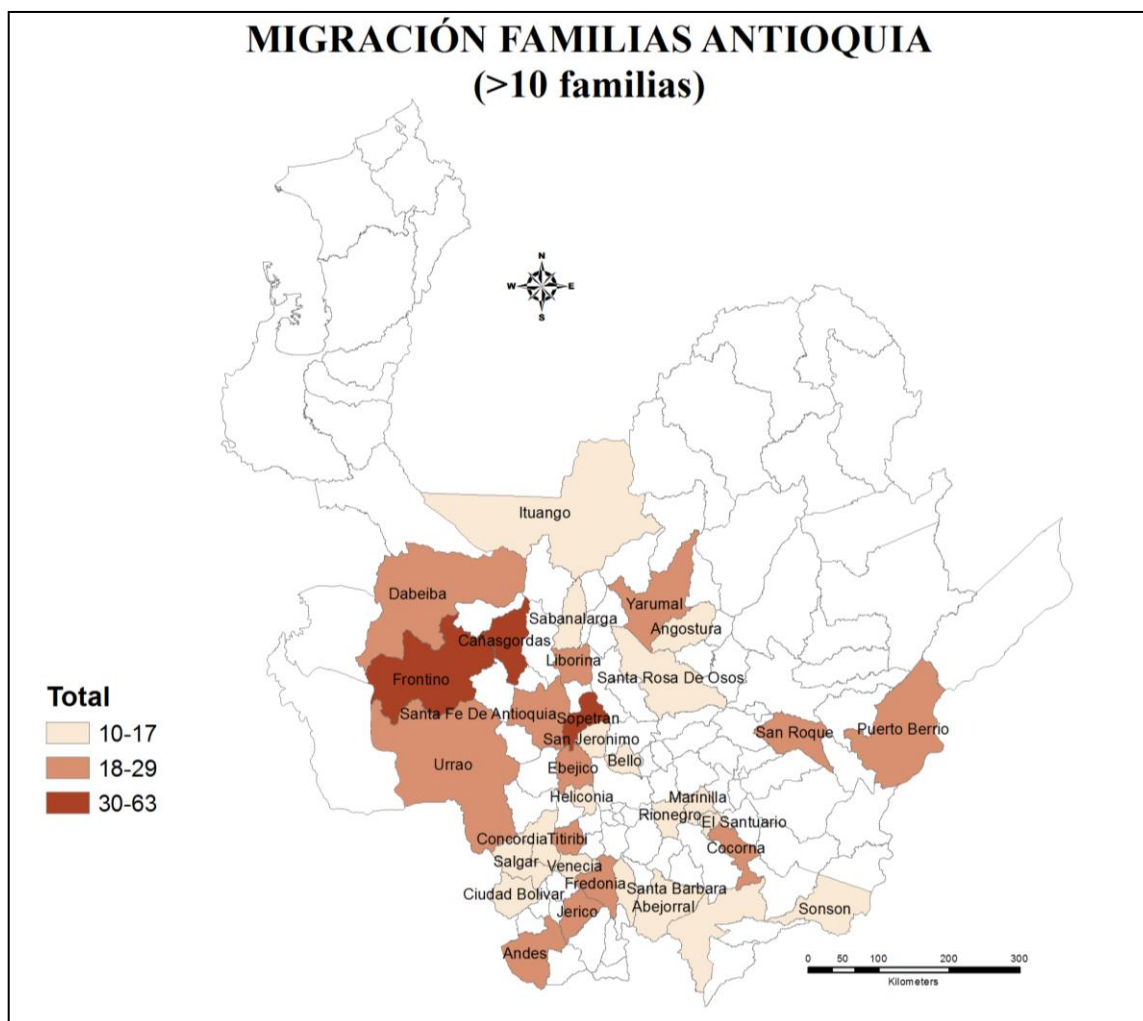
La mayoría de los inmigrantes que llegaron a Medellín durante las décadas de 1940 y 1950 provenían en de las zonas rurales del departamento de Antioquia, principalmente de Sopetrán, Cañasgordas, Frontino, Liborina, Titiribi, Urrao, Andes, Ebejico, Yarumal, Cocorna, Dabeiba, Fredonia, Jericó, Puerto Berrío, San Roque, Santa Fe de Antioquia, Ciudad Bolívar, Rionegro, Santa Barbara, Ituango o Salgar (Figura 1), aunque,

⁴⁴ Arredondo y Atehortúa, “Estudio socio-económico...” 1089.

⁴⁵ Robert Erza Park, “La ciudad y otros ensayos de ecología urbana”. (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999) 91.

independientemente de la proporción, procedían de un total de 92 municipios antioqueños, casi la totalidad de la región. (Figura 1) En contraste con ciudades como Cartagena donde la migración había sido intraurbana, en Medellín se confirma la hipótesis de un gran movimiento de población del campo a la ciudad.⁴⁶

Figura 1



Mapa con las familias provenientes del departamento de Antioquia asentadas en los tugurios del área central de Medellín, mayor de 10 familias. Elaborado a partir de: Oficina de Planeación. "El problema de los tugurios en la ciudad de Medellín y su posible solución". Medellín, [ca. 1961]. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Planeación, S. Informes, C12, L1, ff. 130-211

Los campesinos inmigrantes se asentaron en sectores como La Alpujarra, el Cementerio Universal, La Iguaá, San Benito, La Inmaculada, la Estación Villa y Calle

⁴⁶ Oficina de Planeación. "El problema de los tugurios en la ciudad de Medellín y su posible solución". Medellín, [ca. 1961]. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Planeación, S. Informes, C12, L1, ff. 130-211.

Barranquilla, con precarias construcciones hechas en materiales desechados comenzaron a habitar la ciudad, una población “heterogénea por su procedencia, costumbres y oficios”,⁴⁷ que comenzó a ser homogeneizada con el rótulo de ‘invasora’ o ‘tuguriana’, como obstáculo y amenaza a la estabilidad del orden social construido por los industriales de la ciudad. Ante el preocupante panorama de la proliferación de los tugurios en la zona central, los industriales urgieron la creación de una entidad especializada en la cuestión, que lograra, si no de raíz por lo menos de manera eficaz, erradicar los tugurios y despejar los terrenos destinados a la construcción del Centro Cívico (centro administrativo) en La Alpujarra y el desalojo de las familias asentadas en las vegas de las quebradas Iguaná y Santa Elena: los sectores de Otrabanda y Estación Villa-San Benito- La Carrilera.

1.2. La Fundación Casitas de la Providencia y la política de erradicación (del centro a la periferia)

La planificación urbana fue adoptada como instrumento para la ejecución de obras de infraestructura relacionadas con la producción industrial, acordes a la zonificación de actividades propuesta en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (habitar, trabajar, transitar y descansar). Gran cantidad de tugurios que se habían asentado en áreas proyectadas para usos industriales y comerciales, por lo que se consideraron un obstáculo para obras de renovación urbana que buscaban ajustarse con el Plan Piloto diseñado por los arquitectos Paul Lester Wiener y José Luis Sert a principios de la década de 1950. En consecuencia, el esfuerzo por erradicar los tugurios fue la contrapartida a los intentos por lograr la materialización de un orden funcional a la fábrica, y la zonificación, incluso de los tugurios, operó como un intento de adaptar al orden urbano concebido por las elites aquello que se consideraba patológico.

Durante las décadas de 1950 y 1960 se realizaron censos, estudios socio-económicos e informes de campo, como resultado de las experiencias de contacto con las familias que habitaban los tugurios en la zona central, y fueron la guía para la implementación de programas experimentales de construcción de vivienda. Profesionales

⁴⁷ No se conoce con precisión la fecha del estudio. Se estima que fue realizado entre 1956 y 1961, fecha en la que comienzan los estudios por parte de la oficina de planeación municipal en La Alpujarra, desalojada en 1962-1963, el censo de 1961 se utilizó como guía de estudio de la población a erradicar. Oficina de Planeación. "El problema de los tugurios en la ciudad de Medellín y su posible solución". Medellín, [ca. 1961]. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Planeación, S. Informes, C12, L1, f. 132.

en Trabajo Social escribieron tesis, informes de práctica y manuales en diferentes lugares del mundo, para institutos especializados en la cuestión de la vivienda, y se centraron en plantear soluciones a lo que se denominaba ‘déficit habitacional’. Auspiciados por entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, se promovió la creación de institutos como el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (CINVA), el Instituto de Crédito Territorial (ICT), la Fundación Casitas de la Providencia en Medellín, la Oficina de tugurios en Cartagena, la Caja de Vivienda Popular en Bogotá y el Instituto de Vivienda del Municipio de Cali (Invicali), que tenían su campo de acción en diferentes escalas.

En Colombia, las entidades que actuaban a escala nacional y local, tenían un especial interés en la aplicación de un plan nacional de rehabilitación de tugurios en los centros urbanos en proceso de industrialización, que, al convertirse en polos de atracción de población rural, se convirtieron en el epicentro de este tipo de poblamiento espontáneo. A mediados de la década de 1950 el Instituto de Crédito Territorial realizó estudios e intentó realizar las primeras erradicaciones de tugurios en Cartagena y Barranquilla, con el fin de contribuir a los proyectos de mejoramiento de los puertos de ambas ciudades. Chambacú y Zona Negra eran asentamientos de tugurios situados en las inmediaciones de la ciudad amurallada en Cartagena y de la zona franca industrial próxima al terminal marítimo en Barranquilla. Eran islas de pobreza en el corazón del centro histórico, turístico e industrial del Caribe colombiano. La mayoría de las familias provenían de la misma ciudad, de barrios obreros, y por medio del desplazamiento intraurbano lograron obtener beneficios, al estar exentos del pago de arrendamiento o el transporte desde zonas distantes a los centros de trabajo.⁴⁸

Ante los fracasos del Instituto de Crédito Territorial en la erradicación y traslado de tales asentamientos, por lo especialmente en el caso de Chambacú, las autoridades de varias ciudades consideraron que lo más indicado para la erradicación de tugurios era la creación de entidades especializadas que actuaran en el ámbito municipal. De allí que surgieran fundaciones e institutos que tenían encomendada la misión de erradicar los tugurios y trasladar la población desalojada a otros barrios, apartados de las zonas de valorización. A

⁴⁸ Instituto de Crédito Territorial, *Chambacú. Regeneración de una zona de tugurios* (Bogotá: Instituto de Crédito Territorial, 1955)

tono con esta preocupación y ante la proliferación de tugurios en el centro de la ciudad de Medellín, la Oficina de Planeación Municipal recurrió a la Escuela de Servicio Social de la Universidad Pontificia Bolivariana para investigar los sitios con mayor densidad de población de la ciudad, “con el fin de conocer no sólo estadísticas en cuanto al número global de tugurios, sino especialmente lo relacionado con el aspecto social de sus habitantes y la capacidad de rehabilitación de las familias que los habitaban”.⁴⁹

Después de tener a la mano la radiografía de los tugurios en las zonas céntricas de la ciudad, realizada por el departamento de Servicio Social, el Concejo de Medellín, alentado por las preocupaciones del alcalde e ingeniero civil de la Escuela de Minas, Jorge Restrepo Uribe,⁵⁰ dio vida, por medio del Acuerdo 69 del 20 de noviembre de 1956, a la Fundación Casitas de la Providencia, con el fin de: “conseguir, recaudar y administrar bienes y rentas destinados a la construcción de viviendas para las clases más pobres de Medellín”.⁵¹ La junta directiva de la Fundación estaba compuesta por el alcalde, quien hacía las veces de Presidente; un representante de los empresarios de banca, industria y comercio; cuatro concejales; un delegado de la Iglesia católica (Caritas arquidiocesana); representantes de la Corporación de la Vivienda de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Cámara de la Construcción (CAMACOL). Tenían voz, pero no voto: contralor, personero, director de planeación y jefe de valorización.

La Fundación Casitas de la Providencia, como expresión de una "concepción centralista"⁵² de ayuda a los pobres, se sustentaba en la ejecución local de recursos colectivos (fiscales y de cooperación internacional) para atención de la “clase marginal”. La Fundación tenía como misión dotar de condiciones de habitabilidad mínimas a los moradores de los tugurios, para contener los "peligros" que representaba una población

⁴⁹ María Cristina Uribe y María Helena Penagos, *El Servicio Social en los programas de la Fundación Casitas de la Providencia* (Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1961) 1.

⁵⁰ Fue alcalde de Medellín en dos oportunidades durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. La primera alcaldía (noviembre 1955- junio 1956), segunda (octubre 1956- mayo 1957). Fue gerente de la Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) entre 1935 y 1939, presidió la Sociedad de Mejoras Públicas y la Cámara Colombiana de la Construcción en 1958, impulsó el proyecto de canalización del río Medellín, dirigió el Departamento de Valorización (1945-1949). Fue el Director Ejecutivo de los Municipios Asociados del Valle de Aburrá (MASA) entre 1966-1975. Luz Posada de Greiff, “Jorge Restrepo Uribe. Primera y Segunda alcaldía”. Medellín, mayo 31 de 1996. Archivo personal Luz Posada de Greiff, Medellín, Colombia.

⁵¹ Según el Acuerdo N° 69 de 1956, Concejo Municipal, Resolución N° 0917 del 30 de marzo de 1957, emanada del Ministerio de Justicia, se concedió personería jurídica a Casitas de la Providencia (Ver: Uribe y Penagos 3)

⁵² Georg Simmel, “El Pobre” (Madrid: Sequitur, 2011)

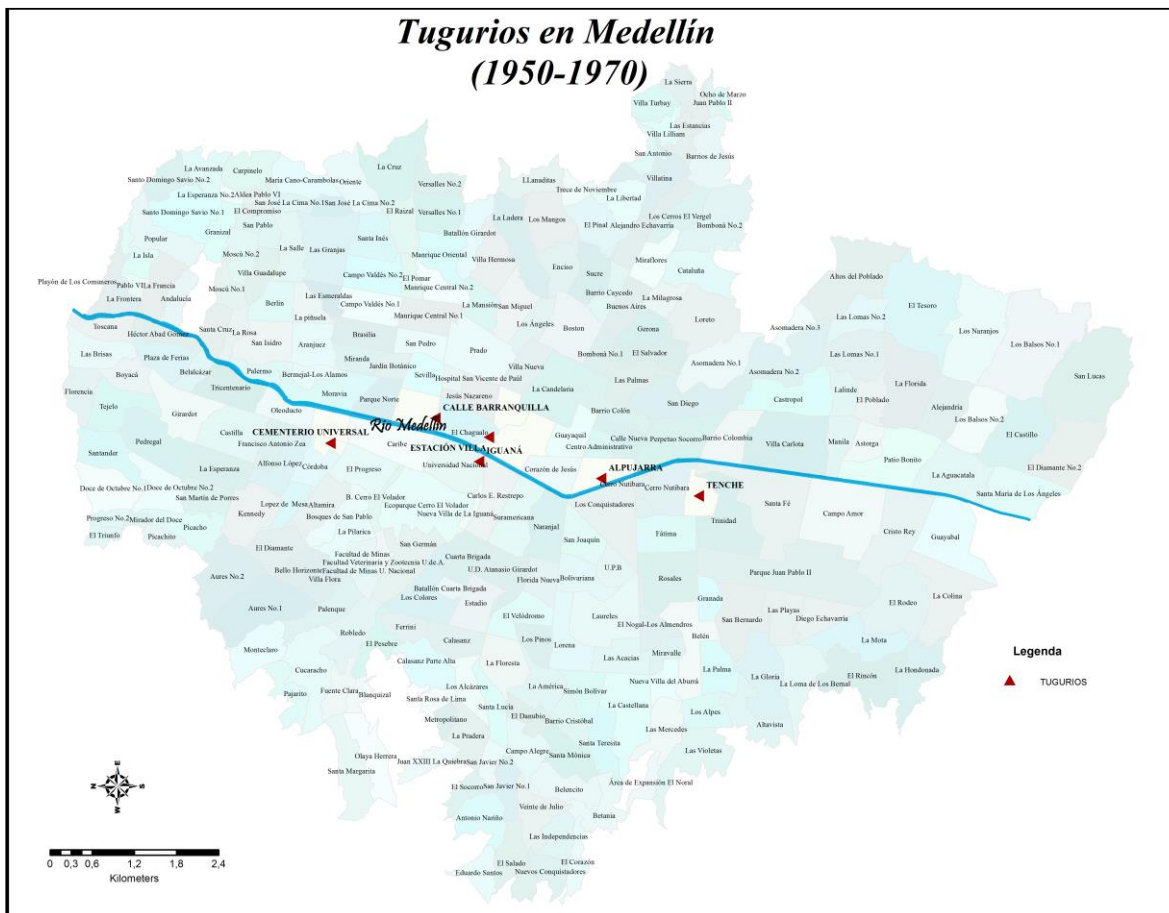
"excluida" del orden social (político, económico y cultural), con el fin de garantizar la prevalencia del "interés general". Debía regular la desigualdad con el objetivo de salvaguardar el orden social de los peligros suscitados por el arraigo de nuevas de nuevas ideologías, como el socialismo. La Fundación Casitas asumió como principal bandera la contención del comunismo en la ciudad por medio de un modelo de estado de bienestar, orientado a dirimir los conflictos sociales que comenzaban a surgir en los tugurios, donde afloraba el descontento, por las dificultades que encontró la población inmigrante para insertarse en los circuitos de producción industrial y conseguir satisfacer sus necesidades: alimentación, vestido, pago alquiler o adquisición de vivienda, acceso a servicios públicos, educación y salud.

El proceso de poblamiento, en esa primera etapa de la masificación de Medellín no se dirigió hacia lo que actualmente consideramos la periferia, fijándose como una amenaza exterior, como si rodease un conjunto ordenado en el centro. En contraste, la mayoría de las invasiones de tierras durante la década de 1960 tuvieron lugar en el centro de Medellín, en sectores cercanos a algunas de las estaciones del ferrocarril, la Federación de Cafeteros, El Bosque de la Independencia o terrenos aledaños a la Biblioteca Pública Piloto o el Cementerio Universal. Aunque a lo largo de la década algunas zonas del nororiente de la ciudad (Popular o Santo Domingo Savio) también se poblaban por medio del loteo, la invasión terrenos y construcción de ranchos, la Fundación se concentró en los tugurios ubicados en el centro de la ciudad: vegas del río Medellín y las quebradas Iguaná y Santa Elena. (Figura 2)

La Fundación Casitas de la Providencia se concentró en la erradicación los tugurios en la zona central, especialmente La Iguaná (Otrabanda) y La Alpujarra, donde se construyó, años después el Centro Administrativo. En el 1958, con apoyo del Instituto de Crédito Territorial, trasladó a las primeras 50 familias a una urbanización construida en el noroccidente de la ciudad, conocida como Barrio Santander, en el cual las trabajadoras sociales comenzaron la ejecución de la segunda fase del programa de erradicación: la rehabilitación social, por medio de talleres de costura, culinaria, y empresas comunitarias los funcionarios de la Fundación pretendían cambiar los hábitos de vida de las familias desalojadas de los tugurios, con el argumento que allí habían estado sujetos a particulares condiciones ambientales que propiciaron en ellos la desorganización social. El Instituto

construyó en el barrio 350 casas más, pero mantuvo autonomía con respecto a los precios de las viviendas y los programas sociales, lo que en ocasiones generó desavenencias entre ambas entidades.

Figura 2



Tugurios en la zona central de Medellín en los que Casitas realizó estudios y erradicaciones en la década de 1960. Elaborado a partir de los documentos de la Fundación Casitas de la Providencia (1960-1975).

El proyecto de erradicación más ambicioso de Casitas de la Providencia se ejecutó pocos años después del primer desalojo realizado en las inmediaciones de La Iguaña. Desde comienzos de la década de 1960 la Fundación se embarcó en la consecución de recursos destinados a la erradicación de los tugurios de La Alpujarra, lugar en el que el Instituto de Valorización tenía un especial interés por tratarse de los terrenos donde debía erigirse el centro cívico de la ciudad, según el plan piloto de Wiener y Sert. Entre 1961 y 1962 se realizaron censos, estudios socioeconómicos e informes sobre las familias que habitaban la

zona, con el fin de conocer quienes se postularían para el traslado a un barrio construido por Casitas en el nororiente de la ciudad: Villa Socorro.

¿Qué implicaciones tenían los programas de Casitas de la providencia? Como la erradicación no era suficiente para solucionar el problema social y espacial que implicaba la permanencia de los tugurios en el centro de la ciudad, Casitas propuso como continuación de las erradicaciones un programa de rehabilitación social orientado a contener la posibilidad de que el descontento generado por los desalojos pudiese dar cabida a grupos de izquierda, que se nutrirían de ese sentimiento, anulando las aspiraciones de conseguir una ciudad ordenada (funciones) y armónica (sin disidencia) orientada por la elite industrial antioqueña. Como afirman los historiadores Óscar Calvo y Mayra Parra, “la localización del nuevo barrio en la periferia urbana permitía reforzar la segregación socioespacial de los centros económicos y políticos de la ciudad”, a lo que se sumaba “el temor a la agitación comunista después de la Revolución Cubana, llevó a considerar a algunos de los habitantes como sujetos de “rehabilitación””⁵³. La rehabilitación era necesaria pues se entendía como una reeducación en los verdaderos valores (sociales, morales, económicos), y a la vez funcionaba como una estrategia de control político de una población ‘peligrosa’, la neutralización de una amenaza que podría poner el orden social en vilo.

A lo largo de la década de 1960 la junta directiva de la Fundación Casitas de la Providencia hizo hincapié en la importancia de efectuar las erradicaciones de tugurios en los sectores “que impiden las obras de valorización”.⁵⁴ La meta era terminar con los tugurios que del centro de la ciudad al término del decenio. Las zonas a erradicar eran Tenche, Alpujarra, Calle Barranquilla, La Iguañá, Cementerio Universal y la zona del ferrocarril -Estación Villa-Quebrada Santa Elena, además de otros asentamientos pequeños.⁵⁵ Las familias erradicadas de los tugurios eran trasladadas a barrios en el norte de la ciudad, lo que tuvo una gran incidencia en el tipo de poblamiento de Medellín, pues

⁵³ Oscar Calvo y Mayra Parra, *Medellín (rojo) 1968. Protesta, secularización y vida urbana en las jornadas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano* (Bogotá: Planeta, 2012) 41-42.

⁵⁴ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta N° 124 Junta Directiva de Casitas de la Providencia”. Medellín, agosto 29 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 4.

⁵⁵ Iván Uribe Jaramillo. “Oficio N° 74”. Medellín, octubre 28 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 14; Iván Uribe Jaramillo. “Programa de construcción de vivienda popular”. Medellín, noviembre 19 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, ff. 17-20; AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 13.

reservaba las zonas aledañas al río Medellín como centro de la ciudad y los terrenos del nororiente y noroccidente como espacios para el desarrollo de urbanizaciones populares.

Las personas desalojadas de los tugurios del centro se habían adaptado a esos contextos cercanos a la industria y el comercio, especialmente a mercados como la Plaza Cisneros o Guayaquil, la mayoría eran campesinos inmigrantes que trabajaban como coteros, carretilleros, obreros de la construcción, meseras, lavanderas y empleadas de servicio doméstico, actividades que desarrollaban cerca de los ranchos. Al ser trasladados lejos de estos entornos, operó una segregación socioespacial que los afectó, tanto por la distancia (cerca 10 kilómetros) entre su vivienda y el centro de la ciudad, como por la escasez de rutas de transporte eficientes desde los barrios construidos por la Fundación. Santander y Villa Socorro como barrios construidos por el Estado, se convirtieron en enclaves institucionales, que, sin embargo, carecían de los mismos servicios que otros barrios construidos por medio de invasión o compra de lotes (como los barrios ‘pirata’), pues no contar con el servicio de transporte, las calles se encontraban sin asfaltar y sin comunicación con los barrios aledaños.

A pesar de la satisfacción expresada por los funcionarios de la Fundación Casitas de la Providencia por haber logrado erradicar sectores de tugurios populosos como Iguaná, La Alpujarra, y trasladado a la población a los barrios Santander y Villa Socorro, a los funcionarios de Planeación les preocupaba el modelo implementado por Casitas en tales barrios, pues requerían una gran inversión; además pensaban que los traslados incondicionados podían generar un efecto adverso, incentivando nuevas invasiones en el centro, al motivar a nuevos invasores ante la posibilidad de la adjudicación de una vivienda terminada, con servicios públicos y construida por la administración municipal. Los funcionarios de Planeación propusieron como alternativa abandonar los proyectos de construcción de vivienda, y en lugar de ellos centrarse en autoconstrucción dirigida. Recomendaron a la junta directiva de Casitas la adquisición de terrenos en las afueras de la ciudad donde deberían trasladar a las familias después de los desalojos, permitiéndoles la posibilidad de reconstruir el tugurio un terreno delimitado por la Fundación. Este plan sugería a los funcionarios de Casitas evitar la construcción de viviendas, pues de esto se encargarían las familias en una “etapa posterior al establecimiento del tugurio en el fondo

del terreno y después de una educación de tipo social, para preparar a las gentes a vivir en comunidad y en construcciones higiénicas y adecuadas”.⁵⁶

Cuando la propuesta de Planeación se presentó a la Junta Directiva de Casitas, Mario Molina, como director de la Fundación intentó justificar el tipo de traslado efectuado en el caso de La Alpujarra, revelando la estrategia que subyacía en los planes de la Fundación y que había garantizado su éxito. Comparando el caso de Medellín con el de Chambacú en Cartagena, en el que el I.C.T. no había logrado efectuar la erradicación, aseguraba que, el traslado masivo, incondicionado y acelerado, “era la única forma de terminar el problema rápidamente y evitar la acción comunista opuesta al traslado [...] que exigió una larga labor de convencimiento por parte de la institución”.⁵⁷

En las reuniones siguientes la Junta Directiva se propuso aclarar la política de la institución para demostrar que las críticas de Planeación resultaban “infundadas y explicables solamente por la confusión que se ha creado en torno a dos programas diferentes como son la erradicación de tugurios y la rehabilitación de núcleos habitacionales que afrontan problemas similares a las zonas de tugurios”.⁵⁸ La erradicación de tugurios no admitía un tratamiento diferente a la construcción directa de viviendas, “para trasladar luego a ellas en forma masiva a las familias de los tugurios ubicados en zonas de uso público destinadas a servir de vías públicas o centro de servicios administrativos, como es el caso de La Alpujarra y las márgenes del río Medellín”. Superada esta primera etapa, con la garantía de que de no existiría obstáculo alguno para las construcción de las obras proyectadas en el entorno del río, la Fundación se podría dedicar, en una nueva fase, a un programa de rehabilitación de tugurios en áreas periféricas o ubicados en zonas destinadas a la construcción de vivienda para clases populares, que consistía en “adelantar obras de urbanización, adquiriendo previamente la propiedad de los terrenos, adjudicarle a cada una de las familias instaladas en el sector un lote debidamente urbanizado, hacerles un préstamo de materiales y darles una dirección técnica perman[en]te para que ellos con su propio

⁵⁶ Consejo de Planeación Municipal. “Acta N° 6”. Medellín, enero 21 de 1963. AHM, Medellín. F. Personería, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C33, L2, f. 141.

⁵⁷ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 70 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, abril 04 de 1963. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 83, Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 72 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, julio 12 de 1963. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 92.

⁵⁸ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 80 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, junio 11 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 133.

esfuerzo construyan y mejoren sus viviendas”.⁵⁹ Mientras existieron asentamientos de tugurios numerosos en el centro de la ciudad, los funcionarios Casitas de la Providencia se obstinaron en mantener tanto el programa de erradicaciones como el de rehabilitación en los barrios, la construcción de las urbanizaciones siempre recayó sobre la institución.

Para comprender cómo operó en la realidad Casitas de la Providencia a lo largo de la década de 1960, su declive y transformación, es necesario distinguir tres momentos clave tanto para la institución como para la historia de los procesos de poblamiento en la etapa de masificación de la ciudad. Un primero momento estuvo marcado por las erradicaciones de tugurios a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta (1956-1964): la creación de la Fundación Casitas de la Providencia, la construcción de barrios como Santander y Villa Socorro. Un segundo momento corresponde a las erradicaciones (1967-1972), especialmente en sectores como Biblioteca Pública Piloto, Tenche, Estación Villa, Iguaná y El Bosque, y la construcción de urbanizaciones como Efe Gómez y Pablo VI. Un tercer y último momento, ligado a la reorganización de la Fundación Casitas de la Providencia, que se convierte en la Corporación para la Vivienda y el Desarrollo Social —CORVIDE— en 1975, marcando de esta manera el inicio de una nueva etapa en el intento de controlar el crecimiento urbano, esta vez situado en la periferia de la ciudad y dirigido a contener el crecimiento de asentamientos en las laderas, con especial atención en la zona nororiental (Barrios Popular y Santo Domingo Savio), así como a través de la creación de programas de vivienda tipo granja en Villa Tina y Nazareth (San Cristóbal) con la propuesta de cinturón verde.

1.3. Describir y Prescribir: el conocimiento de la ciudad y el trabajo social

En 1945 se fundó en Medellín la primera Escuela de Servicio Social, anexa a la Escuela Normal Antioqueña de Señoritas, se trataba de la segunda escuela de este tipo del país.⁶⁰ En el año 1955 se incorporó a la Universidad Pontificia Bolivariana. Fundada por Cecilia Echavarría Toro (hija del industrial Alberto Echavarría), quien, influenciada por la escuela norteamericana, intentó emular los *Community Centres* en la ciudad. Otras asistentes

⁵⁹ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 80 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, junio 11 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 133- 134.

⁶⁰ La primera fue creada en 1936 adscrita a la Universidad Colegio Mayor del Rosario de la ciudad de Bogotá. Gloria Leal, “Las Escuelas de Servicio Social en Colombia, 1936-1958”, *Tendencias & Retos*, 20.1 (2015): 35-49.

sociales, como Pilar González y Mercedes Echavarría (Hija del industrial Guillermo Echavarría, Coltejer), ayudaron a fundar las primeras residencias sociales en los barrios Antioquia, Campo Valdés y El Poblado entre 1945 y 1960.

Según la historiadora Ruth López Oseira las prácticas femeninas caritativas y de asistencia social, o de “maternalismo” social, se habían convertido para las mujeres de la elite en una “vía legítima de acceso a la política y la esfera pública”,⁶¹ ya que a través del trabajo social pudieron traducir el debate sobre la ‘cuestión social’ en clave de género. Afirmación que no debe subestimarse debido a que gran parte del modelo de Casitas de la Providencia recayó sobre mujeres que cumplían diferentes roles: trabajadoras sociales, damas de la caridad o como religiosas de congregaciones, que trabajaron en muchos barrios populares de Medellín durante la segunda mitad del siglo XX. Las monografías de las trabajadoras sociales eran “la primera expresión sistemática, en el nivel de los discursos, de la forma en que las mujeres educadas interpretaban la cuestión social”,⁶² por lo que no sólo representan una fuente para la historia de las mujeres sino para la historia urbana.

No hay que olvidar que el programa de Trabajo Social fue ofrecido por una universidad de carácter confesional, de allí que la iglesia se aliara con las trabajadoras sociales con el propósito de “moralizar la sociedad y contener la expansión de otras iglesias cristianas”.⁶³ Fue así que las primeras residencias sociales apoyaran el Comité de Defensa de la Fe, y se ubicaran en barrios donde la iglesia católica había señalado la presencia de protestantes. Sin embargo, la labor civilizatoria no se restringía a la defensa de la religión, esta se usaba como un instrumento para emprender un proyecto más general, que en la etapa de la masificación de la ciudad sirvió para intentar educar a las mujeres de los barrios populares valores como el orden, la limpieza o la moderación. No es extraño entonces encontrar que, en los informes y las tesis de las trabajadoras sociales, las mujeres y la infancia fueran el foco de las políticas impulsadas diseñadas por ellas. Gran parte de las descripciones, entrevistas y recomendaciones se enfocaron en la situación de las mujeres

⁶¹ Ruth López, “Una agenda política para las mujeres desde las prácticas. El caso de las Residencias y Secretariados Sociales de Medellín, 1945-1960”, *Historia y Sociedad*, 15 (2008): 89. En 1963 ingresaron los primeros hombres a estudiar Trabajo Social; a lo largo de la década, por lo menos en lo referido a la Fundación Casitas de la Providencia, la mayoría de los profesionales en esta disciplina fueron mujeres, por lo que en este trabajo se nos referimos a ‘las trabajadoras sociales’.

⁶² López 95.

⁶³ López 101.

que vivían en los tugurios, demostrando gran interés por la suerte de las madres y el futuro de sus hijos.

Si la junta directiva de Casitas de la Providencia tenía la potestad de decidir los sectores a erradicar, según la urgencia y las presiones por garantizar los terrenos para obras de renovación urbana, las trabajadoras sociales eran las encargadas de velar por la ejecución del programa de rehabilitación social en los barrios y de adelantar los estudios sociales y económicos sobre las familias a erradicar. A través de los informes presentados a la junta directiva, las tesis y demás reportes de su actividad, podemos dar cuenta de algunos detalles de la vida de las familias que habitaron los tugurios; además de las formas de clasificación de la población, pues según las categorías que elaboraran se definía quiénes eran dignos de la ayuda estatal y quienes debían ser excluidos de los programas. Si el objetivo era erradicar, primero se debía conocer, acercarse a las familias, describirlas, contarlas, clasificarlas, seleccionarlas, con el propósito de prescribir un antídoto contra la desorganización familiar y social, que a sus ojos proliferaban en los tugurios.

El servicio social contribuyó en la construcción de una interpretación de los tugurios como territorios de desorganización social, en los que era necesario intervenir para buscar un reajuste que permitiese su incorporación a la sociedad, entendida como conjunto interrelacionado y ordenado. La participación de trabajadoras sociales en los programas de vivienda, convirtió la ciudad en un laboratorio social donde era necesario tratar problemas de desorganización social y estudiar “los nuevos tipos sociales que surgían en su caótico crecimiento”.⁶⁴ Ante las rápidas transformaciones que tenían lugar en el contexto urbano surgieron formas de investigación experimental con la pretensión de articular las áreas que surgían como producto de la espontaneidad, a un proyecto racionalizador, de dirección y control del poblamiento urbano, orientado por el plano y el poder regulador del Estado e instituciones como planeación, valorización y entidades especializadas en la cuestión de la vivienda. A estas ‘organizaciones de control’, les fue legado no sólo el estudio de estas poblaciones sino su educación, una transformación de sus creencias y prácticas que las adaptara a los avatares de la vida urbana. Las trabajadoras sociales fueron las encargadas de

⁶⁴ Park 11.

moldear los comportamientos, bajo la premisa que los conflictos sociales estaban basados en problemas de conducta.⁶⁵

A finales de la década 1950 y principios de 1960 la Universidad Pontificia Bolivariana⁶⁶ suministró profesionales en servicio social a las entidades especializadas en la cuestión de vivienda que operaban en la ciudad de Medellín, como el Instituto de Crédito Territorial o la Fundación Casitas de la Providencia. En estas instituciones los estudiantes de trabajo social y sociología tuvieron un campo de práctica que les permitió aplicar lo aprendido en las aulas: encuestas, muestreos, entrevistas, las técnicas de trabajo de caso, grupo y desarrollo de la comunidad. A pesar del carácter confesional de su formación, estas profesionales se esmeraron por demostrar su probidad en el ejercicio profesional, aprovechando las teorías sociales para reafirmar visiones y prejuicios sobre ciertos grupos sociales. Contribuyeron con el gobierno local, con la pretensión de disminuir las tensiones sociales generadas por la urbanización.

La alianza entre servicio social e instituciones estatales buscaba controlar y direccionar el crecimiento urbano a través de la erradicación de tugurios, para ajustar estos sectores de la ciudad a las exigencias de la planificación, y, de forma simultánea, sujetar e integrar a una población que necesitaba ser educada. La etapa de masificación de Medellín, como un período de transición, exigió la aplicación de políticas sociales y espaciales novedosas. Las trabajadoras sociales accedieron a las teorías sobre la comunidad, la ayuda mutua, la marginalidad y el esfuerzo propio a través de folletos, diccionarios, informes de práctica de otras ciudades y lugares del mundo, pero desconocían las complejidades del trabajo de campo, recolección y análisis de datos a escala de ciudad y con poblaciones numerosas —hasta la mediados de la década 1950 solo habían trabajado en fábricas y residencias sociales—. En las barriadas ‘marginales’ se enfrentaron al reto de conocer las condiciones de vida de cientos de familias habitantes de tugurios ubicadas en diferentes sectores del centro de la ciudad.

⁶⁵ Park 122.

⁶⁶ Universidad privada, de carácter confesional, que ofreció los primeros programas relacionados con las ciencias sociales en la ciudad de Medellín, cuando no existían las facultades de humanidades de la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Programas como sociología, historia, antropología y trabajo social, solo fueron ofertados hacia finales de la década de 1960 y principios de 1970.

En los programas de vivienda de la Fundación Casitas de la Providencia, la trabajadora social tenía la misión de transformar las condiciones de vida de los pobres. Mediante su labor, la Fundación logró establecer una correlación entre caridad, investigación social y estrategias de control político. El servicio social invirtió a la Fundación de un carácter técnico. A través de las trabajadoras sociales la Fundación planificaba sus acciones, en sintonía con las directrices de organismos internacionales y las ideas que circulaban en el entorno académico mundial.

En la década de 1960, debido al carácter inédito de las circunstancias en que se desarrolló el poblamiento de Medellín, no existían antecedentes que permitieran establecer comparaciones y diseñar modelos de intervención social basados en las particularidades sociales e históricas de la ciudad. A finales de la década de 1950 se construyeron los primeros referentes a tener en cuenta en investigación e intervención social, en ejercicios de ensayo y error. La ciudad era un laboratorio y los habitantes de tugurios objetos de experimentación. La visión de las trabajadoras sociales estaba acorde con la convicción de que era posible que el Estado creara una comunidad, al garantizar ciertas condiciones ambientales (barrios) y la introducción de una serie de estímulos (educación). No es posible distinguir entonces los intereses científicos de los políticos, el control social era una necesidad tanto para la ciencia como para el gobierno de la ciudad.

Los tugurios no solo eran considerados antiestéticos, también eran vistos como focos de insalubridad e inmoralidad y siempre como un obstáculo para el desarrollo de obras de renovación urbana. Para la Fundación Casitas el desalojo de las familias, por sí solo, no remediaba la problemática, ya que estas podían volver a levantar los ranchos en otro lugar de la ciudad. Correspondía entonces al Estado, por medio de la Fundación, solucionar esta situación de forma permanente y detener su proliferación, trasladando a los tugurianos a barrios construidos por la institución, donde se podía controlar la población. Se sacaba a las familias de ambientes surgidos espontáneamente, a los que se habían adaptado y generado dinámicas particulares para trasladarlos a ambientes planificados, en los que las trabajadoras sociales podían interferir y direccionar la vida de los pobladores en los nuevos entornos habitacionales. De manera que los tugurios se erradicaban porque usurpaban los espacios proyectados para la construcción de obras de renovación urbana; al

tiempo, porque posibilitaba nuevas relaciones entre la comunidad “marginada” y las instituciones estatales y privadas (religiosas, beneficencia).

Los programas de rehabilitación partían del supuesto que era posible, y necesario, una modificación del comportamiento de ciertos grupos sociales, con el fin de garantizar la existencia y bienestar de la sociedad. En ellos subyacía la idea de perfectibilidad a través de la educación. Además de la vigilancia y control del Estado en los procesos de poblamiento, se intentaba entonces enseñar a habitar la ciudad. La erradicación significaba la ruptura de los lazos que comenzaron a gestarse entre la gente, tanto con el entorno como las relaciones entre vecinos. Las trabajadoras sociales seleccionaban los elementos que consideraban deseables para fomentar el crecimiento de la nueva comunidad, eliminando las “malezas”, para trasplantar a un nuevo espacio los núcleos familiares que cumplían o se ajustaban con su visión moral.

Como resultado de los estudios sobre los tugurios surgieron informes, tesis y estudios socioeconómicos centrados en registros estadísticos de la composición familiar, la disposición de las viviendas, la escolaridad, la salud y descripciones someras sobre el criminalidad, prácticas religiosas y roles al interior de las familias, que iban acompañadas de un apartado destinado a las “recomendaciones”, que, en última instancia, legitimaban las intervenciones en estos territorios de pobreza. Sus disposiciones pretendían controlar la población inmigrante, a la vez que incidían en la construcción del tejido urbano acorde con la planificación de una ciudad industrial.

Las asistentes sociales no sólo elaboraban cuadros estadísticos para dar cuenta de la gravedad del alarmante crecimiento de los tugurios, una correlación simple entre densidad y desorganización social, pues procuraron acercarse a la dimensión individual y social, construyendo interpretaciones sobre los estados anímicos, composición familiar, roles de género, motivaciones, organización social, conflictos y relaciones vecinales. Más allá del aspecto material, que en última instancia era el fundamento de los programas de Casitas de la Providencia, los aspectos humanos y sociales representaban dos terceras partes de los informes de las trabajadoras sociales.

Una explicación de la desadaptación de los inmigrantes al medio urbano era el analfabetismo, una falta de capacitación para los oficios propios de la ciudad. El servicio social se preocupó especialmente por el desempleo y la falta de instrucción, por lo que las

trabajadoras sociales se centraron en la labor educativa, y en la construcción de escuelas, talleres y empresas comunitarias, como base de los programas asociados a la rehabilitación, que reconocían como su principal campo de intervención. Tanto en censos como en estudios socioeconómicos, las trabajadoras sociales, registraron en las estadísticas sobre composición familiar que gran proporción de la población se encontraba en edad escolar. Durante los recorridos indagaban y registraban la existencia de escuelas en los alrededores, y si los niños tenían posibilidades de asistir a clase. A continuación, se aventuraban a lanzar hipótesis y afirmaciones sobre la influencia de la forma de vida en los ranchos sobre el desempeño escolar. Comentaban con desasosiego cómo la pobreza dificultaba a los infantes la asistencia a la escuela, ya que sus padres no tenían cómo costear los materiales, además muchos de ellos tenían trabajar para contribuir al sostenimiento de la familia, y con preocupación advertían cómo las condiciones de la vivienda y la desnutrición tenían efectos adversos sobre el desempeño escolar de quienes podían asistir.

Figura 3



La Alpujarra. Medellín, diciembre de 1960. AHA, Medellín, Carlos Rodríguez. “Ambiente cerrado”. Tomado de Margarita María Quijano e Inés Naranjo Botero, “Cómo afecta la organización familiar el ambiente de la vivienda-tugurio”

La composición poblacional fue fundamental para comprender tanto la situación de las familias, la cantidad de niños, jóvenes, adultos (empleados, desempleados) y las relaciones conyugales (esposos, madres solteras, viudos). Tanto en los censos, como en las descripciones se hacía referencia con un particular acento en la situación de los niños, se

centraba en la división de tres grupos etarios: menores de 7 años; entre 7 y 15 años; y, por último, los mayores de 15 años. (Figura 3) La edad límite eran los 15 años. En la Alpujarra, por ejemplo, por lo menos la mitad de los habitantes censados eran menores de 15 años, y un 33% de menores de 7 años. (Tabla 1)

Tabla 1
CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE EDADES EN ALPUJARRA
(Total 657 familias)

<i>Grupos de edades</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Menores de 7 años</i>	1163	33.12
<i>Entre 7 y 15 años</i>	675	19.21
<i>Mayores de 15 años</i>	1674	47.67
<i>Totales</i>	3152	100.00

Fuente: Oficina de Planeación. “El problema de los tugurios en la ciudad de Medellín y su posible solución”. Medellín, [ca. 1961]. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Planeación, S. Informes, C12, L1, f. 137.

Después de obtener la radiografía de la distribución de la población se hacía un balance sobre la escolaridad, con preocupación los funcionarios de planeación y las trabajadoras sociales se referían a la población del segundo grupo, los niños entre los 7 y 15 años, que al no asistir a la escuela se podían dedicar “al pillaje y otras actividades delictivas”. (Tabla 2) La mayoría (56%) de los niños que habitaban los tugurios transitaban pues por una senda equivocada, de allí que una pronta erradicación y una inmediata rehabilitación podían revertir los macabros efectos de la ociosidad y la pobreza. Si se observa con detenimiento los criterios de selección de familia, el puntaje fijado por las trabajadoras sociales para elegir a las familias se da prevalencia a los niños menores de 10 años, criados en el seno de un matrimonio católico, o, en su defecto, al cuidado de una mujer viuda o abandonada. (Tabla 3)

Tabla 2

EL PROBLEMA ESCOLAR. POBLACIÓN Y AUSENTISMO ESCOLAR

<i>Personas en edad escolar</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Que asisten a la escuela</i>	294	43.56
<i>Que no asisten a la escuela</i>	381	56.44
<i>Totales</i>	675	100.00

Fuente: Oficina de Planeación. "El problema de los tugurios en la ciudad de Medellín y su posible solución". Medellín, [ca. 1961]. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Planeación, S. Informes, C12, L1, f. 145.

La religiosidad también fue el blanco de constantes valoraciones por parte de las trabajadoras sociales, quienes aseguraban que las familias en los tugurios dejaban de lado el “verdadero sentido y concepto de religión que es necesario inculcarle al niño desde pequeño”.⁶⁷ A los ojos de las trabajadoras sociales, estas familias se encontraban ante los problemas surgidos de la experiencia urbana, retos que facilitaban una actitud de cuestionamiento a valores tradicionales, así hubiesen sido aceptados por ellos, generando una reacción negativa hacia la religión, como resultado de una aceptación superficial de los principios del catolicismo. Afirmaban que: “el concepto de religión se reduce a las prácticas externas: novenas, rosarios, asistencia a la misa, prácticas que puede afirmarse son una prolongación de las tradiciones que conservan”.⁶⁸ A pesar de reconocer la labor llevada a cabo por las parroquias y congregaciones religiosas, que por medio de la evangelización y asistencia a los pobres intentaban salvaguardar el aspecto moral de estas familias, las trabajadoras sociales consideraban que estas ayudas eran limitadas en el propósito de transformar la población, de educarla en los valores adecuados para habitar la ciudad. En un espacio donde el imperativo era la precariedad, menguaban los intentos de acercarse a dios, se mantenía solo vínculo mediado por una religiosidad popular inundada de supersticiones.

Las asistentes sociales afirmaban, por ejemplo, que los habitantes de los ranchos de la Alpujarra, uno de los sectores más densos, no se sentían como miembros de la parroquia, y “su concepción se limita casi exclusivamente a prácticas exteriores”.⁶⁹ Su juicio

⁶⁷ Naranjo y Quijano 124.

⁶⁸ Naranjo y Quijano 124.

⁶⁹ Naranjo y Quijano 134.

cuestionaba incluso la vigorosidad del sentimiento religioso, al considerarlo inadecuado o insuficiente, llegando al punto de escudriñar y hacer valoraciones sobre el fuero interno. La religión era esencial en la misión de ‘recristianización’ de la familia, porque servía como un antídoto contra nuevas ideologías, pues las “creencias y actitudes de origen cambian lentamente y hace difícil la adaptación de nuevas ideas contrarias a ella”.⁷⁰ Además de la parroquia y el sacerdote, en los barrios construidos por la Fundación debía crearse un Movimiento Familiar Cristiano, acompañado de conferencias para los esposos, orientación para los niños y la realización de ejercicios espirituales.⁷¹

La marginalidad también era interpretada como consecuencia de convivir en condiciones ambientales particulares. Las asistentes sociales emprendieron la labor de estudiar los elementos que influían sobre los tugurios, y cómo las familias campesinas inmigrantes, en proceso de adaptación a la ciudad, se veían afectadas por tales ambientes, convirtiéndose en ‘tugurianas’. Bajo la premisa de que el hombre no sólo modifica el ambiente para satisfacer sus necesidades, sino que era influido por él, concluían que “Hombre-Ambiente: son términos correlativos e inseparables”.⁷² Las interpretaciones sobre los tugurios, comúnmente fueron asociadas a cuestiones biológicas. A la manera de animales o plantas, que establecen relaciones con el entorno, y son condicionados por factores como clima, altitud, topografía, que determinan su coloración, ciclo de vida o tamaño; las condiciones ambientales afectaban, en igual proporción, a los habitantes de los tugurios: pues “el ambiente social ejerce una gran influencia sobre todos los individuos a quienes llega por decirlo así a imponerles una norma que va adquiriendo fuerza. Pueden ser costumbres nocivas o inmorales propiciadas por un ambiente bueno o malo que las ha creado”.⁷³

La Alpujarra era el sector de tugurios más populoso de la ciudad, con más de 600 familias distribuidas en diferentes asentamientos en la margen derecha del río Medellín. En este lugar las trabajadoras sociales tuvieron contactos sistemáticos con los habitantes por medio de entrevistas, observación en campo y estadísticas que les sirvieron para describir algunos detalles de la vida de las familias, evidenciando lo que más les inquietaba: la

⁷⁰ Uribe y Penagos, 49.

⁷¹ Fundación Casitas de la Providencia. "Plan de trabajo asistencia social Casitas de la Providencia en 1962". Medellín, s.f. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, T. C17, L3, f. 54

⁷² Naranjo y Quijano 62.

⁷³ Naranjo y Quijano 126.

situación de la niñez, educación, salubridad, la religiosidad, la alimentación y oficios; además de la influencia que el tugurio tenía en las relaciones entre vecinos (carencia de privacidad y aislamiento), y la familia (falta de intimidad y discreción).

Se trataba de un sector mixto compuesto por industria, comercio y viviendas, y se encontraba cerca de parroquias como El Sagrado Corazón y el Perpetuo Socorro, la Residencia Social El Carmelo, la Inspección de Policía de Guayaquil, la Estación del Ferrocarril, la Plaza de Mercado Cisneros y Guayaquil. Para efectuar los estudios socioeconómicos las trabajadoras sociales de Casitas de la Providencia lo dividieron en ocho zonas: Los Chivos, Federación, Calle 40, Solar N° 1, 2 y 3, Los Kioskos y Avenida del Río.

Los Chivos, sector constituido por 80 ranchos construidos cerca de la Federación de Cafeteros, cercano a Guayaquil, mercado popular de la ciudad, se había convertido, según las trabajadoras sociales, en “refugio de toda clase de forajidos y centro de frecuentes delitos”, influenciando de manera negativa a las familias que habitaban el sector, a las cuales atribuían un bajo nivel social y moral.⁷⁴ El sector Federación conformado por 40 ranchos en la esquina de la Federación de Cafeteros, se encontraba en un lugar abierto, lo que hacía que sus condiciones físicas e higiénicas fuesen mejores que en Los Chivos, lindaba con tres cantinas y centros de juegos donde asistían niños y adolescentes. El sector de la Calle 40, era el mejor constituido, a los ojos de las trabajadoras sociales, tenía una calle amplia, bien trazada y viviendas construidas con materiales más resistentes que le brindaba a las familias mayor independencia que los demás sectores, aunque estaba rodeado por expendios de licor que se convertían en “sitios de reunión de marihuaneros y piperos”.⁷⁵ Los solares 1, 2 y 3 estaban ubicados entre la Calle 40 y la Avenida del Río, con un total de 190 ranchos, ubicados en terrenos quebrados, estaban “compuestos por un cuarto estrecho y oscuro [que] hace que sus moradores desarrollen sus actividades cotidianas fuera de los mismos, circunstancia que impide la independencia e intimidad familiar, favoreciendo la promiscuidad y conflictos familiares”.⁷⁶ El sector de Los Kioskos, con un total de 140 ranchos, situado entre la carrilera, la Avenida del Ferrocarril (carrera 57) y entre solares deshabitados, allí las trabajadoras sociales registraron la presencia de

⁷⁴ Naranjo y Quijano 30.

⁷⁵ Naranjo y Quijano 31.

⁷⁶ Naranjo y Quijano 32.

organización de la comunidad, sustentada en la ayuda mutua, aunque no estaba exento de problemas morales y sociales como los demás sectores. El sector de la Avenida del Río, ubicado a lo largo de la carrilera y sobre la margen del río Medellín, habitado por 90 ranchos, por la proximidad al río las condiciones higiénicas eran desfavorables, su cercanía a los rieles del ferrocarril ofrecía “peligros especiales para los niños y motivo permanente de perturbación sobre todo en las horas de la noche”.⁷⁷ (Figura 4)

Figura 4



“Juego que puede acabar en tragedia”, *El Correo* (Medellín), diciembre de 1968: 3

Los hombres eran albañiles, obreros, bulteadores o areneros; las mujeres se dedicaban al servicio doméstico los días a la semana o trabajaban en restaurantes en las noches. Se dedicaban a estos oficios de forma independiente, esporádica, sin salario o remuneración fija, por lo que las trabajadoras sociales afirmaban que vivían en un ambiente de “inseguridad económica” que les impedía satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el vestido o la vivienda. Según el informe elaborado por las trabajadoras sociales Quijano y Naranjo, la dieta estaba compuesta por azúcar y harinas, y subrayaban el

⁷⁷ Naranjo y Quijano 33.

hecho que “un porcentaje significativo de la población, solo tiene para sustento diario ‘agua dulce’ únicamente (agua con panela)”.⁷⁸

La Alpujarra era definida como “una agrupación de familias miserables, centro de prostitución y marihuana, una deshonra de las sociedades”.⁷⁹ De esta particular visión, resultaba una relación cifrada por el extrañamiento, que convertía al marginado en un extranjero en la ciudad. Simultáneamente, estas comunidades eran caracterizadas por un fuerte sentimiento de “nosotros”, sustentado en la ambivalencia de rechazar sus condiciones de vida, al tiempo que asumían una posición de defensa “por ser objeto de crítica y amenaza”. Quedaban a la merced de organizaciones políticas externas que “a base de campañas disociadoras [...] crean en ellos un sentimiento de rebeldía, choque continuo, desconfianza y recelo”.⁸⁰

A la par de la amenaza externa asociada a organizaciones de izquierda, las trabajadoras sociales se preocuparon por las relaciones entre vecinos y al interior de la familia, y cómo el tugurio, en su dimensión material, afectaba la intimidad entre los esposos y los hijos; e impedía la privacidad y aislamiento con los vecinos. La vivienda era entendida como correlato de la vida familiar, el tugurio, al estar construido en materiales desechables impedía la construcción de una barrera entre el espacio privado de la familia y el entorno, las trabajadoras sociales afirmaban que, “la familia en muchas ocasiones no puede discutir sus problemas, tener ratos de conversación y camaradería íntima; cuando no es, que se ven obligados a ser testigos de peleas y escándalos de los vecinos”.⁸¹ Se borraba la frontera entre el ámbito privado (secreto, discreción) y se ventilaban públicamente los conflictos que debían interesar solo a los miembros del grupo familiar. Por otra parte, al interior de los ranchos, el hacinamiento era la norma, un “ambiente oscuro y estrecho”, que rara vez contaba con divisiones internas, por lo que los miembros se mezclaban todo el tiempo confundiendo los roles al interior de la familia, al no existir una “separación adecuada entre los dormitorios”, los esposos no encontraban un ambiente propicio para satisfacer sus necesidades íntimas:

“la sensible ternura de la mujer es suplantada por la fría indiferencia que esconde más un justo pudor, la preocupación de que los hijos sean espectadores de sus

⁷⁸ Naranjo y Quijano 60.

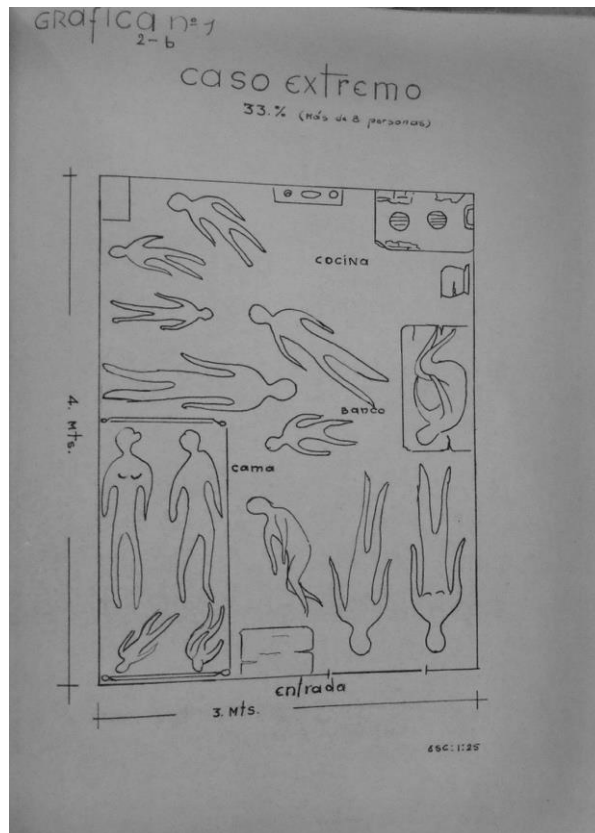
⁷⁹ Naranjo y Quijano 66.

⁸⁰ Naranjo y Quijano 67.

⁸¹ Naranjo y Quijano 49.

demostraciones de cariño; circunstancia esta que va minando las relaciones conyugales y causa muchas veces de que el esposo trate de buscar fuera de su esposa la satisfacción que ésta por estar cohibida no puede brindarle, como podrá apreciarse en el aparte “Relaciones esposo” [...] Pero lo que más frecuente y de consecuencias más funestas es el hecho de que los hijos sean testigos de estas relaciones íntimas de sus padres; relaciones que en muchos casos no se desarrollan dentro de un ambiente de discreción y delicadeza”.⁸² (Figura 5)

Figura 5



“Caso extremo de hacinamiento 33% (más de 8 personas)”. Tomado de Margarita María Quijano e Inés Naranjo Botero, “Cómo afecta la organización familiar el ambiente de la vivienda-tugurio”, 1963

El tugurio trastocaba cuestiones fundamentales de la familia: privacidad y la intimidad. Las trabajadoras sociales interpretaron como un indicador que varias personas durmieran en el suelo o en una misma cama; además de no contar con espacios donde secar la ropa en “un lugar protegido y privado”.⁸³ En teoría, una casa construida en material, con la distancia suficiente y unas divisiones internas definidas contribuiría a cambiar muchas de estas situaciones, de allí que las trabajadoras sociales se empeñaran, durante la fase de rehabilitación o reeducación de los habitantes de tugurio, en enseñar a las señoras cómo

⁸² Naranjo y Quijano 50-51.

⁸³ Naranjo y Quijano 45.

dividir los espacios de la casa (separación de cuartos, cocina) y en criticar la continuidad del hacinamiento (distribución por edades y sexo de las tres habitaciones con que contaba la vivienda en el barrio Villa Socorro). Al mismo tiempo mostrar preocupación por los lugares donde la gente extendía la ropa, pues no debían quedar a la vista de ningún vecino (les preocupó la existencia de un solar en las viviendas construidas por la Fundación, pues la gente continuaba exponiendo sus “haberes al público”).⁸⁴

A pesar de todas las críticas a las condiciones de vida de la población, las trabajadoras sociales eran optimistas con respecto al traslado y la construcción de una nueva comunidad en Villa Socorro, un cambio que sería liderado por ellas, deducían de la composición poblacional, predominantemente joven, que el “el material humano es susceptible de mejoramiento; aún más, gran parte de la comunidad está modelándose apenas y en la época donde lo que se recibe es definitivo para el futuro”.⁸⁵

⁸⁴ En 1965 las trabajadoras sociales que valoraban la adaptación de las familias del barrio Villa Socorro, afirmaban que: “El lugar para secar la ropa si ha sufrido en la totalidad de los habitantes, una desmejora bastante grande; aunque todas las casas ahora tienen manera de cercar el solar y por tanto, oportunidad de cercar la ropa privadamente, en la actualidad pocos lo han logrado hacer, dando como resultado que la calle se utilice para tal fin. Esto presenta un aspecto antiestético, fuera de que lleva a la gente a realizar labores propias de la intimidad del hogar en la calle, lo que ocasiona el que las personas tengan que revelar su situación a todo el barrio, pues ya se ha roto la intimidad individual al tener que exponer sus haberes al público”. Luz Estela Vásquez y Gabriela Villegas, *Cambio de vivienda. Estudio de los efectos que produce en el funcionamiento social según investigación realizada sobre setenta familias trasladadas al barrio Villa Socorro* (Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1965) 52.

⁸⁵ Naranjo y Quijano 44.

2. Experimento social

En la fase experimental, con gran dosis de incertidumbre, los investigadores pretenden conocer, a través de la intervención de ciertas variables, las características de un determinado fenómeno, mezclan, miden, clasifican los elementos a utilizar, y luego, con actitud expectante ante los resultados intentan aprehender la lógica de aquello que observan, y a partir de allí, adaptar los protocolos, confirmar las hipótesis o falsearlas. Un factor importante de este proceso son las condiciones, controladas en el laboratorio (temperatura, materiales, tiempo), se distinguen especialmente de lo que sucede en el campo, fuera del laboratorio el observador manipula pocas variables, no tiene más remedio que concentrarse, percibir y describir el entorno con gran atención. En cualquier caso, el producto de un experimento está sujeto a la variabilidad y las contingencias, consecuencias no esperadas de aquello que no se tiene certeza.

A la manera de un experimento, la Fundación Casitas de la Providencia, implementó estrategias de control social en barrios construidos para trasladar a las familias desalojadas del centro de la ciudad, en un programa de ‘rehabilitación social’: reunió elementos, en un ambiente, supuestamente estable (barrio), con factores o prácticas controladas por los reglamentos, y atendió a los resultados adaptando su modelo. En este capítulo haremos un acercamiento a la historia de Villa Socorro, un barrio construido a principios de 1960 por Casitas de la Providencia para trasladar las familias erradicadas de los tugurios de La Alpujarra, La Iguaná, El Bosque y el Cementerio Universal, en un intento de comprender la configuración de las relaciones de poder en el contexto urbano, y cómo la aplicación de este programa tuvo consecuencias inesperadas tanto para los funcionarios de la Fundación como para los habitantes del barrio. Además, nos permitirá contrastar el objetivo del programa con las contradicciones que emergieron en su aplicación (imagen/prácticas institucionales), por lo que tuvo que adaptarse a las nuevas exigencias del contexto y recurrir a diferentes combinaciones para garantizar un margen de control de la población, legando el proyecto social a la caridad privada.

2.1. El desalojo de La Alpujarra y el traslado al barrio Villa Socorro

Después de la celebración de una Exposición Industrial (1944), para la cual se habían construido kioscos de concreto e instalado jardines a lo largo de la Avenida del Río, La Alpujarra se convirtió en un sector atractivo para el turismo local. Años después el terreno fue descuidado y obreros municipales fueron autorizados a convertir los kioscos en viviendas, de esta manera comenzó la invasión del sector (1957 y 1962), hasta el momento en que la Fundación Casitas de la Providencia comenzó la preparación para el traslado al barrio Villa Socorro.⁸⁶ Varios factores contribuyeron a la proliferación de los tugurios en La Alpujarra: la cercanía al río Medellín, la plaza de mercado Cisneros y el ferrocarril, convirtiéndose en un centro que atrajo mucha “mano de obra ruda: bulteadores, carretilleros, cadeneros, etc., trabajos estos que no exigen capacitación ninguna y muy aptos para campesinos recién desplazados”.⁸⁷

De esta manera la Fundación Casitas de la Providencia se embarcó en uno de sus proyectos más ambiciosos: Villa Socorro, un barrio construido para albergar a las familias erradicadas de la Alpujarra, zona comprendida entre la carrera 52 [Carabobo], la calle 44 (San Juan) y la margen derecha del río Medellín, lugar donde se erigiría años después el Centro Cívico –actualmente el Centro Administrativo La Alpujarra- (Figura 6), acorde con el Plan Piloto. La Fundación Casitas de la Providencia se comprometió con el Departamento de Valorización, mediante un contrato, “a despejar completamente de tugurios los terrenos comprendidos dentro de la obra [de] remodelación de la Alpujarra en los linderos del denominado ‘Triángulo de la Alpujarra’”. El Departamento de Valorización concedió a la Fundación plazo hasta el 31 de mayo de 1963 para el cumplimiento del contrato.⁸⁸

⁸⁶ Naranjo y Quijano 26.

⁸⁷ Naranjo y Quijano 27.

⁸⁸ Federico Vásquez, Jairo Duque y Mario Molina. “Contrato de valorización”. Medellín, 1962. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L2, ff. 101- 102.

Figura 6



Transformaciones espaciales en La Alpujarra. Superposición de aerofotografía de 1959, evidencia la presencia de tugurios, y una imagen satelital muestra las transformaciones del espacio que actualmente es el Centro Administrativo de la ciudad. Elaborado a partir de aerofotografía 1959. Centro de Documentación Planeación Municipal. [Ver anexos/Aerofotografías/Alpujarra1959]

La primera medida que tomó la administración municipal fue la congelación de los tugurios. Durante el censo llevado a cabo en 1961, se había entregado a cada familia una placa con nombre, oficio y número de hijos, respaldadas con tarjetas, que era remitidas al Departamento de servicio social y Planeación Municipal, quienes se encargaban de hacer un seguimiento a los cambios demográficos, con el fin de controlar el crecimiento del asentamiento. De esta manera, los tugurios de La Alpujarra entraron en un proceso administrativo para facilitar su erradicación, aquellos que recibían la placa se postulaban como candidatos para la adjudicación de la vivienda, si cumplían con los criterios de selección diseñados por el servicio social. La junta directiva de Casitas propuso que quienes no reunieran las condiciones corrieran “una de estas dos suertes: o será enviado a la Cárcel de La Ladera por infractor de las disposiciones penales y de policía (Decreto N° 0014, etc.),

o se le recluirá en la Casa de Mendigos de Belencito. Con los niños que habiten el tugurio se tomará una medida de protección para que no corran peligro de ninguna naturaleza”.⁸⁹

No todos los habitantes de los tugurios eran considerados aptos para habitar los ambientes planificados por la administración municipal, se seleccionaban de acuerdo a criterios definidos por el servicio social, especialmente la capacidad de rehabilitación, es decir, la posibilidad de transformar sus actitudes y prácticas por medio de instrucción de las trabajadoras sociales. Los informes de las trabajadoras sociales dan cuenta de los e que se llevaban a cabo para seleccionar a las familias: entrevistas, conferencias, mesas redondas y visitas domiciliarias, con el propósito de dar a conocer a la población cuáles eran los reglamentos, los recursos con los que contaba el barrio y los compromisos que debían asumir con la institución después de firmar el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. (Tabla 3)

Tabla 3

Criterios de selección de familias

<i>CRITERIO</i>	<i>PUNTAJE</i>
<i>Hijos menores de 10 años</i>	3
<i>Hijos menores de 10 a 14 años</i>	2
<i>Hijos menores de 15 a 18 años (que no trabajen)</i>	1
<i>Estudiantes</i>	3
<i>Inválidos</i>	3
<i>Casados</i>	7
<i>Mujer viuda o abandonada</i>	7
<i>Unión libre rehabilitable</i>	3
<i>Madre soltera rehabilitable</i>	2
<i>Capacidad de rehabilitación, según concepto de la Asistente social</i>	5

Fuente: Fundación Casitas de la Providencia. "Plan de trabajo asistencia social Casitas de la Providencia en 1962". Medellín, s.f. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 52

En abril de 1961 la junta directiva discutió los asuntos relacionados con la nueva urbanización construida por la Fundación para albergar a la población erradicada de la Alpujarra y del barrio de cartón cercano a la calle Colombia (Otrabanda). En medio de un

⁸⁹ Bernardo Trujillo Calle. "Memorando para el señor Gobernador sobre el problema de tugurios". Medellín, abril 3 de 1961. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Estudios, C17, L1, f. 59.

acalorado debate se expusieron argumentos a favor y en contra del traslado masivo y la concentración de las familias en un solo barrio. Acorde con las recomendaciones de las asistentes sociales con respecto a los traslados masivos, el concejal García Avendaño, sostenía que no era aconsejable “concentrar dos mil familias heterogéneas todas ellas de distintas costumbres”, lo más aconsejable era “por distintos factores de orden moral, social y económico, la localización de varios núcleos de vivienda, para formar distintos grupos humanos de características y condiciones similares”,⁹⁰ y favorecer de esta manera la acción de las asistentes sociales con grupos reducidos. Esta postura fue apoyada por el Hernando Barrientos, representante de Caritas arquidiocesana. En contraste, el director de la Fundación, Mario Molina, y Jorge Restrepo Uribe argumentaron que las familias no eran heterogéneas, pues hacían parte del conglomerado pobre de la ciudad, a pesar de que “dentro de dichas familias se encuentra[n] individuos marihuaneros, rateros, etc.”, la gran mayoría de las familias se consideraban buenas o por lo menos rehabilitables, insistiendo en que “no consideraba[n] que la concentración pudiera producir ningún problema [...] que se trata de un 60% por lo menos de gente buena y que sólo carece de recursos económicos. La idea de distribuir la concentración en varios terrenos manifestó que le parecía antieconómica porque exigiría la duplicación de los servicios”.⁹¹

Después de estudiar 21 ofertas de terrenos, en la sesión del 20 de junio de 1961 la Junta Directiva de la Fundación autorizó la compra de 457.000 varas cuadradas de tierra en Villa Socorro. Aduciendo como principales ventajas para su compra, el bajo costo, la posibilidad de instalar redes de servicios públicos y una población circundante supuestamente similar a los habitantes de tugurios.⁹² El arquitecto Luis Uribe Bravo fue el encargado de diseñar las viviendas y el Centro Cívico.⁹³

Para el traslado, la Fundación dio preferencia a las familias que poseían la placa entregada durante el censo, quienes carecían de ella fueron tenidos en cuenta, aunque se dio prevalencia a los primeros. También se debían excluir los adultos que conviviesen solos,

⁹⁰ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 46 Junta directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, junio 12 de 1961. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 14-15.

⁹¹ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 47 Junta directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, junio 15 de 1961 AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 19.

⁹² Villa Socorro linda con los barrios Santa Cruz y Andalucía, construidos por medio de la urbanización pirata, es decir, la compra de lotes para autoconstrucción de vivienda.

⁹³ Mario Molina Cardona. “Informe sobre Fundación Casitas de la Providencia”. Medellín, noviembre 2 de 1961. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L2, f. 4.

especialmente en el caso de ancianos o enfermos, quienes debían remitirse a asilos o centros de salud, al igual que a personas adultas que no tuviesen vínculos familiares de ninguna clase, prostitutas o personas con solvencia económica; en caso de tratarse de “rateros, marihuaneros, corruptores de menores, etc., corresponde a la Justicia atender a estos individuos y no a la Fundación”. Se daba prevalencia a familias legítimas, es decir, amparadas por el matrimonio católico; aunque no se excluyeron las uniones libres rehabilitables (solteros), las madres solteras o viudas, pero sí se rechazaron las uniones producto del adulterio y sin hijos.

La Fundación como un mecanismo amortiguador de las diferencias de clase, buscaba temperar las expresiones extremas de desigualdad, enarbolando las banderas del amor al prójimo de la doctrina social de un cristianismo renovado, pretendía fortalecer los vínculos con los desafortunados y cerrar la brecha por la que afloraban los inconformismos que posiblemente condenarían a la sociedad a una irremediable transformación de las estructuras que sustentaban la desigualdad. Con respecto a la pertinencia de los criterios de selección para el traslado de familias, el director expresaba,

“Se ha dicho que las casas son un premio que se da a las familias, yo digo que no porque el premio es el reconocimiento de una acción buena de la persona en cualquier campo de la actividad humana, por lo tanto más bien parece que la sociedad, a través de “CASITAS DE LA PROVIDENCIA”, está reparando en parte la culpa que ha tenido en el estado actual de los moradores de esos barrios. Suponer que la Fundación está dando un premio, es suponer que está haciendo juicio y puede claramente definir quiénes merecen y quiénes no. No es el fin de la Fundación juzgar, sino cumplir con el precepto cristiano de “amar al prójimo como a sí mismo”, aún con los que puedan estar en pecado y los que hayan violado la ley, que es el fin de la Institución hacer ciudadanos útiles. Si hay alguna persona que merezca la desaprobación de la Iglesia, Ella tendrá métodos para castigarlos, si han cometido delitos contra la sociedad, el poder público deberá sancionarlos, pero no es la Institución la obligada a hacer justicia sino a rehabilitar a todos los habitantes que están en esa situación menesterosa [...] Jesucristo nunca rechazó a los pecadores como la Magdalena, ni a los leprosos ni a Saulo, a todos los atrajo hacia una vida mejor y a un mundo superior, así nosotros que somos criaturas, no podemos hacer cosa distinta que seguir ese mandato, tratar que todos se levanten a un nivel digno lo cual conseguirán si se les da la oportunidad”.⁹⁴

Propuso hacer el traslado con promesas de compraventa y aquellos que no cumplieren a cabalidad los criterios exigidos para la rehabilitación se mantuviesen en período de prueba durante un año, ya que “después de un año no podrán quejarse de injusticia porque ya la sociedad, a través de la Entidad, cumplió su deber cristiano”. Esta

⁹⁴ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, marzo 21 de 1962. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 55- 59.

actitud condescendiente debía convertir el modelo de la Fundación Casitas de la Providencia en un ejemplo para el país, al tratarse de una “rehabilitación incondicionada”, que, según su director, constituía un intento loable de “ayudar a los menesterosos sin distinciones de especie alguna”.⁹⁵

Esta decisión generó desavenencias entre las trabajadoras sociales y la junta directiva de la Fundación. Las primeras, preocupadas por las dificultades de educar esta población agreste, procuraron diseñar y aplicar una serie de filtros como garantía de selección de los elementos propicios, para arraigarlos en los ambientes controlados. Los integrantes de la junta, a pesar de las objeciones, estuvieron de acuerdo en la necesidad de acelerar las erradicaciones, aún a costa de sacrificar la armonía en los nuevos barrios. Sobre la junta recaían presiones por recuperar los espacios – por parte de la Oficina de Planeación, Valorización y el Instituto de Crédito Territorial-, como encargada de la administración de recursos, de adquirir terrenos, procuraba conseguir arreglos de tipo ‘económico’, buscando evitar sobrecostos y dilaciones. En la erradicación de La Alpujarra y el traslado a Villa Socorro logró imponerse la junta por medio de una selección ‘incondicionada’ y un traslado apresurado.

Entre 1961 y 1964 La Fundación Casitas de la Providencia construyó, por etapas, el barrio Villa Socorro, para albergar a mil familias provenientes de los tugurios erradicados en el centro de la ciudad, especialmente La Alpujarra, San Benito, Estación Villa, Calle Barranquilla, Bosque y Cementerio Universal. El proyecto se localizó en terrenos en el nororiente de la ciudad, entre Santa Cruz y Andalucía, barrios construidos por medio del loteo y autoconstrucción y que era catalogados como barrios piratas (Figura 7). Con el traslado masivo Casitas se jugó su reputación, sus programas fueron puestos a prueba por otras entidades, y estaban siendo duramente cuestionados tanto por sus objetivos, como por sus métodos, por parte de los funcionarios de la Oficina de Planeación, y eran blanco de constantes observaciones por parte del Instituto de Crédito Territorial, sin contar con la polémica suscitada entre la junta directiva y las asistentes sociales por efectuar un traslado masivo a un solo barrio, después de que varios miembros de la junta advirtieran sobre la

⁹⁵ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, marzo 16 de 1962. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 58.

complejidad para manejar y dirigir a una población numerosa, con condiciones de vida similares, que a la postre amenazaba con convertirse en un problema de orden público.

Figura 7



Localización del barrio Villa Socorro. Elaborado a partir cartografía base Alcaldía de Medellín.

En 1962 se terminaron las primeras casas del barrio Villa Socorro, para finales de ese año comenzó el traslado por etapas de las familias seleccionadas por la Fundación Casitas de la Providencia en La Alpujarra. Las primeras casas fueron adjudicadas en la parte baja del barrio, cerca de Tango Bar, la carrera 52, el río Medellín y el barrio Niza. En volquetas del municipio fueron descargados en la vía principal. Una imagen fue recurrente: un terreno escarpado, de tierra árida y amarilla, una vía principal en forma de meandros. Un barrio dividido por sectores, con casas construidas en material (adobe y teja de eternit), en obra blanca y con solar. (Figuras 8 y 9) Las trabajadoras sociales, lista en mano, fueron asignando las casas y haciendo entrega de las llaves.

Pero el desalojo se efectuó con la policía y militares, quienes destruyeron los ranchos. Ese primer episodio generó el resentimiento de muchos pobladores, quienes recuerdan el trayecto en las volquetas del municipio, abandonaron la mayoría de sus enseres, pues además de la casa la trabajadora social prometió camas, muebles y demás implementos necesarios para comenzar una nueva vida en el barrio. Superado el sinsabor del desalojo, su decepción fue mayor al ser descargados en la vía principal, pues “las calles no estaban pavimentadas, eso era barrio amarillo, que cuando llovía se ponía como jabón de lo liso”.⁹⁶ Varios testimonio coinciden al afirmar que las calles sin asfaltar y los lodazales de tierra amarilla causaron el mayor disgusto entre los habitantes del barrio, quienes por años debían “salir con los dos pares de zapatos, llevarse un costalito en la bolsita pa echar los sucios, ir al centro a hacer la vuelta y ahí volvérselos a poner para subir”.⁹⁷ Llegando incluso a reconocerse como ‘los patiamarillos’.

Figura 8



Tipo vivienda barrio Villa Socorro construida por la Fundación Casitas de la Providencia. Tomada de Luz Estela Vásquez y Gabriela Villegas, *Cambio de vivienda. Estudio de los efectos que produce en el funcionamiento social según investigación realizada sobre setenta familias trasladadas al barrio Villa Socorro*, 1965.

⁹⁶ Entrevista con Virginia Ríos

⁹⁷ Entrevista Genibora Acevedo

Figura 9



Tipo vivienda barrio Villa Socorro construida por la Fundación Casitas de la Providencia. Fotografía: Kelly López, 2015

La Fundación construyó tres tipos de casas, que diferían en el número de habitaciones. El primer tipo estaba constituido por tres habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y solar, costaba \$ 7.500. El segundo tipo constaba de dos habitaciones con cimientos para la tercera con un costo de \$ 6.700, y el último tipo contaba con dos habitaciones y tenían un valor de \$ 6.500. Las cuotas se fijaron a veinte años con una cuota mensual de \$ 20. Si por medio de la adjudicación de las viviendas Casitas pretendió cambiar las condiciones de habitabilidad de las familias de tugurios, caracterizadas por el hacinamiento, las casas con tres habitaciones solo ofrecieron como posibilidad una división sexual del

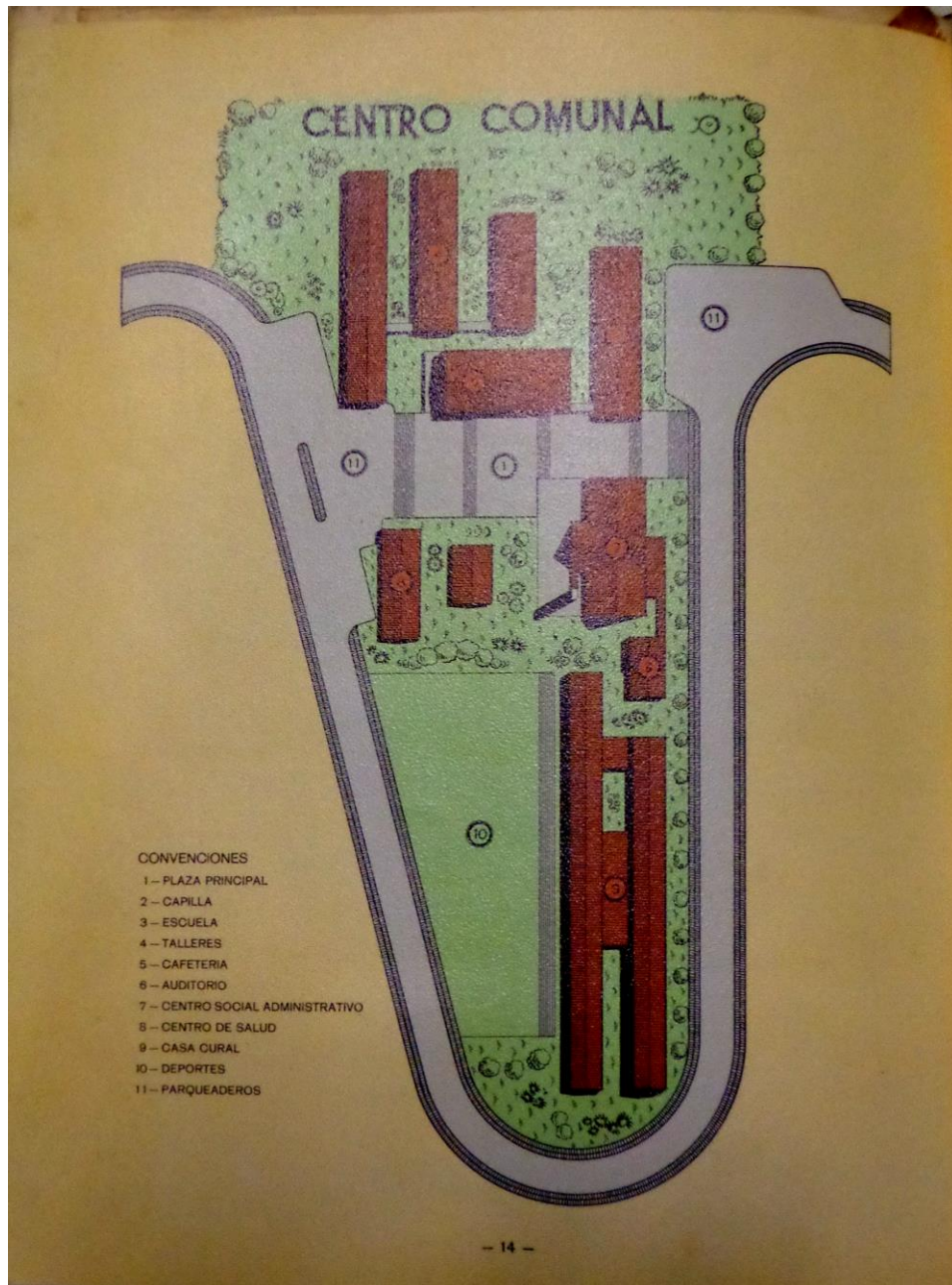
espacio,⁹⁸ es decir, una habitación para los cónyuges, otra para los niños y otra para las niñas, si el promedio oscilaba entre 6 y 10 personas por familia les tocaba dormir “uno encima del otro”.⁹⁹

Casitas de la Providencia planificó los espacios comunes, pero no los construyó. De acuerdo al plano de Villa Socorro se reservaron los lugares debía ser erigirse la parroquia, las escuelas, las zonas de recreación y los senderos; sin embargo, la materialización de epicentros de la vida comunitaria solo fue posible mediante la organización comunitaria que permitió la gestión de recursos: donaciones, materiales y permisos. Para las trabajadoras sociales de la Fundación la respuesta de los habitantes del barrio ante la carencia de los espacios comunes hacía parte de una estrategia que pretendía la institucionalización de la organización política y comunitaria. Los vecinos debían unirse para conseguir lo que les hiciera falta y llevar a cabo las obras, según el plan del servicio social, se verían en la obligación de recurrir a la dirección y gestión de funcionarios y agentes externos autorizados por el gobierno. Acorde con la propuesta, el arquitecto Luis Uribe Bravo entregó a Casitas de la Providencia, junto con el diseño de las viviendas, los planos de las escuelas, los talleres, la residencia social y la parroquia. Estas edificaciones fueron planificadas en un terreno en medio del barrio, concentradas en un solo sitio y como parte de lo que se denominó Centro Cívico. (Figura 10) En las actas de la Fundación aparece el presupuesto estimado para llevar a cabo las obras, una inversión cercana a los dos millones y medio de pesos. Para conseguir los recursos contactaron al Consulado Americano, acorde directrices de la Alianza para el progreso.

⁹⁸ “Si consideramos que la casa más grande tiene tres habitaciones, se podría distribuir una familia de ocho personas así: una habitación para los esposos y otras dos para los seis miembros restantes. Ciertamente esto sería fácil si esos miembros fueran niños o al menos del mismo grupo familiar, pero veremos que, en la práctica, hay personas extrañas permanentemente, que son mezcladas sin consideración con los demás, los padres duermen en la misma habitación con los hijos, personas de ambos sexos se acomodan juntos. Estos hechos son apreciables a la vista del observador que visita las casas”. Luz Estela Vásquez y Gabriela Villegas, *Cambio de vivienda. Estudio de los efectos que produce en el funcionamiento social según investigación realizada sobre setenta familias trasladadas al barrio Villa Socorro* (Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1965) 41.

⁹⁹ Entrevista con Ángela Arroyave, habitante de Villa Socorro, 2015.

Figura 10



Plano de Centro Comunal o Centro Cívico del barrio Villa Socorro, diseñado por el arquitecto Luis Uribe Bravo. Tomado de Margarita María Quijano e Inés Naranjo Botero, “Cómo afecta la organización familiar el ambiente de la vivienda-tugurio”

El gobierno de Estados Unidos suministró fondos con los que la Fundación financió la construcción de una escuela en Villa Socorro, con cuatro años de primaria para niños y

niñas.¹⁰⁰ Además, suministró alimentos, donados por la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior (CARE) para las familias numerosas, que se destinaron a un programa de salud pública y un proyecto de pavimentación de calles administrado por la Junta de Acción Comunal. Como el fundamento de las ayudas fue aprovechar el trabajo comunitario, es decir, de autoconstrucción, se pagaba el 50% en alimentos y el 50% restante en dinero a quienes participaban en las obras.¹⁰¹ Casitas de la Providencia construyó, por su parte, una guardería, un kínder y salas cunas, en los que madres solteras o jefes de hogar dejaban sus hijos mientras trabajaban.

Es así como por medio de reformas sociales básicas e inversiones destinadas a proveer bienestar material y educación, organismos en diferentes escalas, intentaron contener el creciente descontento social alimentado por la desigualdad en que se desarrolló el éxodo del campesinado a los centros urbanos, en un contexto caldeado por la polarización política y la emergencia de movimientos revolucionarios, especialmente después la Revolución Cubana. El objetivo era entonces canalizar el conflicto por medio de políticas de bienestar, haciendo partícipe, de alguna manera, del desarrollo a la población excluida de los beneficios de la industrialización.

Cada mes, en el centro de salud la Fundación repartía mercados a las familias numerosas y necesitadas, se entregaban porciones de cuchuco –arroz negro-, leche en polvo, harina, atún, queso y aceite, ingredientes con los que preparaban colada, arepas y sopa. Estos alimentos marcaron la infancia de muchos habitantes del barrio:

“Mi papá siempre fue coterero, siempre molestó con la madera, y de hecho se iba para el Urabá, para Turbo, a trabajar, con señores que se lo llevaban, muchas veces nos dejaba sin nada qué comer, entonces yo tengo un hermanito que le tiene fobia a la yuca y al maduro, porque nos tocaron semanas enteras comiendo solamente maduro o yuca [...] ahí era donde yo probé el queso, la leche en polvo, porque eso era un milagro, nosotros aquí no sabíamos, no conocíamos sino la papa, la yuca y el maduro que te digo, pero no más. Carne, de pronto, porque si a mi papá no tenían con qué pagarle cuando desarrumaba entonces le daban carne disque rompecamisa, le daban una carne dura [...] Todas esas ayudas de esas fundaciones fueron muy importantes”.¹⁰²

Aunque el suministro de estos alimentos fue fundamental para la supervivencia de los habitantes del barrio, era apenas un paliativo ante las desigualdades que les limitaban el

¹⁰⁰ Vásquez y Villegas 18.

¹⁰¹ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 61 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, mayo 8 de 1962. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 62.

¹⁰² Entrevista de Kelly López con Marta Giraldo, habitante de Villa Socorro, 2015.

acceso a otros alimentos también básicos para ellos, “porque digamos [la] Alianza para el Progreso podía mandar muchas ayudas, también te podían capacitar, pero [...] el estómago no da espera y harina, harina, harina... no es igual, papas, arroz y carne”.¹⁰³ Los habitantes de Villa Socorro fueron conscientes que estas ayudas eran de carácter temporal —dejaron de entregarse aproximadamente en 1972, según los testimonios—, además de restringidas, se aprovecharon mientras existieron, pero se combinaron con otras fuentes de ingreso que complementaron la dieta como leche líquida, carne, leguminosas y panela.

Villa Socorro como urbanización institucional, fue construida con el fin de dotar a los tugurianos de una vivienda con servicios públicos (agua, alcantarillado y electricidad), recursos a los que esta población accedía de forma limitada en los tugurios del centro de la ciudad.¹⁰⁴ La posibilidad de adquirir una casa los llenó de esperanzas, pues por fin podrían librarse del rótulo de ‘invasores’, a pesar de que algunos ofrecieron resistencia ante la oferta, la mayoría accedió sin meditarlo. Sin embargo, el episodio del traslado estuvo lejos de ser el fin de esta historia de disputas y conflictos, el barrio se convirtió en un verdadero “campo de batalla”, de competencia entre instituciones y proyectos políticos, “en un laboratorio de grupos y movimientos de todo tipo”.¹⁰⁵

2.2. Rehabilitación social o reeducación del habitante urbano: las familias piloto

La erradicación de los tugurios era considerada insuficiente en el propósito de librarse del problema de la marginalidad. Los desalojos eran la primera parte de un programa de control social, que en la segunda fase procuraba la transformación de actitudes y prácticas, en un intento de educar una población que se entendía como incapacitada para asumir las riendas de su propia vida. Si en un primer momento las relaciones de poder estaban basadas en una apropiación del espacio urbano en zonas de valorización, por medio del cual las elites asumieron el control del poblamiento a través de un modelo de zonificación y segregación socioespacial, en el ámbito simbólico, tuvo lugar una relación entre clases, en la cual las elites pretendían dirigir el cambio social (rehabilitación) en

¹⁰³ Entrevista con Ángela Arroyave.

¹⁰⁴ El suministro de agua se hacía por medio de piletas públicas, la luz la instalaban mediante contrabando y los servicios sanitarios eran suplidos por letrinas.

¹⁰⁵ Serna, Londoño y Betancur 153.

ambientes contruidos y regulados por funcionarios de la Fundación Casitas de la Providencia y la caridad organizada. La historia de Villa Socorro denota el esfuerzo de la élite industrial antioqueña por mantener y extender su control material y su presencia simbólica en la ciudad. A partir de la contradicciones suscitada en la aplicación del modelo de control social surgieron espacios para la participación política de los habitantes de Villa Socorro, que, como grupo subordinado, ingenió “estrategias para frustrar y revertir esa apropiación y también para conquistar más libertades simbólicas”.¹⁰⁶

Durante la primera reunión técnica interamericana de Vivienda y Planeamiento realizada en Bogotá en 1956, la jefa del servicio social de la Unión Panamericana y profesora del CINVA Josephina Albano, enumeró las orientaciones que debían seguir los profesionales latinoamericanos en los programas de vivienda. El servicio social debía estar enfocado en la dimensión social o el factor humano, es decir, en el desarrollo de un programa educativo denominado ‘Rehabilitación’. El objetivo principal de este plan era cambiar los hábitos de vida de los habitantes de los tugurios y lograr su integración como “fuerza productiva y activa en la vida nacional”.¹⁰⁷ Aseguraba que los tugurianos requerían además de una vivienda con servicios públicos, escuelas, centros de salud, lugares de esparcimiento e iglesias, una serie de orientaciones que garantizaran un uso adecuado de la infraestructura. La propuesta era clara al sugerir que debían ser los habitantes de los barrios quienes proveyeran estos espacios y servicios por sí mismos, el trabajador social solo debía estimular, orientar las organizaciones sociales y políticas que surgieran para tal propósito. A través de esta propuesta

“el organismo de vivienda asume una responsabilidad en cuanto a la vida vecinal. El hecho de que todos los habitantes sean nuevos vecinos, que no exista una estructura social para absorber a los que llegan como en un pueblo o vecindad antigua, necesita la formación de nuevas relaciones sociales y una estructura social nueva. Ofrece, también, la oportunidad de proveer nuevas experiencias”.¹⁰⁸

El proceso de adaptación al nuevo barrio tenía de tres dimensiones: material (vivienda y disposición de espacios), humana (distribución de roles y habitación de la casa) y social (organización comunitaria para la construcción de equipamiento colectivo y desarrollo de actividades culturales y religiosas). Sobre estas dimensiones se debía operar

¹⁰⁶ James Scott, *Los dominados* 232.

¹⁰⁷ Josephina Albano, *El factor humano en los programas de rehabilitación de tugurios* (Bogotá: Centro Interamericano de Vivienda, 1957) 1.

¹⁰⁸ Caroline Ware, *El servicio social y la vivienda* (Bogotá: Centro Interamericano de Vivienda, 1953) 43.

en fases: preparación, planeación, ejecución y evaluación. En cada una de ellas el servicio social debía estar al tanto y procurar no convertirse en un ‘quiste’ dentro de la comunidad, ya que su labor educativa era temporal, mientras los pobladores aprendían a valerse por sí mismos. La trabajadora social debía retirarse cuando estuviera probada su autosuficiencia y capacidad para resolver problemas.

La rehabilitación pretendía cambiar las actitudes surgidas en los tugurianos después de experimentar las particulares condiciones de vida en los ranchos, porque el hacinamiento, la falta de servicios públicos, la limitada educación e instrucción religiosa, habían gestado nuevas costumbres orientadas a la promiscuidad, la delincuencia y la agresividad. Condiciones ambientales particulares había producido “una cultura patológica que se va contagiando a los grupos”.¹⁰⁹ La rehabilitación se lograba por medio de un proceso de educación o reeducación, que consistía en “inculcar el acervo mental de otro [...] ayudar a los seres humanos a comprender las bases del orden y seguridad de un mundo sujeto a cambios rápidos”.¹¹⁰

La labor educativa comenzaba en el momento que se entregaba la vivienda. La trabajadora social tenía la labor de recibir a las familias desalojadas de los tugurios, con la intención de hacerlas sentir como en “casa”, debía suministrarles las indicaciones precisas sobre cómo usarla, velando siempre por su conservación. Las instrucciones debían ser sencillas y claras “para facilitar la comprensión por parte de personas de instrucción limitada”.¹¹¹ Más allá de la administración del proyecto de viviendas, las trabajadoras sociales debían velar por el establecimiento de un ambiente armónico, que no estaba exento de conflictos familiares o vecinales, por lo que debían convertirse en intermediarias del trabajo de caso, grupo y comunidad. El departamento de servicio social debía

“Capacitar al individuo y la familia para un funcionamiento social adecuado a través de la técnica del Servicio Social de Caso: procurar el desarrollo de la personalidad del individuo, la socialización y formación de líderes por el Servicio Social de grupo, y por último capacitar a la comunidad para que asuma plenamente la responsabilidad de su propio desarrollo y organización por medio de los métodos de organización de la Comunidad”.¹¹²

¹⁰⁹ Vásquez y Villegas 4.

¹¹⁰ Vásquez y Villegas 8.

¹¹¹ Albano 12.

¹¹² Fundación Casitas de la Providencia. “Informe de las actividades realizadas por el Servicio Social Fundación Casitas de la Providencia”. Medellín, julio de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 100

El desarrollo de la comunidad centró su acción en la creación y dirección de una asociación de vecinos encargada de gestionar los recursos para el barrio, se trataba de una organización política reconocida y legitimada por la entidad administradora del proyecto de vivienda. Los miembros de la Junta de Acción Comunal y sus líderes debían contar con la aprobación de Casitas de la Providencia. La trabajadora social debía encargarse de sugerir problemas sobre los que la Junta debía trabajar, sin evidenciar una agenda de trabajo o asumir directamente el control de la organización, su labor debía restringirse a mostrar ciertos indicios, a marcar la senda por donde debían transitar los destinos de la vida comunitaria.

En el barrio Santander,¹¹³ construido a finales de 1950 en el noroccidente de la ciudad, las trabajadoras sociales habían implementado algunos de los primeros programas relacionados con la rehabilitación social, especialmente en trabajo con un grupo por medio de talleres y capacitaciones, desarrollados con la ayuda de personal voluntario. Dictaban cursos de corte, cocina, bordado, tejido, pequeñas industrias, peluquería, enfermería, fabricación de muebles, pintura, música y baile, además de alfabetización e instrucción religiosa. A los señores les ofrecieron clases de carpintería, música, dictados los sábados en las tardes, sin interferir con sus horarios laborales, e incentivaron la creación de equipos de fútbol.¹¹⁴

La ‘rehabilitación’ estaba soportada en la metodología del trabajo social enfocada en casos, grupos y desarrollo de la comunidad, que en tres dimensiones (individual, humana y comunitaria). Constituyó un esfuerzo por controlar todas las dimensiones de la vida de estas familias en los barrios construidos, en ambientes “estables”. Las trabajadoras sociales fueron las protagonistas del proyecto educativo familiar, convirtiéndose en el puente entre los habitantes del barrio y la junta directiva de la Fundación. El programa se apoyaba en la educación de la familia, tanto los niños como sus madres, hermanas o padres debían

¹¹³ El barrio Santander fue construido por la Fundación Casitas de la Providencia en asocio con el Instituto de Crédito Territorial, ubicado en el noroccidente de la ciudad, en un terreno cedido a la Fundación por Julio Schwarzberg, un alemán que llegó a la ciudad en 1945, y era el propietario de un terreno comprendido entre la Autopista Norte y el Picacho. Santander albergó a las familias trasladadas del sector de la Iguaná. En este barrio la Fundación Casitas de la Providencia construyó las primeras 50 casas e implementó los primeros programas de rehabilitación. Ver: Lucila Dávila, Rodrigo Ospina y Francisco Agudelo. “Historia del Barrio Santander. Correspondiente a la Comuna N° 2”, Medellín, 1986. UdeA- Sala Antioquia. Historia de mi barrio, f. 2.

¹¹⁴ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 83 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, agosto 21 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 124.

inscribirse y participar en los programas que se dispusieran para cada uno de ellos: kínder, escuela, talleres de modistería, cajonería o la junta de acción comunal. El objetivo de la Fundación con el programa era exhibir esta población como ejemplo de que era posible intervenir los focos de pobreza y convertirlos en comunidades modelo, los barrios institucionales como territorios donde era posible gobernar. De esta manera, Casitas de la Providencia intentó crear una comunidad, materializar una utopía, controlar cada uno de las dimensiones de vida: intimidad, familia, comunidad, los lugares de encuentro y la organización política. En un taller, por ejemplo, se les incentivó a las habitantes del barrio Santander concursar en una competencia denominada la ‘casa modelo’, en la que se les enseñaba a las señoras a construir y distribuir los muebles al interior de las casas,

“Por tener la mayoría de las ventanas vidrios y necesitando cortinas, la orientadora se las indicó y ellos pidieron hacerlas. Disponiendo de una tela de costal que le habían regalado a la Residencia el grupo quiso emplearla, y se entregó a cada una un retazo, la orientadora indicó que podría hacerse con ella, cómo podía teñirse y cada una hizo según su necesidad y capacidad alguna cosa como: colchas, cortinas, tapetes, carpetas, chal, talegos para la ropa sucia, etc., en esto observó la orientadora como cada una la decoraba y daba un color diferente según el gusto [...] Viendo la necesidad de separar la cocina de la sala, se les enseñó a hacer un biombo que sirviera también para separar o independizar alguna alcoba ya que no disponían de puertas [...] Se les enseñó a hacer unas divisiones en ellas que les sirvieran para tenerlo todo aseado. Para tener el mercado en orden se les enseñó a construir un armario de fácil fabricación y poco costo, también se pintaron y marcaron los tallos para guardarlo. Se hicieron unas tablas con clavos para que sirvieran para colgar las ollas, cuchillos y cucharas. Por insinuación de la orientadora se hicieron unos charoles de triplex y lazos, muy bonitos y de fácil fabricación. La presidenta, enseñó a hacer unos guantes y coge-ollas muy bonitos y prácticos y también escobas de trapiar”.¹¹⁵

Las trabajadoras sociales, quienes se autoproclamaban “agentes de cambio”, sostenían que, por medio de estímulos, castigos y premios, era posible transformar al individuo y controlar una comunidad. Su objetivo era entonces “ayudar a la gente a que se ayude”.¹¹⁶ Por ello, asumieron como principio para la ejecución del programa, evitar la entrega de ayudas en forma directa y ‘paternalista’, que convirtiera a los pobres de la ciudad en “parásitos de la sociedad”.¹¹⁷ Casitas concibió la rehabilitación social como un programa para que

“la gente se insertara en la comunidad, en la sociedad, en las actividades legítimas, legales, también, que abandonara todos los lastres que traía de la vida de los tugurios.

¹¹⁵ Uribe y Penagos 43-44.

¹¹⁶ María Cristina Uribe y María Helena Penagos, *El servicio social en los programas de la Fundación Casitas de la Providencia* (Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1961) 18.

¹¹⁷ Uribe y Penagos 18.

La rehabilitación implicaba el autocuidado, autoconstrucción, la organización comunitaria, la organización en grupos, la educación. Múltiples actividades que tienen que ver con la inserción de la persona en una comunidad, ser activo, la formación de líderes”.¹¹⁸

La rehabilitación económica fue una de las principales preocupaciones de Casitas de la Providencia, sus programas estuvieron orientados a ofrecer capacitación y, en menor medida, ofrecer empleo para mujeres del barrio. Dando prevalencia a la dimensión económica, la Fundación reconocía que el problema de los tugurios había sido generado por la desintegración de la población inmigrante al sistema productivo, pues los ingresos que podía percibir de forma independiente eran insuficientes para el sostenimiento de la familia. La Fundación ofreció alternativas que versaron esencialmente en la capacitación en nuevos oficios (talleres) y el desarrollo de empresas comunitarias que operaban en los barrios, en especial los talleres de modistería.

El servicio social de Casitas de la Providencia consideraba que la mejor manera de educar era el ejemplo. Como vimos en el barrio Santander había realizado un concurso de la ‘casa modelo’, a través del cual indicaban a las señoras cuál era el mobiliario apropiado para la casa, la decoración y los implementos de la cocina, las divisiones del hogar y la distribución de espacios. En Villa Socorro, tuvieron la oportunidad de ir más lejos, pues ¿Por qué limitarse a las cuestiones asociadas a la vivienda y el aspecto material, si tenían la oportunidad de experimentar con el factor humano?

Las trabajadoras sociales propusieron a la junta directiva de la Fundación permitir el traslado a Villa Socorro de un porcentaje de familias provenientes de barrios obreros, denominadas ‘familias piloto’, quienes vivían en circunstancias económicas similares a las procedentes de los tugurios, pero eran consideradas moral y culturalmente superiores.¹¹⁹ Las ‘familias piloto’ debían servir como modelo de comportamiento a las familias trasladadas de los ranchos. Las trabajadoras sociales, no perdieron oportunidad para exaltar de ellas aspectos como “presentación personal, mejoras en la vivienda y buena conservación de la misma, deseo de superación y colaboración en los programas”.¹²⁰ Para ser incluidas en el programa las familias ‘piloto’ debían cumplir ciertos con ciertos

¹¹⁸ Entrevista de Kelly López con Nora Luz Arredondo Díaz, trabajadora social de la Fundación Casitas de la Providencia, 2015.

¹¹⁹ Fundación Casitas de la Providencia. “Plan de trabajo asistencia social Casitas de la Providencia en 1962”. Medellín, s.f. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 53.

¹²⁰ Uribe y Penagos 17.

criterios: residir en la ciudad, no proceder de tugurios, el jefe u otro miembro de la familia debía contar con un empleo estable y garantizar la satisfacción de necesidades básicas (alimento, vestido, pago de la vivienda y servicios) de su familia; los niños debían asistir a la escuela y el jefe tenía que haber cursado, por lo menos, algunos años de primaria, solo se incluían matrimonios católicos. El jefe del hogar debía probar su experiencia como líder o por lo menos la participación en algunos programas de grupo o comunidad (como acción comunal u organizaciones parroquiales).¹²¹ Dentro del contrato se establecía la obligación de participar en los programas de desarrollo de la comunidad dirigidos por las trabajadoras sociales. Además, debían comprometerse a cumplir los reglamentos exigidos a las demás familias: pago de las cuotas, respeto a la prohibición del subarriendo y la instalación de negocios en las viviendas; evitar dar albergue a personas distintas a las reconocidas por la Fundación como integrantes de la familia beneficiaria.

En agosto de 1963 la junta directiva de la Fundación Casitas atendió las recomendaciones del departamento de trabajo social sobre las familias piloto, y permitió el traslado de 84 familias a Villa Socorro, que representaban el 10% del total de familias del barrio, compuesto por 994 adjudicatarios, 1300 familias, y aproximadamente 7.500 personas.¹²² Las trabajadoras sociales elogiaban las familias ‘piloto’ porque a pesar de estar en “condiciones de pobreza semejantes o iguales a las anteriores, y sin embargo, hacen el esfuerzo de mantenerse en ambiente social más alto, aún a costa de grandes sacrificios y dificultades”.¹²³ Sin embargo, las familias de los ranchos no reconocieron de la misma manera estos sacrificios, por el contrario, consideraban que las familias piloto se sometían a privaciones absurdas con la finalidad de mantener la apariencia, de exhibir una imagen que no correspondía con su situación material. Eran conscientes de estar en capacidad de hacer los mismos sacrificios para conseguir estatus social, pero lo pensaban que era un ejercicio vano, superfluo. Como asegura una de las habitantes de Villa Socorro al referirse a las familias piloto: muchas de las familias piloto sufrían privaciones para “aparentar lo que no son. En cambio, nosotros somos así. Nosotros podemos vivir así, pero [con] la tripa por dentro chirriando”.¹²⁴ Existía “una especie de discriminación que ellos hacían hacia la gente

¹²¹ Villegas y Vásquez 32-33.

¹²² Villegas y Vásquez 23.

¹²³ Villegas y Vásquez 28.

¹²⁴ Entrevista de Kelly López con Margarita Arroyave, habitante Villa Socorro, 2015.

de los ranchos, más que todo los hijos de esas familias [piloto], o sea, no los dejaban como relacionarse [...] y sí eran muy limpios, muy organizados, tenían otro estilo de vida, diferente a uno, que éramos unos mugrosos”.¹²⁵ O como señala otro testimonio: “Le decían a uno pobre patiarrastrado”.¹²⁶

Las familias piloto, frente al rechazo, constituyeron un grupo aparte y expresaron a las trabajadoras sociales su descontento ante estos conflictos. De esta manera, quienes debían liderar los procesos comunitarios solo recibieron a cambio vituperios. Una de las trabajadoras sociales registró la inconformidad de las familias piloto en un informe de tesis en el que hacía un balance sobre el programa en el barrio Villa Socorro, afirmaba que, “extrañan sus anteriores vecinos, sus relaciones son preferiblemente entre los mismos piloto, sus niños juegan con otros niños pertenecientes al mismo grupo, en su concepto, las personas que más se destacan en el barrio son también piloto”.¹²⁷ El programa de familias piloto se convirtió en la muestra del fracaso que tenía el proyecto educativo, de orientación del cambio social en Villa Socorro. Estas familias estuvieron lejos de convertirse en un modelo para las familias provenientes de los ranchos, que no perdieron oportunidad para manifestar su rechazo, pues sintieron que estas personas querían “desplazarlos y dominarlos”.¹²⁸

Al final de la década y a tono con su nuevo papel de control, las trabajadoras sociales siguieron recomendando la introducción de familias piloto en los barrios construidos por la Fundación, como Efe Gómez y Pablo Sexto, aunque esta vez las familias seleccionadas para cumplir el papel de líderes al interior de los barrios eran policías, familias de Villa Socorro e incluso algunos religiosos. A pesar de las objeciones al programa y el reconocimiento de su ineficacia en Villa Socorro y Santander, las trabajadoras sociales solicitaron a la junta directiva de Casitas la inclusión de “familias de un nivel socio-económico superior, con el ánimo de que colaboren con el programa de rehabilitación”.¹²⁹ En esta ocasión el liderazgo debía surgir de forma natural, sin concientizar a las familias piloto del papel que cumplirían dentro de la comunidad, pues

¹²⁵ Entrevista con Ángela Arroyave.

¹²⁶ Entrevista con Margarita Arroyave.

¹²⁷ Vásquez y Villegas 101.

¹²⁸ Vásquez y Villegas 90.

¹²⁹ Cecilia Moreno, Rocío Atehortúa y Nora Arredondo. “Criterios de selección. Programa de erradicación”. Medellín, abril 13 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 158.

saberse llamadas a asumir el liderazgo, las hacía sentirse superiores a las familias provenientes de tugurios, generando divisiones y conflictos entre ellas.

El 26 de agosto de 1968 remitieron al despacho del alcalde un estudio de 108 familias trasladadas a la urbanización Efe Gómez, provenientes de La Carrilera, el Puente del Mico, la Biblioteca Pública Piloto, Otrabanda, entre las familias piloto seleccionadas se encontraban las familias de dos agentes de policía y un carabinero, incluidas en el programa por solicitud del Departamento de Policía. El informe señalaba que la familia del agente Luis Alberto Valencia, “se trasladó con el ánimo de que sirva de orientadora en programas comunales, aspecto en el que el jefe tiene experiencia. Por su empleo además, sirve como elemento de autoridad y respeto dentro de la nueva organización”.¹³⁰ Los agentes de policía no solo estuvieron a cargo de los desalojos y la destrucción de los ranchos, de los seguimientos y las infiltraciones en las reuniones y manifestaciones de los tugurianos, también fueron incluidos en los programas de vivienda de la Fundación, con el propósito de fungir como líderes y ejercer el control dentro de los nuevos barrios.

2.3 El papel de las trabajadoras sociales, las damas de la caridad y las monjas

A principios de la década de 1960 las trabajadoras sociales hacían balance positivo con respecto a los programas de rehabilitación social en el barrio Santander, donde la escala de acción era significativamente menor que en Villa Socorro, cincuenta familias frente a mil, Villa Socorro exigía el tratamiento de una población numerosa, por lo que la capacidad de ejecución de los cursos e iniciativas educativas se quedó corta ante las demandas de una urbanización masiva. Unos años más tarde el servicio social pasaba por uno de sus peores momentos, pues la introducción de familias piloto había ocasionado el rechazo de los habitantes del barrio, dejando en entredicho la capacidad de su gestión ante la junta directiva de la Fundación. La administración de Casitas de la Providencia, centrada en la erradicación de los tugurios en el centro de la ciudad, buscó alternativas para mantener la implementación de los programas sociales en los barrios, aun a costa de delegar sus funciones a una institución de carácter privado y de beneficencia.

¹³⁰ Nora Arredondo, Cecilia Moreno y Rocío Atehortúa. “Familias trasladadas a la Urbanización Efe Gómez”. Medellín, agosto 26 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 86.

En enero de 1962 la junta directiva de Casitas de la Providencia había aceptado la creación de un Comité Asesor de Rehabilitación, que tenía como principal objetivo “el mejoramiento de la forma de vida de los actuales ocupantes de tugurios. Los fondos provenientes del Almuerzo de Navidad y los demás que se reúnen al efecto en el futuro se destinarán exclusivamente a dicha actividad social, mediante planes presentados por el Comité y aprobados por la Junta”.¹³¹ Se trataba de una comisión pro rehabilitación liderada por Lucila Jaramillo de Restrepo, la esposa de Jorge Restrepo Uribe, quien había impulsado la creación de la Fundación Casitas de la Providencia en 1956. La propuesta de rehabilitación del Comité se centraba en la creación de industrias domésticas para permitir “que las señoras de esta gente pobre puedan ayudar a sus esposos en el sostenimiento del hogar, ya que generalmente éstos no están en capacidad, con sus exiguas entradas, para su total sostenimiento”.¹³²

El Comité de rehabilitación operó en principio como parte de la Fundación Casitas de la Providencia y contribuyó poco más de tres años con la financiación del programa de rehabilitación económica en Villa Socorro. En octubre de 1964 la junta directiva de Casitas aprobó la propuesta de escindirlo, convirtiendo el Comité pro rehabilitación en la Fundación Almuerzo Navideño,¹³³ que continuó operando en el barrio de la mano de Casitas. Asumió de lleno la administración de las proveedurías, la guardería, los talleres de costura y plásticos, y la bolsa de trabajo.¹³⁴ Almuerzo Navideño empleaba a las trabajadoras sociales en sus programas, aunque no llegaron a tener un peso significativo, pues la junta directiva de Almuerzo Navideño¹³⁵ optó por emplear a voluntarias para gestionar las obras de caridad en Villa Socorro.

¹³¹ Darío Arango Tamayo. “Oficio N° 039”. Medellín, enero 25 de 1962. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L2, f. 92.

¹³² Mario Molina Cardona. “Informe sobre Fundación Casitas de la Providencia”. Medellín, noviembre 2 de 1961. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L2, f. 4.

¹³³ Fundación Almuerzo Navideño, *Folleto*, [s.f] Archivo Fundación Almuerzo Navideño FAN. Ya había obtenido personería jurídica, Resolución N° 151 de agosto de 1964, emanada de la Gobernación de Antioquia.

¹³⁴ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 87 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, octubre 19 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 142.

¹³⁵ La Fundación Almuerzo Navideño estaba compuesta por: Raquel Moreno de Bedout (vocal), Ana Navarro de Escobar (presidenta), Olga Arango Arango (vicepresidenta), Lucila Jaramillo de Restrepo (segunda vicepresidenta), Berta Jaramillo de Puerta (tesorera), Lucia Ángel Escobar (vocal), María Elena Jaramillo de Gómez (vocal) Eugenia Ángel de Vélez, Luisa Ángel de Henao Mejía, Matilde Vélez (vocales) y Jenny Ocampo Jaramillo (Secretaria); además de Esther Barrientos y Tere Medina, que se encargaron de dictar los primeros cursos. Se trataba del círculo de amigas de Lucila Jaramillo, señoras de la elite, esposas e hijas de alcaldes, industriales y concejales.

Con tales medidas las trabajadoras sociales, que habían hecho el esfuerzo de traducir las propuestas internacionales sobre la dimensión social de los programas de vivienda, especialmente de asesores y profesores norteamericanos, quedaban relegadas de la dirección de los programas educativos, que habían definido como su principal campo de acción en los barrios de la Fundación. Casitas les asignó cada vez más una labor más policiva, de control y seguimiento de las familias, relacionada con la garantía de la firma de los contratos y el pago de las cuotas de amortización de las viviendas, que los habitantes de Villa Socorro se negaban a pagar a lo largo de la década.

En marzo de 1966 Casitas reconoció la entrega definitiva de la atención de grupos a la Fundación Almuerzo Navideño, asignándole al servicio social la labor de “control mensual para que los adjudicatarios cumplan con el pago de los arrendamientos puntuales, control para que las casas sean ocupadas por adjudicatarios legítimos, control para evitar los alquileres de vivienda, insistir en la firma de los contratos faltantes”.¹³⁶ También se les asignaba la misión de contribuir en los proyectos de acción comunal como arreglo de senderos, blanqueamiento de casas, la cancha de fútbol y la arborización del barrio. Todas estas funciones estaban lejos de la labor educativa y de orientación del cambio social. Con esta decisión la junta directiva de Casitas de la Providencia le dio protagonismo a la caridad organizada, a las ‘damas de la caridad’, a quienes progresivamente fue delegando las funciones de administración de la vida comunitaria, transformando radicalmente la relación entre las instituciones y los habitantes de Villa Socorro, quienes se sentían engañados por la Fundación, a la que señalaban como causante de agravar sus condiciones de vida; llegando incluso a contravenir los reglamentos de la Fundación, reclamando, cada vez con más firmeza, una solución del Estado a sus problemas. En contraste, las damas ricas de la ciudad a través del almuerzo de navidad y otras obras de caridad fueron consideradas –aún a día de hoy-¹³⁷ como mujeres bondadosas que, sin necesidad u obligación, se esmeraron en conseguir y gestionar recursos para el barrio.

¹³⁶ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 103 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, marzo 24 de 1966. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 189-190.

¹³⁷ La Fundación Almuerzo Navideño todavía opera en Villa Socorro, aunque ha cambiado su nombre a Fundación de Atención a la Niñez, la sede principal de la guardería, ubicada en la parte baja del barrio, se llama “Lucila Jaramillo de Restrepo”. Según varios testimonios la presencia y labor de las damas de la caridad a través de la Fundación Almuerzo Navideño, y la Congregación de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, fueron fundamentales para en el desarrollo del barrio, especialmente por la labor educativa, de capacitación para el trabajo y la atención en salud que brindaban en el Consultorio, ubicado también en la

En lo sucesivo la junta directiva de Casitas de la Providencia discutió la pertinencia de mantener tres asistentes sociales en la nómina, en algunas sesiones se propuso luego a proponer incluso la supresión de dos cargos, para conservar únicamente el de Jefe de Servicio Social.¹³⁸ También propusieron varias estrategias para mantenerlas, una de ellas fue conservar las plazas, que debían ser financiadas por la Fundación Almuerzo Navideño y Casitas de la Providencia, por lo que las trabajadoras sociales debían laborar en los programas de ambas instituciones. A pesar de que la directora de Almuerzo Navideño se comprometiera a mantener por lo menos una trabajadora social,¹³⁹ en febrero de 1968, Lucila Jaramillo renunció a darle continuidad a la financiación del cargo, por lo que fue creada una comisión para analizar, nuevamente, el estado del servicio social en la Fundación Casitas de la Providencia.¹⁴⁰ Mientras estas discusiones tenían lugar, las trabajadoras sociales seguían realizando los estudios socioeconómicos y los censos en los tugurios que subsistían en varias zonas del centro de la ciudad, los cuales fueron escenarios de disputas entre la Fundación Casitas, la policía y organizaciones políticas surgidas en los barrios de invasión, reconocidas como Juntas de Tugurianos.

Al tiempo que el descontento social crecía en Villa Socorro, y eran relegadas de sus funciones como “agentes de cambio”, las trabajadoras sociales debieron dividir su tiempo entre las labores en los barrios y los estudios para la selección de familias en los tugurios de Estación Villa, Tenche, La Iguaná y El Bosque. Las trabajadoras sociales no asimilaban pasivamente las modificaciones al programa de rehabilitación, e intentaron a hacer contrapeso a la labor de erradicación en la que se había enfocado la junta directiva de

parte baja del barrio. La localización de estos servicios generó divisiones entre los habitantes (parte alta/parte baja), algunos llegaron a considerar que los beneficiarios de los programas eran los de la parte baja. Una habitante de la parte alta, construida en las últimas etapas afirmaba: “Esa fundación no recibía sino a la gente de abajo, de Los Mangos, esa Fundación para acá para esta parte de arriba no. Los Mangos hasta que allí, por la escuela, donde ahora es lo de la policía, ahí sí llegó Almuerzo Navideño” Entrevista con Marta Giraldo, 2015. Actualmente la parte baja de Villa Socorro es el Barrio Villa Niza, se separó administrativamente después de la construcción de la parroquia La Transfiguración. La división del barrio y la construcción y traslado por etapas tal vez generó identidades diferenciadas entre la parte baja y alta del barrio, que provocaron la disolución del barrio tal y como Casitas de la Providencia lo construyó.

¹³⁸ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 100 Junta Directiva Fundación Casitas de la Providencia”. Medellín, octubre 21 de 1965. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 176.

¹³⁹ Iván Uribe Jaramillo. “Modificaciones que la Honorable Junta ha hecho al personal de la Fundación”. Medellín, febrero 20 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 203.

¹⁴⁰ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta N° 121 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, febrero 14 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, ff. 174-175.

Casitas, resistiéndose a efectuar traslados masivos y rápidos, entorpeciendo las erradicaciones, que debían efectuarse de manera rápida, sin miramientos, para poder hacer frente a la presión que ejercían otras instituciones para el pronto desalojo de las familias y la destrucción de los ranchos que interferían con la construcción de vías y urbanizaciones proyectadas en el centro de la ciudad. Estos conflictos al interior de la Fundación, entre trabajadoras sociales y la junta directiva, compuesta fundamentalmente por industriales y comerciantes, implicó una ruptura y es posible que también un viraje de algunas trabajadoras sociales hacia el enfoque social crítico. No hay que perder de vista el hecho que algunas trabajadoras sociales a lo largo de la década procedían de las clases medias, ya no eran las hijas de industriales y personajes reconocidos de la región como las fundadoras de la Escuela de Trabajo social durante la década de 1940, sino hijas de abogados, comerciantes. Como recuerda Nora Luz Arredondo, hija de un empleado judicial, con respecto a las erradicaciones de final de la década:

“Iba a pasar una cosa muy terrible, y es que Pablo VI apenas se estaba medio poniendo los cimientos y tal cosa, empezándose a urbanizar, no era habitable. Iba a venir el Papa [...] yo creo que era Pablo VI. El caso es que entonces la orden de la Alcaldía era que había que pasar ya a la gente que teníamos vista en La Iguaná, Tenche para Pablo VI, porque el Papa no podía ver los tugurios, entonces pa' qué dirían esto. Nosotras decimos ‘aquí a la gente no la van a poner así, no tienen por qué ocultarle los problemas al Papa a costa de la gente. No vamos a pasar a nadie’. Entonces nosotras nos rebelamos, y no hicimos eso, como después nos rebelábamos con el Doce de Octubre también, eso salíamos en primera página, que ‘Trabajadoras sociales de la Fundación Casitas de la Providencia se rebelan contra la administración, contra la administración local’, porque no quisimos y nos ranchamos, y no tuvieron más que hacer, no pudieron, porque sin nosotros no podían hacer nada. Nosotras éramos las que le podíamos mover a la gente o no movérsela, y no movérsela de cualquier manera”.¹⁴¹

Villa del Socorro se convirtió para las trabajadoras sociales en un mal precedente, atribuyendo los fallos en el programa de rehabilitación al inadecuado proceso de selección de familias. Aseguraban que la junta directiva de la Fundación Casitas, con el propósito de aliviar las presiones que sobre ella ejercían otras instituciones había efectuado el traslado con el único fin de despejar los terrenos de La Alpujarra, desatendiendo las recomendaciones del servicio social y poniendo en entredicho la efectividad de realizar una rehabilitación social satisfactoria. Desde su punto de vista, el apremio había sido la principal motivación de la junta para llevar a cabo un traslado masivo, a un solo barrio, concentrando numerosas familias con condiciones similares de vida, en un desalojo

¹⁴¹ Entrevista con Nora Arredondo Díaz.

violento que había ocasionado resentimiento en los adjudicatarios. Con la férrea decisión de impedir que una situación similar se repitiese, las trabajadoras sociales se obstinaron en condicionar los traslados a Efe Gómez y Pablo Sexto (1967-1970) a la observación de los criterios de selección fijados por ellas.¹⁴²

Aunque las trabajadoras sociales insistieran a lo largo de la década en su papel como agentes de cambio en los barrios de la Fundación,¹⁴³ tuvieron un fugaz protagonismo, lo que puede explicar por qué su labor no es recordada por los habitantes de Villa Socorro, que no fueron capaces de recordar siquiera el nombre de una trabajadora social durante las entrevistas, al indagar sobre su presencia en el barrio se referían a ellas como “muchachas muy bonitas”,¹⁴⁴ “señoritas muy formales que venían y nos visitaban y nos decían algunas cosas, unas conferencias, pues y que no dejáramos de pagarle a Casitas”.¹⁴⁵ Al final de la década de 1960, la Junta Directiva de Casitas de la Providencia se concentró en los procesos de erradicación de tugurios, mientras las trabajadoras sociales se sentían fuera de lugar, desajustadas en estas nuevas circunstancias. Muchas de ellas se vieron en la necesidad de reinventarse, llevando las investigaciones a un tono más abstracto. Antes de retirarse definitivamente hicieron un balance de los procesos administrativos de la Fundación, una autocrítica, un repliegue con el ánimo de reflexionar sobre su papel en este tipo de instituciones, estableciendo una distancia entre investigación social y administración, entre ciencia y gobierno:

“En las labores diarias se presentan dos tipos de planeación: la correspondiente a los aspectos urbanísticos y de construcción y la planeación social, las cuales se efectúan aisladamente sin desarrollarse en forma complementaria [...] La Fundación ha intentado realizar y complementar sus dos objetivos, sin embargo [...] la acción ejercida en este sentido en los tres últimos años permiten asegurar que se han ido extinguiendo los programas de rehabilitación y mejoramiento de los niveles de vida, dándose énfasis a la dotación de vivienda y a la erradicación de tugurios [...] El Comité de Damas Fundación Almuerzo Navideño que se ocupa también de este aspecto se desvincula creándose un desequilibrio en la prestación de servicios sociales [...] No existen criterios delimitados de evaluación de resultados las observaciones dan

¹⁴² Entrevista con Nora Arredondo; Cecilia Moreno, Rocío Atehortúa y Nora Arredondo. “Criterios de selección. Programa de erradicación”. Medellín, abril 13 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, ff. 154-158; Arredondo y Atehortúa, “Estudio socio-económico familiar...”

¹⁴³ Rocío Atehortúa, Emilse Aguilar. “Hacia un cambio social”. Medellín, s.f. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Planeación, S. Informes, Caja 12, Legajo 1, f. 122.

¹⁴⁴ Entrevista con Manuel Ocampo, 2015.

¹⁴⁵ Entrevista a Luis Carlos Velásquez Rodas, 2015.

a conocer que disminuyen los programas de rehabilitación para dar prioridad a los de dotación de vivienda”.¹⁴⁶

Después de trabajar en el departamento de servicio social de la Fundación Casitas de la Providencia, la trabajadora social Nora Luz Arredondo recuerda que tuvo que regresar al contexto universitario, pues se había quedado sin referentes para enfrentar la dinámica los contextos en los que pretendía tener incidencia. Los cambios suscitados en la implementación del programa de rehabilitación en Villa Socorro, y el papel que le otorgó la Fundación, cada vez más centrado en los programas de erradicación de tugurios y en la dimensión material de los programas de vivienda, había alterado las funciones que el servicio social había definido para sí mismo; de allí la necesidad de cambiar los referentes y prácticas:

“De ahí me fui para Bolivariana. Precisamente yo me salí es porque ya llegaron las cosas a un punto que se exigía una dinámica diferente, que ya no se podía hacer lo tradicional y donde yo veía que tenía que buscar nuevas cosas, porque ya con los referentes teóricos que tenía no me servían para el trabajo que estaba haciendo [...] Entonces se creó una dinámica que yo ya no sabía pa' dónde coger y yo era la que estaba al frente de eso [...] el problema era de enfoque, de para dónde seguimos con esto [...] Ya los referentes de práctica y de teoría no le daban para más, yo a la conclusión que llegué era que esto no se podía cambiar sino con una revolución”.¹⁴⁷

Mientras las trabajadoras sociales cuestionaban su nuevo papel en los programas, las damas de la caridad continuaron con la rehabilitación económica, utilizando máquinas de coser adquiridas por intermedio de Cáritas arquidiocesana,¹⁴⁸ instalaron un taller de costura en Villa Socorro, administrado por Almuerzo Navideño, en el que trabajaban setenta mujeres.¹⁴⁹ Aprovechando la estrategia de trabajo social de grupo, no solo enseñaban a algunas mujeres del barrio a coser, sino que las empleaban en una empresa textil que producía para varios almacenes de la ciudad. “Trajeron como un taller donde enseñaban a coser y cosían, eran lo que llaman ahora maquiladores, le cosían a terceros, yo no sé si a Fabricato, a Tejicondor, en todo caso allá trabajaban muchas mujeres eso”.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Nora Luz Arredondo, Fabián Ospina, y Elba Ortíz. *Análisis Administrativo de la Fundación Casitas de la Providencia como institución de vivienda de interés social. Especialización* (Medellín: Universidad de Antioquia, 1970) 77-100.

¹⁴⁷ Entrevista con Nora Arredondo.

¹⁴⁸ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 95 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, julio 2 de 1965. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 161.

¹⁴⁹ Vásquez y Villegas 19.

¹⁵⁰ Entrevista con Nena Echavarría, habitante del barrio Santa Cruz, 2015.

Varias mujeres del barrio recuerdan especialmente este tipo de talleres y los cursos dictados por voluntarias como Esther Barrientos o Tere Medina, señoras de la elite, que vivían en barrios acaudalados y que se desplazaban hasta Villa Socorro con el ánimo de enseñarles varios oficios, especialmente clases de taquigrafía, crochet y repostería.

“En principio todo era voluntario, entonces las personas iban allá. Cuando yo estuve había una señora, que todavía vive por aquí por Envigado, que se llama Tere Medina, que voluntariamente se desplazaba hasta el barrio a enseñarnos taquigrafía, culinaria, modistería [...] ella era una de la alta aristocracia, ellos eran dueños de un terreno impresionante, era una familia súper pudiente, entonces ellas tenían mucha relación con las señoras de la Fundación Almuerzo Navideño, encabezadas por Lucila Jaramillo, ellas formaron un grupo de voluntarias e iban allá a colaborar, una daba taquigrafía, la otra daba panadería, otra costura”.¹⁵¹

Muchas consideran que gracias a esa instrucción pudieron conseguir trabajo: “La hija mía aprendió la modistería abajo en la Fundación Almuerzo Navideño, hoy en día gracias a eso se defiende con el diseño”.¹⁵² La capacitación se dirigió especialmente a las mujeres y las jóvenes del barrio, en un proyecto de promoción de la mujer.¹⁵³ Eran las mujeres las que permanecían gran parte del día en el barrio, mientras sus esposos e hijos trabajaban fuera como obreros, venteros ambulantes, coteros o recicladores. Estos cursos tenían como objetivo principal contribuir a la capacitación de mano de obra femenina, la Fundación Almuerzo Navideño funcionaba entonces como una bolsa de trabajo, que empleaba a las mujeres en los talleres de Villa Socorro y en otras empresas de la ciudad.

Antes de que Lucila Jaramillo prescindiera de los servicios de las trabajadoras sociales, estas laboraban medio tiempo en Almuerzo Navideño, acompañando sus iniciativas, especialmente atendiendo a las mujeres que trabajaban en el taller de modistería. Para Nora Luz Arredondo, trabajadora social de la Fundación, los talleres habían implementado una forma de trabajo similar a las ‘maquilas’, adoptando un modelo de tercerización laboral, en el que las trabajadoras se encontraban en una relación de franca explotación, por lo que decidió organizar a las mujeres en un sindicato. Al enterarse de este conato de agremiación en los talleres, la junta directiva de Almuerzo Navideño reaccionó

¹⁵¹ Entrevista con Virginia Ríos Arias, habitante de Villa Socorro que se unió a la Congregación de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, Envigado, 2015.

¹⁵² Entrevista con Genibora Acevedo, habitante de Villa Socorro, 2015

¹⁵³ En la Escuela de Modistería se “capacita en corte y confección a madres de la comunidad que realizan trabajos en máquina plana y fileteadora. Al finalizar el semestre, las alumnas están en capacidad de desempeñar una labor lucrativa”. Fundación Almuerzo Navideño. Archivo Fundación Almuerzo Navideño [s.f.] 11

despidiendo a la trabajadora social.

“Me contrataron pagándome, porque la Fundación [Casitas de la Providencia] no tenía casi presupuesto, era exiguo, me contrató, medio tiempo me pagaba Casitas y medio tiempo me pagaba Almuerzo Navideño. Almuerzo Navideño también me pagaba, porque yo también debía atender a las mujeres que estaban en el taller, y yo las atendí, lo que pasa es que no las atendí como ellas querían. Porque empecé a organizar sindicato con ellas, porque eso era una explotación lo más terrible [...] Un taller muy bien organizado, buena infraestructura, y las mujeres iban allá a producir y les pagaban según lo que hacían, al detal, por las piezas que entregaran [...] ¿Qué querían las de Almuerzo Navideño? Que ellas rindieran mejor y que estuvieran bien como mujeres en su trabajo, en su oficio, no más, pero ellas no están promoviendo ninguna organización ni nada, ni querían que yo estuviera ahí, era para una cosa asistencial, eso era lo que ellas querían”.¹⁵⁴

Almuerzo Navideño funcionaba de forma similar al Banquete del Millón en Bogotá, administrado por el sacerdote norte santandereano Rafael García Herreros. Los recursos colectados, “producto de tan generosa reunión de cristianos que piensan en los que sufren”,¹⁵⁵ eran destinados a la construcción y mejoramiento del barrio Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá. En Medellín, a partir de 1961,¹⁵⁶ se celebraba anualmente el almuerzo de navidad. En las instalaciones del Club Unión, se congregaban personalidades como el gobernador, el alcalde, concejales y reinas de belleza a consumir consomé y pan. De esta manera Lucila Jaramillo y las Damas de la Caridad financiaban el kínder, la guardería, el centro de salud y los talleres de costura en Villa Socorro.

Pero las damas de la caridad no solo adoptaron el modelo del Banquete del Millón, sino que se preocuparon por trabajar de la mano con congregaciones religiosas, a la manera del Arzobispo Tulio Botero Salazar en los barrios de Jesús, urbanizaciones construidas con dinero de la Iglesia. En el año 1964 el arzobispo había acondicionado una finca en un sector al oriente de la ciudad, cercano a Buenos Aires, acompañado por varias monjas de la congregación de Siervas de Cristo Sacerdote, quienes fundaron un pequeño taller “con la finalidad de emplear a unas pocas modistas y sus trabajos los realizaban para almacenes Ley, el que pagaba ínfimos sueldos, a causa de lo cual no dio resultado y hubo que suspenderlo”.¹⁵⁷ Estos intentos de organizar la caridad, con miras a contribuir en pequeña escala con el Estado, configuraron un modelo de urbanización y administración de barrios

¹⁵⁴ Entrevista con Nora Arredondo.

¹⁵⁵ “¡No más tugurios!”, *El Tiempo* (Bogotá) 10 oct. 1970: 4.

¹⁵⁶ El primer almuerzo navideño se realizó el 14 de diciembre de 1961 en el Club Unión. En: Fundación Almuerzo Navideño 3.

¹⁵⁷ María del Socorro Vargas, *Historia Barrio Los Caunces N° 2: Barrios de Jesús*. (Medellín: [s.d.] 1986) 11.

como territorios de misión. Si en Europa las fábricas eran espacios para evangelizar y los sacerdotes se convertían en obreros; en América Latina los clérigos, que se enfrentaban a crecientes conflictos en el ámbito urbano, especialmente con la población que no había logrado insertarse en los circuitos de producción industrial, hicieron presencia en los barrios con el fin de ejercer su labor pastoral. Esta particularidad del contexto latinoamericano “llevó a la Iglesia a desarrollar un programa tecnopastoral basado en las nociones de territorio y pobreza [...] La noción de residencia apuntaría a solventar esta debilidad de los lazos orgánicos con las comunidades”.¹⁵⁸

En 1967 Lucila Jaramillo de Restrepo invitó a varias religiosas de la congregación de Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz a residir en Villa Socorro. Se trataba de una comunidad religiosa de origen barcelonés, nacida como Pía Asociación en el siglo XVIII, que había sido reconocida como congregación religiosa en el año 1964. Las religiosas habían llegado a Colombia al responder al llamado de un obispo claretiano que arribó al país en 1954 con la misión de evangelizar indígenas en el Chocó, y había fundado el ancianato antituberculoso en Carmen de Atrato. El obispo solicitó a la superiora de las Hermanas Hospitalarias permitir que una delegación de religiosas lo acompañara en sus misiones, la madre superiora accedió y las primeras cinco misioneras desembarcaron en Colombia en 1964. Un par de años después de trabajar en el Pacífico colombiano, las religiosas se vieron en la necesidad de buscar ‘vocaciones’ y, por intermedio de las Hermanas de la Presentación, establecieron contacto con Lucila Jaramillo, quien las ayudó a instalarse en Villa Socorro.¹⁵⁹

En un par de casas acondicionadas para ellas en la parte baja de Villa Socorro, Alberta Solanes, Ángela Blanch y Teresa Miserach comenzaron a convivir con los habitantes de Villa Socorro. “Las ubicaron en dos casitas del barrio, casitas humildes, sencillas. Lo único que hicieron fue encerrarle ahí como para que quedara en forma de convento [...] les levantaron un murito y las encerraron, pero era una casita del barrio, igual, no tenía nada de especial”.¹⁶⁰ La hermana Alberta era la encargada de la guardería, Ángela Blanch del consultorio médico y Teresa Miserach del colegio de niñas. Una tríada de educación, salud y promoción de la mujer. De esta manera, asumieron de lleno las

¹⁵⁸ Calvo y Parra 29.

¹⁵⁹ Entrevista con Virginia Ríos.

¹⁶⁰ Entrevista con Virginia Ríos.

actividades que hasta ese momento eran desempeñadas por las trabajadoras sociales y las voluntarias de Almuerzo Navideño. Implementaron los cursos de capacitación en la escuela de niñas, educándolas desde pequeñas para trabajar, con clases de mecanografía, caligrafía, taquigrafía, comercio y culinaria, que se combinaban con lecciones de español, geografía y matemáticas: (Figura 11)

“nos expusieron el proyecto que ellas tenían, ellas se presentaron, quiénes eran ellas y nos dijeron que ellas iban a abrir una escuela para esas niñas que no podían seguir los estudios de secundaria [...] que ellas se iban a formar una escuela donde nos capacitaban para el trabajo, que iban a poner mecanografía, puericultura, panadería, bueno, una cantidad de actividades, pero siempre en vistas al trabajo; también nos iban a dar materias porque no nos íbamos a quedar así, igual nos iban a dar matemáticas, las materias básicas, español, geografía [...] No todo el mundo iba porque había niñas pues que podían ir a colegio, entonces seguían su bachillerato, pero la mayoría iban allí. Las preparaban y ellas las ubicaban en trabajos cuando ya tenían 17 o 18 añitos, ellas les buscaban trabajito, les enseñaron mucho la parte de caligrafía, taquigrafía para la parte industrial, o sea, la parte de comercio, la parte comercial, entonces en ese tiempo como no habían computadores ni nada, el único medio para digitar cartas o lo que fuera era la taquigrafía, ellas tenían un aula especialmente para la taquigrafía, entonces las ubicaban en almacenes”.¹⁶¹

Figura 11



Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, [s.f.] Archivo Fundación Almuerzo Navideño

¹⁶¹ Entrevista con Virginia Ríos

Las Hermanas Hospitalarias fueron la cara visible de la Fundación Almuerzo Navideño durante varias décadas, a diferencia de las trabajadoras sociales sí son recordadas, y con su evocación se mezclan muchas anécdotas. Las Hermanas ejecutaron los programas financiados por las damas caritativas, sin objetar sus decisiones. Habían llegado de España a cumplir con la misión de evangelizar y contribuir a la educación de la infancia y las mujeres pobres de América, siempre tuvieron presente que debían guardar los votos de castidad, pobreza y -especialmente de- obediencia. Como recalca una de las religiosas:

“Ellas [junta directiva de Almuerzo Navideño] eran nuestros administradores, ellas eran las que pagaban, ellas eran los que daban para la alimentación, ellas eran los que estaban pendientes de todo el material, de todo. Ellas eran los jefes prácticamente, nosotros éramos simplemente trabajadoras prestando un servicio social en el barrio, nosotros no administrábamos nada, eran ellas los que nos proporcionaban el dinero para nosotros comprar”.¹⁶²

Ante del declive del modelo técnico propuesto por el trabajo social, la elite antioqueña, representada en las figuras de Jorge Restrepo Uribe y Lucila Jaramillo de Restrepo, implementaron en Villa Socorro el modelo del patronato fabril, que se encontraba por aquellos años en una etapa de decadencia debido a la incorporación de la mecanización y la masculinización de la mano de obra en la producción textil. Sin embargo, consideraron adecuado ajustarlo a una nueva escala: el barrio.

En las décadas de 1920 y 1930 los dirigentes de Fabricato y Coltejer acudieron a controles religiosos al interior de las fábricas, que estaban a cargo de un capellán y religiosas de algunas congregaciones, por intermedio de representantes de la iglesia católica los industriales buscaban “educar a las trabajadoras, convertirlas en obreras dóciles y eficientes, recurriendo a métodos que la Iglesia Católica había aplicado durante siglos en Europa y América en la educación femenina: la rigidez moral, la disciplina austera, el trabajo doméstico y el rezo obligatorio en conventos e internados”.¹⁶³ Si bien no se impusieron restricciones morales tan severas como las de comienzos de siglo en las fábricas, la ejecución del programa social por parte de las religiosas de la Congregación de Hermanas Hospitalarias en Villa Socorro se ajustaba a ciertos principios propios del modelo de patronato: centrado en la mujer, en la educación, desplazaba el desempleo como

¹⁶² Entrevista con Virginia Ríos.

¹⁶³ Luz Gabriela Arango, *Mujer, religión e industria. Fabricato 1923-1982* (Medellín: Universidad de Antioquia, 1991) 141.

problema económico, con profundas implicaciones sociales y políticas, al ámbito de la moral, reduciendo la pobreza a una disposición individual, a un desajuste del sistema social generado por el sujeto, que no ha logrado, ni querido, ajustarse a los requerimientos del contexto urbano y la producción industrial. Canaliza todos sus esfuerzos en demostrar cómo a través de la preparación adecuada y las disposiciones correctas era posible superar el contexto en el que por desventura les ha tocado vivir. Las adversidades se convierten en una especie de catástrofe que se supera por medio de la voluntad y la instrucción.

Religión de la mano de la ingeniería social o de la mano de la caridad, esa era la disyuntiva, pero el catolicismo era el centro de todo el modelo, se amparaba en esos valores: familia, matrimonio, la obediencia a los reglamentos de la Fundación. Un papel fundamental dado a los intermediarios: religiosas y sacerdotes, a diferencia del protestantismo de un *ethos* individual que considera el comportamiento ajustado a los preceptos de la religión como signo de la predestinación, una relación directa con dios y ética intimista;¹⁶⁴ el católico requiere la intervención de los representantes de Cristo en la tierra -exteriorización del pecado que solo se disuelve con la penitencia y la absolución- ellos son quienes certifican la conducta moral, de allí que cualquier modelo económico, fundamentado en una moralización de la prácticas productivas, sea imprescindible la presencia eclesiástica. Estamos ante el proceso de transformación de actitudes tradicionales en las modernas por medio de la religión, es inútil construir un esquema de pensamiento que ponga a la religión del lado de la tradición y a las actividades económicas (industriales) del lado de la racionalización y la secularización de la vida. No es extraño entonces que fueran los empresarios quienes con ahínco intentaran imponer la religión, recristianizar la sociedad según su visión del mundo y sus valores, en los que el trabajo, el ahorro, la preparación, la capacitación y la obediencia transmitidas por medio del catolicismo constituyeron una de las más efectivas tácticas de preparación para la vida del trabajador. Sin olvidar que es a través de la mujer que se introduce la civilización en la familia.

¿Por qué simplemente no regalar las casas? ¿Por qué insistir en la firma de los contratos, perseguir a las familias hasta lograr que pagaran las cuotas de amortización? ¿Desgastarse en una lucha con Provienda durante más de una década? ¿Para qué dejar los

¹⁶⁴ Con la “eliminación del poder eclesiástico sobre la vida” Max Weber, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (Barcelona: Península, 1999) 28

espacios comunales sin construir y esperar a que la gente se organizara para direccionar la vida comunitaria a través de la Junta de Acción Comunal? Los funcionarios eran los mismos industriales y comerciantes, las trabajadoras sociales sus hijas, y sus esposas eran las ‘damas de la caridad’. ¿Por qué centrarse en la educación de las mujeres y en la dimensión económica de los programas de rehabilitación, es decir, en la creación de empresas comunitarias? Si podían dejar todo en manos de la caridad y con paliativos aliviar, según la coyuntura, el hambre y el descontento. Es clara la importancia de mantener el proyecto educativo en el barrio, aunque sufrió modificaciones sustanciales, las damas de la caridad y las monjas permanecieron en Villa Socorro un par de décadas más.

Sin embargo, las instituciones se encontraron ante la apremiante necesidad de adaptarse a las circunstancias. En Villa Socorro, como campo de experimentación, de aplicación de técnicas en boga en el ámbito internacional tuvo lugar un proceso de asimilación de las particularidades exigidas por el contexto urbano. Un proyecto social estatal que, aunque estaba inspirado en la doctrina social católica, tuvo pretensiones de eficacia técnica, se apoyó en la caridad en busca de un complemento, y a la vuelta de una década terminó convirtiéndose en una obra social de carácter eclesial, financiada por una entidad de beneficencia que esporádicamente se apoyaba en el Estado. En la década de 1970, la privatización de la acción estatal no sólo estuvo presente en el ámbito social, la dimensión material de los programas se volcó en los programas de autoconstrucción de vivienda y ‘soluciones mínimas’. Las instituciones estatales encargadas de administrar programas de vivienda abandonaron la pretensión de construir comunidades, las intervenciones se volvieron cada vez más puntuales, abriendo la senda para el tratamiento comercial y bancarizado del déficit de vivienda.¹⁶⁵

¹⁶⁵ INURBE, *Estado, ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura estatal en Colombia, 1918-1990* (Bogotá: Puntos Suspensivos, 1996)

3. Experiencia social

En condiciones adecuadas, la acumulación de actos insignificantes logra, como los copos de nieve en la pendiente de una montaña, provocar una avalancha.

James Scott, “Los dominados y el arte de la resistencia”

Para la elite de la ciudad y los funcionarios de las instituciones el descontento social que surgió entre los habitantes de Villa Socorro era inexplicable, pues consideraban que la sociedad por medio de la Fundación Casitas de la Providencia había purgado sus culpas por la desigualdad social evidenciada en el proceso de urbanización. Para ellos, dotar de vivienda a los tugurianos era parte de una loable labor de materialización del compromiso cristiano en el alivio de la pobreza. Las apresuradas erradicaciones, la improvisación, la inexperiencia, la presión de intereses económicos y políticos en la conquista de sectores del centro de la ciudad no se señalaban como efectos adversos de la acción de Casitas en la Providencia en la aplicación de los programas, y mucho menos eran tenidos en cuenta como posibles causas del inconformismo y la rebeldía que se manifestaron en Villa Socorro, en ocasiones de forma discreta, en otras, declarada.

La construcción de un discurso sobre esta población se sustentaba en el prejuicio, en señalar a los pobres de la ciudad como un conglomerado humano desvalido, ingenuo, marginal, peligroso, ‘antisocial’ y ‘amoral’, al que le eran reconocidos algunos aspectos positivos, pero sólo en forma potencial, les atribuía como característica principal una especie de inercia ante sus circunstancias, considerándolos una masa informe, que solo adquiriría dimensiones (buenas o malas, positivas o peligrosas) como reacción a estímulos externos, de allí que su control resultase fundamental para tantas organizaciones políticas, la iglesia, el Estado, los empresarios, los sindicalistas y los comunistas. Todos buscaron moldear y educar esta población, ajustarla a su imagen prefabricada, siempre en franco desajuste con las propias condiciones de vida de estas gentes. Los pobres de las ciudades, como todos aquellos que son considerados como marginales, nunca son juzgados a partir de sí mismos, las conclusiones sobre sus vidas no se fundamentan en sus propias circunstancias; son otros quienes los señalan, los definen, deciden por ellos, y delimitan cómo deben ser, pues sus iniciativas siempre consideradas imperfectas o inacabadas.

Es necesario conocer las maneras en que los habitantes de Villa Socorro experimentaron los programas implementados por Casitas de la Providencia y otras instituciones que tuvieron presencia en el barrio, y que pretendieron hacer contrapeso a la Fundación, como los sacerdotes jóvenes comprometidos con las clases populares y el Comité Provienda que se asentó en el barrio y logró cooptar en la Junta de Acción Comunal en una estrategia dual de administración de recursos y organización política. Pero antes será necesario indagar por los conflictos cotidianos y las prácticas de resistencia que contravinieron las políticas de Casitas en el barrio a lo largo de la década de 1960.

La experiencia social denota la importancia que tienen los sentidos y prácticas sociales en la configuración de una ciudad, cómo la historia social puede ayudarnos a comprender la capacidad de acción de los sectores populares, al tiempo que nos permite decodificar la imagen que los poderosos han construido de sí mismos y que en muchas ocasiones nos vela el entendimiento de su poder: las prácticas cotidianas de dominación, estrategias de control que fallan y se adaptan el dinamismo y las oscilaciones que imponen los acontecimientos. La experiencia implica evoca aquello que no se construye más que a través de las relaciones, intercambios, los conflictos y que no depende de la voluntad o el capricho de algún actor social, por más poderoso que sea o aparente ser, sino que se configura a partir de los contactos entre diferentes grupos, con diversos intereses y sentidos del mundo, es en esa relación donde se construyen y se reconstruyen constantemente las relaciones de poder entre dominadores y dominados.

3.1 Resistencia y conflictos cotidianos

La resistencia comúnmente se asocia con la desobediencia declarada y abierta, acompañada de la elaboración de un discurso público que se expresa en manifestaciones y escritos. Esta evidencia del inconformismo, se interpreta como una reacción que tiene lugar en circunstancias coyunturales y favorables para las declaraciones públicas contra el poder. Los investigadores en ocasiones no nos preguntamos por la gestación de tales actitudes, especialmente aquellas se relacionan con la vida cotidiana, y la manera en que se materializan, en pequeña escala, prácticas cotidianas de resistencia. Una lectura cotidiana de las relaciones de poder permite entonces comprender que el poder del Estado se encuentra lejos de ser infranqueable, al tiempo evidencia cómo los grupos dominados o

subalternos poseen una gran capacidad de incidencia y cómo hacen contrapeso constante al poder hegemónico, obteniendo pequeños réditos, a pesar de encontrarse en una situación de franca desigualdad.

En ocasiones el rechazo a la dominación se manifiesta de forma indirecta, y no encuentra necesariamente expresión en protestas o declaraciones públicas contra el poder. En Villa Socorro, por ejemplo, comenzaron a circular versiones sobre el traslado forzado y el descontento suscitado por las condiciones de vida en el barrio que alimentaron y legitimaron prácticas como el abandono de las viviendas, el incumplimiento de los pagos de servicios públicos y las cuotas de amortización, el subarriendo, el traspaso de las viviendas, la instalación de contrabando, la recepción de familias “arrimadas”, el apoyo a las invasiones de tierra en los barrios aledaños, el rechazo a las familias piloto, el consentimiento (silencio) ante la presencia de Provivienda en el barrio. Estas prácticas pueden identificarse como manifestaciones de una *infrapolítica* de los grupos subordinados, entendidas como “formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indirectas de expresión”.¹⁶⁶

Aunque tales manifestaciones no extinguen o superan las estructuras de dominación, pero sí erosionan el poder y sus pretensiones, pues lo obligan a adaptarse, a matizarse, para conservar una posición ventajosa en las relaciones de poder. En este escenario, se reconoce una gran dinámica y capacidad de acción a los grupos subordinados que, aunque legitiman el poder, gracias a sus prácticas cotidianas, de omisión o de contravención contra el discurso público y las normas aceptadas formalmente por las elites logran conquistar espacios para la acción política que fuerzan al poder hegemónico a reconfigurarse. No debe asumirse pues una correspondencia entre una declaración pública de aceptación de los condicionamientos del poder, como el caso de la propiedad privada, con una convicción y una motivación para la acción con base en los valores expuestos por la elite; los grupos subalternos construyen sus propios referentes para la práctica responden constantemente a los intentos de dominación material y simbólica de la elite. Como en el caso de los campesinos ingleses en el siglo XVIII, en relación a los derechos forestales, los tugurianos

¹⁶⁶ Scott, *Los dominados* 44.

“preferían ejercer sus derechos de poco en poco y sin hacer mucho ruido: entraban en posesión real de lo que les negaba la ley”.¹⁶⁷

Villa Socorro se convirtió entonces en un espacio social,¹⁶⁸ donde los habitantes pudieron expresar su malestar con respecto a los programas de Casitas de la Providencia. Como espacio social entendemos: el ámbito en el cual los subalternos, así sea de manera temporal, “se reúne[n] con sus semejantes [...] encuentra[n] refugio ante las humillaciones de la dominación”, y donde comienza a circular un discurso oculto contra el poder, por medio de un apelaciones o reivindicaciones sobre “la dignidad, la negación y la justicia”.¹⁶⁹

Después del traslado a Villa Socorro las condiciones de vida de las familias habían empeoraron en muchos aspectos: vivían lejos de sus trabajos, debían pagar las casas, los servicios públicos y el transporte; las casas carecían del mobiliario suficiente y con los reglamentos, la Fundación les imponían un conjunto de restricciones que en el tugurio no conocían: tenían prohibido subarrendar, instalar negocios, acoger a familiares o amigos; a lo que se sumaban las humillaciones de las familias piloto y las desagradables comparaciones de las trabajadoras sociales. La proveeduría administrada por Casitas de la Providencia que, en teoría, debía suministrar alimentos a bajo costo había resultado un fracaso. Los habitantes del barrio debieron optar por la compra fraccionada para el consumo diario, comprar “panela partida, grano sucio, etc., pero que es sólo lo que está a su alcance económico”.¹⁷⁰

A los conflictos con las familias piloto se sumó la inconformidad ante la carencia de espacios sociales básicos como la parroquia y las escuelas; además de tener que lidiar con senderos y calles sin pavimentar. Los programas de Casitas acrecentaron progresivamente la desconfianza de los habitantes de Villa Socorro en las instituciones estatales. Este

¹⁶⁷ Scott, *Los dominados* 224. Los tugurianos no rechazaban la propiedad privada de vivienda, es más se constituía en una aspiración, invadir un terreno con la esperanza de convertirse algún día en propietario. Invadían porque no podían acceder al mercado de vivienda porque, con arriendos demasiado costosos para sus ingresos limitados, los inquilinatos y ‘pasillos’ en otros lugares de la ciudad eran inaccesibles, además de condicionarlos a vivir en circunstancias similares a las del tugurio: hacinamiento, precariedad servicios públicos, se le sumaba el pago de un alto costo y las presiones del arrendatario; como medida adaptativa en el contexto urbano se invadía para garantizar el alivio de necesidades más apremiantes como la alimentación. El rancho era visto como un sacrificio temporal mientras se lograba conseguir los materiales para construir una vivienda en material; esto no impedía la trasgresión del derecho a la propiedad de los especuladores urbanos o de terrenos en desuso por parte del Estado, ellos aducían como principio de legitimidad la necesidad frente a la riqueza para hacerse con una fracción del suelo urbano.

¹⁶⁸ Scott, *Los dominados* 150.

¹⁶⁹ Scott, *Los dominados* 144.

¹⁷⁰ Villegas y Vásquez 118.

experimento había traído consecuencias desfavorables para la Fundación, pues la estrategia de estimular, orientar y educar por medio del ejemplo había resultado un fracaso, y, aunado a otros factores, había favorecido la creación de una serie de prácticas que atentaban contra los reglamentos, especialmente la resistencia a pagar de las cuotas y la firma de contratos de compraventa.

En noviembre de 1965 las trabajadoras sociales Gabriela Villegas y Luz Estela Vásquez presentaron los resultados de un estudio realizado entre 1964 y 1965 con 70 familias de Villa Socorro -una muestra representativa del 7.41% de habitantes-, en el que se preguntaban por la adaptación al barrio y los efectos producidos por el cambio de habitación, haciendo una comparación entre 35 familias provenientes de tugurios y 35 familias piloto. Las trabajadoras sociales les preocupaba la correlación entre cambio de vivienda y el ascenso del estatus social, y, cómo después del traslado se podían manifestar efectos adversos que podían llegar a producir desadaptación. Registraron la persistencia del hacinamiento, el desempleo, la desorganización familiar, asegurando que aún se “presentan adulterios, madres solteras, falta de comprensión entre los cónyuges”.¹⁷¹ También afirmaban que “la educación de los niños es deficiente por la incapacidad de los padres para afrontar la responsabilidad que ésta misión conlleva; así los hijos se desarrollan como pueden, sin una dirección adecuada o en medio de una rigidez exagerada, siendo lo más común la falta de controles”.¹⁷²

Pero lo interesante de este estudio es que registró las contradicciones del modelo que Casitas había intentado construir en el barrio, evidenciando que el traslado y el mejoramiento de la vivienda, por sí solos, no implicaban, necesariamente, una transformación de las condiciones de vida de las familias provenientes de los tugurios. Las trabajadoras sociales llegaron al punto de reconocer que “los medios de entrada económica personal no han aumentado y en cambio los egresos son mayores”.¹⁷³ Legitimando, en cierta medida, el impago de las cuotas de las viviendas, pues a pesar de ser muy bajas “ellos no pueden pagarla por encontrarse casi la mitad de jefes de hogar sin empleo y existiendo antes que vivienda, una necesidad más inmediata, como es la alimentación”.¹⁷⁴

¹⁷¹ Vásquez y Villegas 30.

¹⁷² Vásquez y Villegas 31.

¹⁷³ Vásquez y Villegas 67.

¹⁷⁴ Vásquez y Villegas 77.

A pesar de la evidencia de ineficacia de los programas los funcionarios de Casitas continuaron considerando que algunas de las prácticas de los vecinos de Villa Socorro eran lastres de la vida de tugurio, especialmente la de acoger a otras familias, asegurando que se habían habituado a vivir hacinados. Sin embargo, las familias no dejaron de recibir a sus parientes, conocidos y personas en circunstancias difíciles. El 51.71% tenía familias ‘arrimadas’ a finales de 1965, a pesar de la prohibición de “llevar personas extrañas a vivir al barrio”, las familias “han desoído la orden”.¹⁷⁵ Algunas lo aprovechaban como negocio: subarrendaban la casa o alquilaban algunos cuartos; otras lo hacían como un gesto de solidaridad con quien no contaba con la suerte de tener vivienda o solo se encontraba de paso en la ciudad. Esta situación generó preocupación en los funcionarios de Casitas de la Providencia, quienes aseguraban que era imposible “ejercer un control sobre los adjudicatarios debido a que la mayor parte no ha suscrito el contrato correspondiente”.¹⁷⁶ Mientras no se lograra la firma de los contratos no se podía exigir la observación de los reglamentos. Las trabajadoras sociales realizaron una serie de visitas domiciliarias e intentaron desalojar a las familias ‘arrimadas’, pues consideraban que las viviendas eran beneficio exclusivo de las personas trasladadas de los tugurios.

El caso de Elvia Montealegre se volvió representativo y evidenció las dificultades en que veía la Fundación para controlar a las familias, culpando a los ‘elementos extraños’ de causar inestabilidad en el barrio. Bajo el argumento que la Fundación no tenía manera de controlar a quien no había firmado el contrato; y como no había pasado los filtros selección, no había manera de exigirles obediencia. Elvia Montealegre era una habitante de Villa Socorro que había albergado a otra familia en su casa, y comenzó a tener problemas porque no le permitían acceder a los servicios, viéndose en la obligación de solicitar a la Fundación hacerse cargo de la situación y expulsar del barrio a la familia arrimada,¹⁷⁷ según el informe del caso de la trabajadora social María Quijano a la junta directiva:

“El señor Camilo Torres abusando de la hospitalidad que se le brindaba trajo a la casa de la señora Montealegre el resto de su familia compuesta de su señora y cuatro hijos, y procedió a hacerle la vida imposible a la señora Montealegre, hasta que la obligó a

¹⁷⁵ Vásquez y Villegas 111.

¹⁷⁶ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 81 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, Julio 8 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 119- 120; Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 82 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, julio 31 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 117.

¹⁷⁷ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 84 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, agosto 28 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 128.

salir de su propia casa [...] el señor [...] pertenece a la Junta Directiva de Provivienda y que por tal motivo esa junta ha hecho de este problema la piedra fundamental para demostrar que Provivienda es más fuerte que Casitas de la Providencia, y que nosotros no somos capaces de sacar a ninguna familia del Barrio”.¹⁷⁸

Curiosamente el ocupante de la casa era homónimo del sacerdote revolucionario, y, al acusarlo de pertenecer a Provivienda, los funcionarios se eximían de cualquier culpa por los conflictos surgidos en el barrio y señalaba a dos de los principales aliados de los habitantes de Villa Socorro de los fracasos de su modelo: los sacerdotes rebeldes y la Central Nacional Provivienda, un enemigo interno y uno externo, aunque ambos invitaban al desacato a las imposiciones de la Fundación. Este caso justificó el tratamiento policivo de las familias y medidas como los juicios de lanzamiento; la expulsión del barrio como principal defensa frente a estos agentes externos, que corroían desde dentro y desde fuera los cimientos de esta comunidad ‘modelo’.

Los habitantes de Villa Socorro no fueron los únicos inconformes con los reglamentos de Casitas de la Providencia. En una carta remitida al alcalde de Medellín en abril de 1961 -antes del traslado a Villa Socorro-, varios vecinos del barrio Santander le solicitaban una audiencia para expresar el inconformismo con el reglamento de convivencia, la modificación de los contratos y los mecanismos de adjudicación de las casas. Afirmaban que habían sido engañados por la trabajadora social María Elena Penagos, quien les había prometido cambiar las casas de cartón del sector de la Iguaná por una casa buena, “con agua, luz y teléfono, cosa que no es así: pues en el presente estamos tomando agua sucia, sin luz, ni teléfono”.¹⁷⁹ Además, les había asegurado que a Fundación reconocería las mejoras hechas a los ranchos se como parte de pago de la nueva vivienda en el barrio Santander. Sorpresivamente para ellos, las condiciones del acuerdo se habían modificado, llegando incluso a duplicar el coste inicial de las viviendas (de \$ 3.000 a \$ 7.500), eran amenazados con juicios de lanzamiento si no firmaban los nuevos contratos; asegurando que se encontraban “maniatados sin poder hablar”. En esta comunicación también le expresaron al alcalde su malestar ante las restricciones impuestas para modificar los inmuebles, pues debían contar con la autorización de la Fundación para llevarlas a cabo,

¹⁷⁸ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 93 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, marzo 12 de 1965 AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 150- 151.

¹⁷⁹ Habitantes del Barrio Santander. "Carta al Alcalde de Medellín". Medellín, abril 10 de 1961. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L2, ff. 31r-32v.

e igualmente les incomodaba la prohibición de acoger a personas no reconocidas por Casitas: “en el documento que nos tienen para vivir, reza que no es permitido por ningún motivo admitir más personas en la casa aparte de las que ellas anotaron, se nos prohíbe inclusive admitir hasta la propia madre de los inquilinos”.¹⁸⁰

Desde su llegada a Villa Socorro las familias provenientes de tugurios se persuadieron que la Fundación los había engañado. Manuel Ocampo, habitante del barrio, recuerda que se sintieron decepcionados al ver el estado de las calles y los senderos:

“Entonces estábamos muy contentos porque nos decían: 'Allá tiene todos los servicios, luz, agua, alcantarillado'. Eso es una verraquera. Pero muy triste cuando a uno lo descargan allá y allá había que entrar por una trochita así, porque la tierra estaba pa acá, tierra movida, donde se hicieron los huecos pa las casas. Tenía que entrar pisando un pantano con tierra pa' entrar a la casa. Apenas una trochita así, un caminito, no más”.¹⁸¹

Como advertían las trabajadoras sociales, éstos “se rebelan y no aceptan que hubieran sido engañados con la promesa de mejores condiciones de vida”. Esto se sumó al rechazo que se sentían por haberse visto forzados a aceptar el traslado, “se vinieron de mala gana al saber que el gobierno impediría la construcción de nuevos ranchos. Se quejan amargamente de que el traslado sea en carros del gobierno, en malas condiciones, humillaciones para ellos [...] y guardados por el ejército”.¹⁸² (Figura 12) Como respuesta, muchos se negaron a firmar los contratos de compraventa y pagar las cuotas de amortización mensual de las viviendas, haciendo eco a la campaña impulsada por el Comité Provivienda, que comenzó a tener presencia en el barrio a raíz de este descontento. “Entonces ahí fue donde se formó la organización Provivienda, en vista de los abusos que cometió el gobierno de esa época con los habitantes de La Alpujarra”.¹⁸³

¹⁸⁰ Habitantes del Barrio Santander. "Carta al Alcalde de Medellín". Medellín, abril 10 de 1961. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L2, f. 32r.

¹⁸¹ Entrevista con Manuel Ocampo, habitante de Villa Socorro, 2015.

¹⁸² Vásquez y Villegas 102.

¹⁸³ Entrevista con Manuel Ocampo.

Figura 12



Demolición de tugurios. Carlos Rodríguez. Medellín, 1963. Archivo Histórico de Antioquia.

Otros se quejaban ante la pérdida del favor de la caridad pública. En los ranchos, comunidades religiosas como las Legionarias de María les entregaban alimentos y dinero sin restricciones o condicionamientos. En Villa Socorro gozaban de auxilios donados por Cooperativa Americana de Remesas al Exterior (CARE), pero la entrega era condicionada por la Fundación Casitas de la Providencia; para acceder a ellos debían demostrar su situación de extrema necesidad o trabajar los fines de semana en la construcción de vías y senderos, bajo la dirección de la Junta de Acción Comunal. Algunos decidieron abandonar las casas y retornar a los ranchos, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios Populares, barrios de invasión vecinos de Villa Socorro que se poblaban rápidamente.

Los pobladores también sentían insatisfacción ante el terreno extremadamente pendiente y con tierra amarilla, por la que era difícil de transitar en invierno, cuando las calles se convertían en verdaderos lodazales, lo que motivó a mucha gente a regalar las casas, pues “no les gustaba el barrio”.¹⁸⁴ Además “el hecho de necesitar transporte entre el

¹⁸⁴ Estrada y Gómez 21.

barrio y el centro de la ciudad a más de significar un egreso considerable, es nuevo para ellos, ya que antes estaban situadas sus viviendas en el centro de la ciudad [...] opinan que sería mejor que les hubieran adjudicado en los mismos terrenos donde vivían y ya estaban adaptados”.¹⁸⁵ Para disminuir los gastos optaron por instalar los servicios públicos de contrabando en sus casas y librarse del pago. Esta situación generó una constante preocupación a los directivos de Casitas. En 1969 el director de la Fundación remitió una carta al gerente de Empresas Públicas solicitando la instalación de piletas públicas en lugar de servicios individuales en los barrios Efe Gómez y Pablo Sexto, construidos a finales de la década de 1960 para albergar a las familias erradicadas de Estación Villa, Tenche y los demás sectores de tugurios que persistían en aquella época en el centro de la ciudad. Iván Jaramillo Uribe aseguraba que según

“los estudios socioeconómicos demuestran muy claramente que las familias que habitan éstas viviendas no están, por ahora, en condiciones de pagar individualmente éste servicio y estamos muy temerosos que suceda lo que está sucediendo en Villa Socorro, que la instalación individual de servicios solo ha servido para hacerles más fácil la instalación de contrabando al poder los usuarios eliminar los respectivos contadores de servicio”.¹⁸⁶

Por otra parte, los vecinos de Villa Socorro no perdieron oportunidad para expresar el rechazo hacia las familias piloto, sentían desconfianza hacia ellas, al considerar que las casas debían ser ocupadas exclusivamente por familias provenientes de tugurios. “Este rechazo y descontento se manifestaba hacia ellos en forma de insultos”,¹⁸⁷ lo que imposibilitó la aplicación del programa de rehabilitación y, como vimos, dejó en una situación desventajosa las propuestas del Servicio Social ante la junta directiva de la Fundación, algunos de los habitantes llegaron a calificar el programa como “un gran error” de Casitas de la Providencia:

“Con las familias Piloto se presentaron muchos problemas. Estas fueron familias que seleccionó Casitas con el fin de infundir moral, de educar al barrio. Este fue un gran error... Traer gente de Manrique y otros barrios poniéndoles esta condición: Esto les creó un orgullo que en vez de ayudar a convivir le hacía mantener agarrados, se humillaban constantemente. Fue un gran error. Una vez les dieron los equipos de la Acción Comunal por 40 días a las familias piloto: fue terrible.... Nos decían hasta cómo sentarnos en el inodoro. Tuvieron que parar eso para evitarnos peleas. Decían:

¹⁸⁵ Vásquez y Villegas 104.

¹⁸⁶ Iván Uribe Jaramillo. "Solicitud al Gerente de Empresas Públicas de Medellín". Medellín, julio 8 de 1969. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L6, f. 90.

¹⁸⁷ Vásquez y Villegas 104.

‘Las mujeres de los ranchos son unas puercas... nos mandaron a enseñarles...’ Había sido una iniciativa de Casitas”.¹⁸⁸

Ante las apremiantes condiciones de vida los habitantes de Villa Socorro se enfocaron en la satisfacción familiar y colectiva de sus necesidades: garantizar el funcionamiento de escuelas para los niños, la construcción de la iglesia, la pavimentación de las calles, la ampliación de las viviendas, y eran conscientes de que solo contaban con dos recursos: su fuerza de trabajo y la solidaridad. Por medio de autoconstrucción, convites y acción comunal lograron cumplir estos proyectos, aunque tardaron años.

Pero la solidaridad y el trabajo comunitario, lejos de interpretarse como muestras de una disposición a organizarse y a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, de incidir de forma positiva en el mantenimiento de un tejido social y unos referentes que permitieron mantener viva la comunidad, eran vistos como pulsiones, como sentimientos derivados de la costumbre, no como actitudes labradas a través de la reflexión y la evaluación del contexto en el que se desarrollaba su vida, es decir, como la muestra de la asunción y transmisión de valores contruidos críticamente por sujetos situados socialmente, que conocían y participaban en la construcción de estrategias de supervivencia colectiva.

3.2 Central Nacional Provienda

Para comprender el papel que la Central Nacional Provienda, organización de izquierda que reivindicaba el derecho a la vivienda por parte de los sectores populares, tuvo en el barrio Villa Socorro y los conflictos en los que se embarcó hasta finales de la década de 1970 con la Fundación Casitas de la Providencia, es preciso distinguir dos escenarios y momentos: 1. Villa Socorro y la campaña para que los habitantes no pagaran las casas ni firmaran los contratos, nutrido del descontento de la gente ante el estado del barrio y las condiciones socioeconómicas, que se desarrolló entre 1964 y 1978; 2. El otro tiene que ver con la presencia de la Central Provienda en los tugurios de la Carrilera-Estación Villa, que entre 1968 y 1969 apoyaron la resistencia de los tugurianos contra los intentos de Casitas de emprender otro ciclo de erradicaciones. De esta manera Provienda tuvo injerencia en los dos programas de la Fundación: la rehabilitación social en Villa Socorro y las erradicaciones de tugurios en la zona central de Medellín.

¹⁸⁸ Entrevista con Urbano Montoya, Presidente de la Acción Comunal. En: Serna, Londoño y Betancur 35.

Junto a Casitas de la Providencia, Almuerzo Navideño y las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, estuvo la Central Nacional Provivienda que tenía presencia en diferentes municipios de Colombia, apoyando la invasión de terrenos. Algunos habitantes de Villa Socorro, que habían tenido formación en sindicatos de la industria y la construcción hicieron parte de esta organización. Como afirma Manuel Ocampo, un líder de sector adscrito a Provivienda: “yo le digo espíritu de lucha es una cosa que no la tiene cualquiera, esa como que le nace a uno. Yo ya era sindicalista, en el 64-65, yo ya era sindicalista en la empresa que trabajaba Fajardo Vélez”.¹⁸⁹ Influenciados por tendencias políticas de izquierda, engrosaban las filas de partidos políticos como el Partido Comunista o la Alianza Nacional Popular –ANAPO-.

La Central Nacional Provivienda surgió de forma espontánea a finales de la década de 1950, como asociación de vecinos que buscaban defender la ocupación de terrenos ejidales en la ciudad de Cali. Liderados por Julio Rincón y Alfonso Barberena, quienes eran militantes del Partido Comunista. Los primeros comités pro vivienda tuvieron una existencia efímera, y se concentraron en las invasiones de terrenos. A principios de la década de 1960 esta forma de organización fue adoptada en la ciudad de Bogotá, con el fin de organizar la ocupación de terrenos en Las Colinas y en el sector aledaño al Hospital Hortúa, situado a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, actualmente barrio Policarpa Salavarrieta. La organización fue reconocida por el Ministerio de Justicia el 5 de mayo de 1961. Para el año 1963 existían en el país las seccionales de Girardot, Villavicencio, Pereira, Medellín, La Dorada, Tulúa, Valledupar, Bogotá y Fundación.¹⁹⁰

La estrategia principal de Provivienda era evitar los desalojos de las familias después de la invasión de terrenos, con la finalidad de lograr la consolidación y el reconocimiento como barrios, aunque reivindicó otras formas de lucha, aun por la vía legal, lidiando, por ejemplo, con la presión ejercida por instituciones como el Instituto de Crédito Territorial, la Caja de Vivienda Popular o la Fundación Casitas de la Providencia, también con urbanizadores piratas. Comúnmente acusaban a las instituciones de engañar, estafar y mentir, su crítica se basaba en el incumplimiento de promesas hechas a los habitantes de tugurios, con el propósito de desalojar fácilmente un terreno; además de la contradicción

¹⁸⁹ Entrevista con Manuel Ocampo.

¹⁹⁰ Carlos Arango, *La lucha por la vivienda en Colombia* (Bogotá: ECOE, 1986) 41.

entre las condiciones de vida de la población que decían socorrer y las políticas de vivienda, en la mayoría de casos centradas en el pago de cuotas de amortización, que superaban la capacidad de pago de los adjudicatarios. El “sentirse traicionado” por entidades vivienda, fue lo motivó la presencia de Provivienda diferentes barrios, Villa del Socorro fue uno de ellos.

Una de las primeras acciones de Provivienda en Medellín fue en el barrio Popular, orientando la toma de terrenos a principios de 1960. En diciembre de 1963, los intentos de desalojo generaron el pronunciamiento de los habitantes del Villa Socorro, incluido el sacerdote Vicente Mejía, quien exhortó a sus feligreses a “defender por todos los medios el derecho a la vivienda”.¹⁹¹ Ante el descontento surgido en Villa Socorro por el cobro de las casas y la firma de un contrato con condiciones que hasta ese momento desconocían, varios habitantes decidieron organizar un centro de Provivienda para hacer frente a la institución.

A partir de ese momento Provivienda comenzó una campaña en contra de la firma de contratos y el pago de las cuotas de amortización de las viviendas. Entre 1963 y 1968 se enfrentaron a las trabajadoras sociales de la Fundación Casitas de la Providencia, quienes tenían como principal misión el logro de la firma y la expulsión de los líderes de esta organización. Con el argumento que Casitas de la Providencia se aprovechaba de las familias desalojadas de los tugurios, al imponerle condiciones que difícilmente podían cumplir, comenzó una campaña puerta a puerta, especialmente entre las familias que recibían la carta de lanzamiento, advertencia que condicionaba la permanencia en el barrio a la firma del contrato y la puesta al día con las cuotas. Los rumores sobre los engaños y las falsas promesas recayeron sobre las trabajadoras sociales, que, como cara visible de la institución ante las familias, tuvieron que hacer frente a las críticas. Los miembros de Provivienda les decían a sus vecinos:

“Somos una organización, queremos recoger la mayoría, ojalá todos, que vamos a reclamarle a Casitas de la Providencia estos derechos, estos derechos, que nos engañaron y dijeron mentiras. Entonces ellos salían y conversaban, así como le digo a usted, “¿Quién vive aquí? Ah, que Fulano de tal, a ver [...] Venía la conversación y la carreta: “Vea, nosotros estamos trabajando, somos esto y creemos que aquí nos están atropellando, están amenazando la gente que el que no paga lo van a sacar ¿Cuánto vale lo que entregamos allá? Sin nada, que nos prometieron muebles y camas y aquí no hay nada. ¿A ver las calles por donde entramos y salimos? Hay que hacerlas.

¹⁹¹ Arango 175.

Entonces nosotros entramos y vimos eso, había compañeros que decían con toda claridad “es que nosotros vamos a trabajar es por el bien de usted y el mío, porque esta burguesía nos quiere sacar de aquí, esa humillación de esa mujer [trabajadora social]”. La misma mujer que estaba allá en ese tiempo, conquistándonos pa’ traernos pa’ acá, aquí no hace sino amenazarnos, vea, léase esta carta que le mandó Casitas”.¹⁹²

En 1964 las trabajadoras se esforzaron en lograr que las familias firmaran el contrato ante notaria. De un total de 350 familias solo firmaron 46, las demás estaban atrasadas en las cuotas o se negaban a pagar. Los problemas con los contratos estaban “copado la actividad de las dos trabajadoras sociales”.¹⁹³ La resistencia a firmar los contratos se atribuía a campañas emprendidas por la Junta de Acción Comunal y Provivienda, que se sustentaba en la oposición a algunas cláusulas, por lo que el director encargado de la Fundación recomendó a los demás miembros de la junta directiva replantearlas.¹⁹⁴ De esta manera la Fundación se vio obligada a ceder y reconocer las mejoras hechas a las casas, permitir el establecimiento de fábricas y el expendio de mercancías, víveres y licores, aunque con autorización de la junta directiva; sin embargo, mantuvo la prohibición de albergar a personas por fuera del núcleo familiar.

Las trabajadoras sociales se concentraron entonces en hacer contrapeso a la gente que estaba “haciendo propaganda contra la institución entre ellas 3 o 4 comunistas”.¹⁹⁵ Al finalizar 1964 solo 163 familias se encontraban al día en el pago de las cuotas, mientras 247 no habían pagado ninguna, y el resto de familias habían pagado menos de la mitad. A quienes cumplían juiciosamente con su obligación, Casitas les regalaba una mesita donada por Sintéticos S.A. La Fundación además se comprometió a crear un fondo de préstamos con los dineros recaudados por concepto de abonos de las casas, para acceder a este beneficio las familias debían estar a paz y salvo con la institución. Los miembros de la junta directiva de la Fundación Casitas estaban convencidos que “este y otros incentivos será necesario crear para combatir a Provivienda”,¹⁹⁶ los funcionarios se empeñaron en lograr la firma de los contratos, el pago de las cuotas de amortización y en la ejecución de

¹⁹² Entrevista con Manuel Ocampo.

¹⁹³ Fundación Casitas de la Providencia. “Informe de las actividades realizadas por el Servicio Social Fundación Casitas de la Providencia”. Medellín, julio de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 105.

¹⁹⁴ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 80 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, junio 11 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 135.

¹⁹⁵ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 80 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. f. 137.

¹⁹⁶ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 87 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, octubre 19 de 1964. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 142.

juicios de lanzamiento a los líderes de Provivienda. Para la Fundación fueron imprescindibles estas medidas, pues su éxito garantizaba la derrota de Provivienda, “de lo contrario, se perdería el principio de autoridad y además las consecuencias serían funestas”.¹⁹⁷

El rechazo a pagar las cuotas de amortización y firmar los contratos era interpretado como resultado de una influencia negativa de Provivienda y no como una expresión colectiva del descontento social, experimentado de forma individual pero aglutinado en una manifestación contra las imposiciones de la Fundación Casitas. Las trabajadoras sociales tuvieron como misión identificar los líderes de Provivienda, con el fin de conseguir la expulsión de sus familias, y de esta manera extirpar los conatos de rebeldía en Vila Socorro. De esta manera buscaban fragmentar la expresión política, señalando a los miembros de Provivienda como elementos negativos, y de esta manera garantizar el control político del barrio. Ramón Taborda, como líder visible de Provivienda, se convirtió en un obstáculo particular para Casitas, y fue blanco de acusaciones asociadas al fracaso de los programas. En varias ocasiones la junta directiva discutió su expulsión del barrio, intentaron “sacarlo por la vía legal [...] obrando en esta forma sería atacar el mal por la cabeza”.¹⁹⁸ Aunque al final decidieron actuar con cautela y no demostrar un particular interés en su caso, optando por enviar advertencias de lanzamiento a todos los socios de Provivienda.

En octubre de 1965 los funcionarios de Casitas consideraban que la contienda estaba a su favor, y que Provivienda cedía posiciones antes sus medidas. El director informaba que un total de 881 familias habían firmado el contrato, y sólo 96 se negaban a hacerlo, asegurando que “este era precisamente el reducto de Provivienda y que debido a ello son las más difíciles de legalizar el contrato”.¹⁹⁹ Ese mismo año las trabajadoras

¹⁹⁷ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 93 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, marzo 12 de 1965 AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 150- 151.

¹⁹⁸ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 94 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, abril 28 de 1965. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 154, Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 96 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, julio 16 de 1965. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 166, Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 98 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, agosto 27 de 1965. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, f. 172.

¹⁹⁹ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 100 Junta Directiva Fundación Casitas de la Providencia”. Medellín, octubre 21 de 1965. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 178-179.

sociales afirmaban que “el movimiento de tendencia izquierdista, cuya actividad ha estado enfocada a crear el descontento y reacción en los habitantes de Villa Socorro [...] Parece que va perdiendo fuerza notablemente y tiende a desaparecer”.²⁰⁰ Contrario a tal balance positivo de los funcionarios de Casitas, Provivienda estuvo lejos de desaparecer de Villa Socorro.

En Villa Socorro se presentó una situación inédita, la participación simultánea de miembros de Provivienda en la Junta de Acción Comunal, ambas organizaciones se aliaron para hacer contrapeso a los programas de Casitas de la Providencia. Los integrantes de ambas juntas no interpretaban su participación simultánea en una organización oficial y en otra de oposición como una contradicción, sino como la posibilidad de conseguir más recursos para el barrio a través de diversas fuentes, como una táctica para exigir derechos ante las injusticias cometidas por la administración municipal representada en Casitas de la Providencia. Se enmarcaba dentro de una estrategia de dirección dual, que se repitió en Medellín solo unos años más tarde en el barrio Camilo Torres; pero tanto para Casitas como para Provivienda era extraordinaria. Mientras que en otros barrios populares las Juntas de Acción Comunal hacían contrapeso a formas organizativas espontáneas o de izquierda, como en el caso de barrios de invasión, donde se utilizaba como elemento disgregador de Comités Populares o Centros Cívicos; en Villa Socorro este mecanismo de dominación institucional fue cooptado por Provivienda, que se nutrió del descontento ocasionado por el proceso de erradicación y traslado.

Esta inesperada unión representaba para Casitas una gran amenaza, pues era un síntoma de la pérdida de control de la Fundación en el barrio. La Junta de Acción Comunal se había planteado como un baluarte en el proceso de “desarrollo de la comunidad”, es decir, en el direccionamiento de políticas financiadas e inspiradas por la Alianza para el Progreso. Lo que marginaba a las trabajadoras sociales de una de las principales funciones del barrio, y de paso a la Fundación.

Mientras eran relegadas de su cargo como ‘agentes de cambio’, las trabajadoras sociales ante la posibilidad de transar con los miembros de la Junta de Acción Comunal, intentaron tener influencia, especialmente sobre las familias piloto, a través de un Comité Cívico. Cuando Nora Luz Arredondo recuerda al presidente de la acción comunal de

²⁰⁰ Vásquez y Villegas 25.

aquella época, asegura que era

“De esos líderes tradicionales, intocables que también ganan prebendas con los recursos de la comunidad, etcétera. Yo traté de trabajar con él, me di cuenta de eso, entonces como vi que no estaba haciendo nada sino todo pal bolsillo, empecé a montar otra organización, entonces fue una organización cívica, se llamaba así Comité Cívico”.²⁰¹

Sin embargo, el apoyo a Provivienda, no debe interpretarse como una vinculación decidida, motivada por la convicción en los principios del socialismo o la abolición de la propiedad privada, es decir, como la internalización de los fundamentos ideológicos de la izquierda. Con respecto a Provivienda una habitante aseguraba que “les aceptamos reuniones, pero no les seguimos la corriente en cosas que nosotros no sabemos... Uno no entiende de política. Fíjese si uno no entiende política, menos va a entender de comunismo”.²⁰² No necesariamente los habitantes de Villa Socorro comulgaron con los presupuestos ideológicos del Partido Comunista, que, en muchos casos, sintieron como ajenos; ni la Junta de Acción Comunal fue exclusivamente un mecanismo de dominación de clase y de legitimación de estructuras de dominación, pues la trabajadora social, quien debía orientar la junta de acción comunal y trabajar de la mano con ella direccionando la agenda y los programas de la organización, no consiguió siquiera simpatizar con sus líderes.

“En algunas épocas, debido a que en la Organización hay miembros de la junta de acción comunal y a la inversa, ha habido momentos en que la junta ha entrado en receso para que trabaje solo la Central Nacional Provivienda. Esto llevó incluso a producir choques de la junta comunal del sector con la Promotora Comunal de Medellín”.²⁰³

Pero el enfrentamiento con Casitas de la Providencia tuvo otros escenarios, a la par de la disputa por los contratos en el barrio, trabajadoras sociales y líderes de Provivienda se enfrentaron en Estación Villa, La Carrilera y otros sectores en los que Casitas de la Providencia intentó efectuar un segundo ciclo de erradicaciones entre 1968 y 1970, especialmente en la antesala de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en Medellín a finales de agosto y principios de septiembre de 1968.

Durante 1968, las trabajadoras sociales intentaron salvaguardar sus propias directrices e insistir, esta vez con vehemencia, en la importancia de respetar los criterios de

²⁰¹ Entrevista con Nora Arredondo.

²⁰² Entrevista con Julia Hernández, habitante de Villa Socorro. En: Londoño, Serna y Betancur 154.

²⁰³ Arango 177.

selección de familias, pues pasarlos por alto implicaba trasladar los problemas de la desorganización familiar a un medio estable, en el que podían proliferar y contaminar a las familias calificadas como organizadas y completas. Con el argumento que las familias desadaptadas creaban grupos de presión apoyados o motivados por agentes externos que desestabilizaban la operación de la Fundación en los nuevos barrios, tal como ocurría en Villa Socorro con Provivienda, de manera que se excluyó del programa de erradicación, traslado y rehabilitación a familias que hicieran manifiesto su rechazo a la institución o estuviesen adscritos a Provivienda. Durante los estudios socioeconómicos en el centro de la ciudad, las trabajadoras sociales solicitaban a la Junta Directiva de la Fundación un examen exhaustivo de la situación de “Darío Correa y Juan Betancur, puesto que han pertenecido al movimiento Provivienda, factor que puede ser desfavorable en la comunidad, por los problemas que acarrea”.²⁰⁴

Provivienda, incitaba a los habitantes de La Carrilera y la Iguaná, a rechazar la Fundación.²⁰⁵ Las trabajadoras sociales enviaron una comunicación al alcalde Jaime Tobón Villegas, con la intención de tomar medidas en las nuevas urbanizaciones y evitar cometer los mismos errores que en Villa Socorro. Afirmaban que los pobladores del barrio se sentían engañados con respecto al sistema de amortización de casas y los reglamentos. Aseguraban que, a pesar de la perjudicial presencia de Provivienda en el barrio y el rechazo que generaba en los habitantes, la Fundación no había tomado las medidas necesarias para expulsar a sus miembros, recomendándole tener en cuenta para las siguientes erradicaciones: “no hacer promesas falsas, tales como prometer empleo, indemnizaciones y recursos, que no van a cumplirse, con el fin de único de erradicar fácilmente una zona”, y con respecto a Provivienda, recomendaban “atacarlo a tiempo, para que no se establezca dentro de la nueva comunidad”.²⁰⁶

A finales de 1960, el cuestionamiento a los traslados masivos y la construcción de grandes barrios resurgió a la luz de los nuevos conflictos desatados en los barrios

²⁰⁴ Fundación Casitas de la Providencia. “Etapa de pre-selección de las familias de la zona de la Carrilera (Orilla del río)”. Medellín, febrero de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 212.

²⁰⁵ Cecilia Moreno Pérez. “Erradicación de tugurios en la zona de la Carrilera”. Medellín, marzo 11 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 184.

²⁰⁶ Cecilia Moreno, Rocío Atehortúa y Nora Arredondo. “Algunos problemas que existen en el barrio Villa Socorro”. Medellín, marzo 13 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, ff. 278- 279.

planificados, especialmente en Villa Socorro, y la nueva actitud de los tugurianos que, apoyados por sindicatos, algunos sacerdotes comprometidos con los pobres, evidenciaban formas de organización política, que los había convertido en un grupo de presión, con el que fue cada vez más difícil lidiar.

En el año 1978, después de varias reuniones entre Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) y los representantes de Provivienda, Hildebrando Lora, Eduardo López y Gonzalo Álvarez, ambas organizaciones lograron llegar a un acuerdo para el pago de casas en el barrio Villa Socorro, como una solución definitiva a los enfrentamientos originados en 1964.²⁰⁷ Los directivos de la Fundación se sentaron a negociar con los líderes de Provivienda, concediendo descuentos y nuevos plazos para que las familias de Villa Socorro se pusieran al día y lograran legalizar su situación ante la Corporación. Después de lograr el acuerdo Provivienda dejó de tener presencia en el barrio. Sin embargo, los líderes de Provivienda no abandonaron otros espacios de participación política, Ramón Taborda, figuraba como miembro activo del Comité de obras de la Junta de Acción Comunal en el año 1985.²⁰⁸ Lo que demuestra que los intentos por expulsarlo del barrio fueron infructuosos.

El acuerdo cerró “el capítulo de una batalla librada a través de muchos años por dicho movimiento, en pro de las justas peticiones de los habitantes del Barrio Villa Socorro”,²⁰⁹ se les concedió a las 56 familias de los miembros de Provivienda un plazo de ocho años para pagar las viviendas, después de la firma del contrato, con cuotas entre \$ 50 y \$ 100. Las familias que habían firmado el contrato y se encontraban en mora, se les concedió un descuento de 15% sobre las cuotas atrasadas.²¹⁰ Muchos habitantes, incluidas las familias de los integrantes de Provivienda, lograron la adjudicación de las viviendas ajustándose a estos plazos y descuentos:

²⁰⁷ CORVIDE. “Acta N° 6”. Medellín, junio 15 de 1978. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L7, ff. 41-43, CORVIDE. “Acta N° 3”. Medellín, abril 21 de 1978. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L7, ff. 53-57, CORVIDE. “Acta N° 2”. Medellín, marzo 8 de 1978. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L7, ff. 60-62, CORVIDE. “Acta N° 1”. Medellín, febrero 1 de 1978. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L7, ff. 74-76.

²⁰⁸ “Informes de Acción Comunal”. Medellín, 1985. Archivo personal de Luis Carlos Velásquez Rodas, habitante de Villa Socorro.

²⁰⁹ CORVIDE. “Acta N° 2”. Medellín, marzo 8 de 1978. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L7, f. 61.

²¹⁰ CORVIDE. “Reunión con el movimiento Pro-vivienda del Barrio Villa Socorro”. Medellín, febrero 3 de 1978. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L7, ff. 71-72.

“Le digo sinceramente que con el arreglo que hicimos de bajar una plata, un porcentaje y el que se pusiera al día en 8 meses al día con Casitas o pudiera pagar todo, le daban un plazo, que cuadramos con ellos un tiempo, que pudiera pagar de ahora a tal fecha, le rebajaban el tanto por ciento, era una ganancia grande pa’ la gente que pudiera pagar. Yo [lo] logré [...] Eso fue en el año 1977, más o menos, yo hice un préstamo con la empresa y pagué de contado, la libré de una vez. Le cuento por gracia, que pagué por la escritura 400 pesos, pero eso era un costalado de plata, con jornales a 20 pesos, a 25 pesos jornales, pa’ conseguir 400 pesos, uno jornaleando [...] Eso fue como la despedida de Casitas y Provivienda, y ya queda esto arreglado, ya el que no pagó, nosotros dejamos escrito que no podían sacarlo porque pusimos la advertencia: “si la gente sale de allá a hacer ranchos al borde del río, ustedes son los culpables también””.²¹¹

Las manifestaciones de solidaridad y el apoyo manifiesto o latente de los habitantes de Villa Socorro a Provivienda, hicieron que se señalara a esta organización como principal causante de esta situación, sus líderes, la mayoría habitantes del barrio, se convirtieron en el blanco de persecuciones de la Fundación Casitas, que buscó expulsarlos por diferentes medios. De esta manera Casitas había transitado del estímulo al control, en el intento de contener las reacciones inesperadas, que, como producto de su inoportuna intervención, se hicieron con el olvido de los habitantes de Villa Socorro, que poco recuerdan de su incidencia en lo social, hasta el punto de afirmar que “Casitas no ha tenido nunca un trabajo directo en el barrio, no tiene sede, solo mantiene dos trabajadoras sociales que visitan los hogares, pero parece que solo se preocupan por el pago”.²¹²

3.3 La parroquia y los sacerdotes

Si la presencia de Provivienda fue considerada peligrosa para la continuidad de los programas tanto en Villa Socorro como en el centro de Medellín, era vista como una amenaza externa, una serie de agentes que buscaban desestabilizar a la Fundación desde fuera; los funcionarios de Casitas fueron conscientes de otro desafío, esta vez crecía en su seno: la rebeldía de sacerdotes y el apoyo a la resistencia de los habitantes de Villa Socorro como a los tugurianos de diferentes barrios de invasión de la ciudad, hasta el punto de llegar a liderar la ocupación de terrenos y los enfrentamientos con la policía. Este enemigo interno tuvo también, como Provivienda, dos escenarios y dos momentos clave de apoyo a los sectores populares: 1. La construcción de la parroquia San Martín de Porres y la construcción de una solidaridad con los habitantes de Villa Socorro, que se mantuvo

²¹¹ Entrevista con Manuel Ocampo, habitante de Villa Socorro, 2015.

²¹² Entrevista con sacerdote Andrés Jaramillo. Londoño, Serna y Betancur 103.

velada, puede entenderse como el momento de incubación de la rebeldía, entre 1963 y 1965; 2. El apoyo decidido y la resistencia abierta a los desalojos que Casitas emprendió en la zona central entre 1968 y 1970, que tuvo como epicentro Villa Socorro.

A principios de 1962, la junta directiva de la Fundación Casitas de la Providencia ultimaba los detalles relacionados con la construcción del barrio Villa Socorro. La construcción de las edificaciones destinadas a los servicios comunales (centro de salud, escuelas y parroquia) ocupaba un renglón importante en el orden del día, a la par de las discusiones sobre el programa de rehabilitación económica de las familias, centrado en la implementación de empresas comunitarias y talleres de capacitación en diversos oficios (carpintería, confección, cocina). En medio de la discusión, el concejal Luis Guillermo Uribe, recordaba a los demás miembros de la Junta Directiva que la rehabilitación más importante era la moral, por lo que consideraba inoportuno dejar la parroquia sin terminar, aseguraba que, “se trata de rehabilitar los habitantes de los ranchos, pero nada se gana si se les proporciona trabajo, educación e instrucción y se deja de lado la parte moral y espiritual que es la base de la familia y la sociedad, deberá pensarse primero que todo, en lo espiritual”.²¹³ El alcalde, Darío Arango Tamayo, quien presidía la reunión, interpeló al concejal sugiriéndole esperar a que fuera nombrado un sacerdote para el barrio, pues con su ayuda podía decidir sobre las cuestiones asociadas a su labor, y sobre si era adecuado o no construir la parroquia.

A pesar de las objeciones se mantuvo la decisión de dejar la parroquia a medio hacer mientras la Arquidiócesis nombraba un sacerdote. Se delimitó el espacio donde sería erigida y se colocaron los cimientos. “La Fundación levanta la estructura, los muros que tienen columnas, vigas y estructura metálica de la parroquia. La entregan de esa forma, sin techo, sin presbiterio, sin baldosa, o sea, entrega un peladero, como decimos en el cuento, una ramada pa' entechar y un peladero, termine, consiga. Entonces usted [el sacerdote] tiene que terminarlo con la gente”.²¹⁴ Como no existía parroquia, los primeros meses después del traslado la misa se celebraba en la ‘Cajonería’, un lugar donde se fabricaban y reparaban cajones de madera para Cervecería Unión, que servía también como espacio de

²¹³ Fundación Casitas de la Providencia. “Acta 62 Junta Directiva Casitas de la Providencia”. Medellín, mayo 25 de 1962. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L3, ff. 65-66.

²¹⁴ Entrevista de Kelly López con Apolinar Arredondo, Habitante del Barrio Andalucía, Medellín, 2015. Apolinar trabajó gran parte de su vida en la Iglesia San Martín de Porres de Villa Socorro.

congregación. Las ceremonias religiosas estuvieron a cargo de los párrocos de Santa Cruz y Aranjuez, especialmente de Hernando Barrientos, quien era director de Cáritas arquidiocesana y representante de la Iglesia católica ante la junta directiva de la Fundación Casitas.

La parroquia de Villa Socorro fue bautizada San Martín de Porres por el Arzobispo de Medellín Tulio Botero Salazar, quien aprovechó la reciente canonización del santo de la caridad, concedida a comienzos de 1963 por el Papa Juan XXIII, para nombrar la capilla de este barrio popular: “Qué sitio más propio que poner el santo de la caridad en medio de los pobres”.²¹⁵ En agosto de 1963, arribó párroco de San Martín de Porres. Se trataba de Vicente Mejía, un sacerdote joven que comenzaba su actividad pastoral, al que se le adjudicó una casa cercana a la parroquia y la inspección de policía. Como vicario comenzó a cumplir sus atribuciones: terminar de construir la parroquia y proveerla de todos los implementos para la celebración de la eucaristía. Empezó a gestionar el cemento, las baldosas, las campanas, las imágenes sagradas. “Trabajó sin desmayo hasta hacer realidad lo que como un milagro se erigía en medio de la agreste y empinada topografía barrial: emergía una edificación que aunque rústica, encerraba entre sus paredes la fuerza y el tesón de un sentimiento: la fe cristiana”.²¹⁶

Los habitantes del barrio que asistían a misa, además de buscar el consuelo espiritual brindado por la religión, se congregaban para conversar y poner al corriente de sus problemas al sacerdote, quien comenzó a padecer sus circunstancias, y experimentar las angustias cotidianas, haciéndose partícipe de ellas. Le contaron su pasado, la estadía en los ranchos de cartón, lata y madera en La Alpujarra, y los problemas que padecían en Villa Socorro después del traslado, pues, a pesar de ser titulares de una vivienda, en comparación con servicios públicos y construida en material, les aquejaba el estado de las calles, además de “sus necesidades a nivel de salud, a nivel de empleo, los problemas de las mujeres, de las parejas y todos los problemas de la gente marginada”.²¹⁷

Gracias al trabajo mancomunado entre los habitantes y el párroco lograron proveer la iglesia en pocos meses, lo que comenzó a gestar una solidaridad al interior del barrio,

²¹⁵ Entrevista con Apolinar Arredondo.

²¹⁶ Hernán Ríos Arias, *Historia de Villa del Socorro o de como la Providencia sí nos socorrió* (Medellín: [s.n], 1986) 42.

²¹⁷ Entrevista con Vicente Mejía, realizada por Óscar Calvo. Ibarra, Ecuador, febrero de 2012.

más allá del aspecto material. Los tugurianos demostraban disposición a participar decididamente para satisfacer sus necesidades, sin la intermediación de los funcionarios de la Fundación, quienes los catalogaban como inferiores, incapacitados, apáticos o rebeldes. Acogieron a quien supo trabajar de la mano con ellos, comprender que sus problemas eran materiales y sus necesidades apremiantes, de manera que la solución era también material, y la conquista de estos beneficios producto de la lucha, gris, cotidiana e imperceptible.

Cuando el padre Vicente Mejía llegó a Villa Socorro se convirtió en la autoridad religiosa de una comunidad más numerosa, la parroquia estaba adscrita a un territorio más amplio: “cuando él llegó aquí más o menos el promedio era por ahí de unos 25 o 30.000 feligreses, incluyendo la gente de Villa del Socorro, la gente que estaba invadiendo todos estos Populares y la gente de Andalucía, porque nosotros pertenecíamos territorialmente a San Martín”.²¹⁸ Según Vicente Mejía la parroquia “era como una especie, por decir algo, de jurisdicción mía. Entonces esa parroquia empezó a irradiar, primero las invasiones de todos los barrios contiguos; segundo, el basural de Medellín”.²¹⁹

Algunos pobladores de Villa Socorro se dedicaban al procesamiento y venta de material extraído de la basura.²²⁰ El basurero municipal, al que llegaban por la carretera hacia Bello, conocida como Las Camelias, les suministraba medios para subsistir. Asesorados por el sacerdote chileno Alejandro del Corro, Eleazar Castrillón (gerente), Avelino González (tesorero), Rosa Goez y Gilberto Cifuentes (jefes de abastecimiento) y José Noel Parra (Secretario), crearon la Corporación de Papeleros de Colombia (COPAC). La corporación fue una iniciativa de los ‘basurriegos’ que comenzó a funcionar en octubre de 1963,²²¹ tenía sede en el barrio Villa Socorro, contaba con un camión donde se transportaba el material reciclado que era vendido a la industria local. Cuando Vicente Mejía conoció esta iniciativa, gestionó un transmóvil con micrófonos, con el que hacían perifoneo por varios barrios de la ciudad solicitando el material para reciclar.²²²

El caso del padre Vicente Mejía, quien asumió una postura crítica frente a su ministerio, fue representativo del contexto latinoamericano. Muchos clérigos, al convivir

²¹⁸ Entrevista con Apolinar Arredondo.

²¹⁹ Entrevista con Vicente Mejía.

²²⁰ Vásquez y Villegas 26.

²²¹ Luz Arcila, Consuelo Bustamante, Diana Praolini y Cecilia Jaramillo, *Evaluación y alternativas para la organización de la Corporación de Papeleros de Colombia*, (Medellín: UPB, 1975) 31.

²²² Entrevista con Vicente Mejía.

con estas comunidades, compartieron esperanzas y desilusiones de la gente de los barrios populares, lo que propició un viraje, incluso radical, en la interpretación del evangelio. La preocupación de Vicente Mejía por la suerte de estas gentes trascendió los límites administrativos trazados sobre el territorio para distinguir para la legalidad de la ilegalidad, el barrio ‘modelo’ construido por la municipalidad, de urbanizaciones piratas y tugurios. Su feligresía, aunque con particulares y disimiles relaciones con la institucionalidad, compartía similares condiciones de vida: la pobreza y la necesidad de escuelas, vías, transporte, salud, empleo y alimento.

Desde Villa Socorro, salía para enfrentarse a la policía cuando intentaba desalojar las familias y destruir sus ranchos. En una de sus incursiones en El Popular, se enfrentó a un carabiniero, “le pegó un puño a un sargento de la policía porque iba a tumbar un rancho... no, ya lo habían tumbado, cuando el padre llegó y entonces le sopló la mano”.²²³

El 15 de septiembre de 1965 Vicente Mejía, el polémico sacerdote de San Martín de Porres, fue exhortado por la curia a abandonar el país. Fue enviado a estudiar al Instituto Católico de París (1965-1968). En su reemplazo nombraron a Gonzalo Rivera (1966-1969), recordado por los partidos de fútbol, y por su contribución en la construcción de la cancha, sobre un tanque de agua que pertenecía a Empresas Públicas.²²⁴ Después Absalón Martínez (1969-1974), quien también fue Secretario General del Sínodo Arquidiocesano, e impulsó la pavimentación de calles y senderos con ayuda de la Acción Comunal. Aunque los curas no estuviesen vinculados a una interpretación radical del evangelio como expresión del compromiso con los pobres, los habitantes de Villa Socorro exigieron de ellos la gestión de materiales para la culminación de algunas obras, tal vez esto explica por qué al referirse a la presencia de los clérigos en el barrio se enumeren las mejoras con las que contribuyeron: la pavimentación de calles y senderos o la cancha de fútbol, lo que era indicador de una actitud comprometida con su labor pastoral, que le servía como elemento de interlocución con los pobladores.

El sacerdote es una figura central para comprender esta época, más que por el

²²³ Las versiones sobre este hecho atestiguan: “El padre comenzó aglutinar, a juntar al barrio, a darle vida, más de una vez nos tocó salir con garros a defender más de un rancho, hoy tumbaban un rancho y al día siguiente lo volvíamos a levantar, por eso, debido a que él se metía tanto con la autoridad y que al gobierno no le interesaba que hubiera organizaciones de barrios piratas por aquí y que los pobres construyeran sus barrios, a él nos lo destituyeron y lo tuvieron preso en San Benito”. William Estrada y Adriana Gómez, *Somos historia comuna nororiental*, (Medellín: s.d., 1992) 25- 26.

²²⁴ Entrevista con Apolinar Arredondo.

liderazgo emprendido en la invasión de terrenos y en la defensa de los tugurianos en contra de los desalojos, lo es por su carisma, es decir, por la capacidad para “dirigirse al poder en nombre de los otros”²²⁵ para expresar el discurso oculto, de descontento frente a la visión y las políticas que el gobierno municipal había construido para los habitantes de Villa Socorro. El carisma se basa en un lazo de reciprocidad entre quienes comparten un discurso que contraviene las prácticas de dominación. A simple vista es difícil distinguir, en las acciones de los líderes carismáticos, las voluntades o valores individuales que representan, pero ellos aglutinan los sentimientos compartidos y un discurso que recoge las experiencias particulares de los habitantes; los clérigos lograron expresar frente al poder las desavenencias surgidas en el ámbito cotidiano.

El sacerdote se convirtió en un personaje dinámico, que conectó la historia de diferentes barrios populares de la ciudad, vinculándose a los procesos organizativos, contribuyó con las invasiones en El Popular y el sector la María o Clínica Luz Castro en el costado noroccidental de la ciudad, además de enfrentarse en varias oportunidades a la policía para evitar los desalojos que la Fundación Casitas intentó efectuar a finales de la década de 1960 en La Carrilera y Estación Villa. De una u otra forma el clérigo comprendió que, si los habitantes de los barrios de invasión permitían que los planes de erradicación se llevaran a cabo, sin oponer resistencia, la situación que vivirían sería similar a la solución de sus problemas, el cambio de habitación y la vivienda ‘confortable’ no implicaban una transformación de sus condiciones de vida. Al desempleo, el hambre, la carencia de escuelas, se sumaba el transporte ineficiente, las cuotas de la casa y los servicios públicos.

Después de un intento de erradicación en La Carrilera en 1968, entre los tugurianos circuló un comunicado de la Junta Directiva de los Tugurios del Norte de la ciudad - Estación Villa, Carabineros y Carrilera-, en el que agradecían a los sacerdotes Vicente Mejía y Jorge Giraldo el haber ofrecido sus vidas para evitar el desalojo, y hacían un llamado a los habitantes de tugurios: “a los demás ciudadanos que se vieron obligados por su extrema pobreza a construir tugurios para albergar a sus humildes familias, que se dirijan a los Reverendos Padres ya citados, solicitándoles su protección y nos acompañen en unión

²²⁵ Scott, *Los dominados* 260.

a estos verdaderos representantes de la Iglesia”.²²⁶ También convocaban a sindicatos, agremiaciones, estudiantes y organizaciones populares a unirse en contra de los desalojos y en la lucha por una vivienda que les garantizara vivir como seres humanos.

Las trabajadoras sociales de la Fundación le solicitaron a Tulio Botero Salazar, Arzobispo de Medellín, amonestar a los sacerdotes que estaban “sublevando a los habitantes de los tugurios de la zona de la Carrilera, para que no acepten la selección”.²²⁷ Según los funcionarios de Casitas los sacerdotes no sólo estaban incitando el rechazo a la Fundación sino que aprovechándose de su investidura y actuando en nombre de la curia para presionar a las familias seleccionadas e incluidas dentro del programa para que no asistieran a las reuniones, entorpeciendo las erradicaciones. También remitían información sobre la Asamblea del movimiento Unidad de Acción, compuesta por miembros de Provivienda y la Acción Comunal de Villa Socorro. En una reunión presidida por Vicente Mejía y Ema Restrepo de Tapias, exconcejal, quienes proponían como objetivo del movimiento atacar los reglamentos de Casitas de la Providencia. La trabajadora social Nora Luz Arredondo solicitaba al alcalde investigar “la actitud de estas personas y se tomen las medidas correspondientes”.²²⁸

El 19 de agosto de 1968 el director de la Fundación Casitas de la Providencia envió un oficio al secretario de gobierno Augusto Vásquez, con copia al alcalde, expresándole gran preocupación por lo que ocurría en los barrios del norte de la ciudad, especialmente en Villa Socorro, donde el párroco Vicente Mejía estaba incitando a los pobladores a rebelarse contra las autoridades municipales. Le parecía inaudito que, habiendo un puesto de policía en el sector, las autoridades no hiciesen nada para detener estas reuniones donde se lanzaban improperios contra el alcalde y convertían el barrio en un foco de sublevación. Haciendo énfasis en la amenaza que implicaba un barrio como Villa Socorro, con una

²²⁶ Jesús Antonio Torres, Orlando Rojas, Óscar Gutiérrez, Rubén Darío Correa. “ALERTA”. Medellín, agosto 9 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 115.

²²⁷ Iván Uribe Jaramillo, Cecilia Moreno Pérez, Rocío Atehortúa y Nora Arredondo. “Carta al Arzobispo de Medellín”. Medellín, agosto 8 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 119.

²²⁸ Nora Luz Arredondo. “Información sobre Ema Restrepo y Vicente Mejía”. Medellín, agosto 23 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 102.

población de aproximadamente ocho mil habitantes, podía “constituir un grave problema si se permite que se les incite a una violencia innecesaria”.²²⁹

El jefe del Departamento de Seguridad y Control respondió a la preocupación de los funcionarios de Casitas enviándoles un reporte sobre el seguimiento a Vicente Mejía. Los agentes encubiertos registraron una reunión de 500 personas en el barrio Caribe, haciendo hincapié en la participación de Vicente Mejía, Mario Upegui —presidente de la Central Provivienda a nivel nacional—, Humberto Chaves, Arturo Vallejo, José Taborda y las juntas de tugurianos. En esta reunión propusieron la creación de un Comité de Unidad de Acción conformado por los sindicatos FEDETA, ASA, UTRAN, UTRATEXTO, UTRAMICOL y FEDETEX, además de organizaciones estudiantiles, quienes debían apoyar a los habitantes de tugurios en la resistencia emprendida contra los desalojos ordenados por Casitas de la Providencia, también convocaban a los asistentes a una manifestación, que tendría lugar durante la Conferencia Episcopal, con el propósito de evidenciar las injusticias y las necesidades de los habitantes de los tugurios.²³⁰

El sábado 8 de febrero de 1969, solo unos días después de la advertencia pública de la empresa de alcantarillados, la policía efectuó el desalojo de 100 habitantes de la Estación Villa, que en volquetas fueron llevadas al Barrio Santo Domingo Savio, con el argumento que allí residirían en casas confortables. El sacerdote Vicente Mejía se presentó para contribuir con la resistencia de los pobladores, como había sucedido unos meses atrás en La Carrilera, pero esta vez el clérigo fue detenido junto con su hermana. “El oficial de guarnición, mayor Alberto Arroyave, personalmente ordenó que si el sacerdote no dejaba desocupar las covachas fuera trasladado a órdenes del inspector de turno de la permanencia Norte.”²³¹ Como recuerda la trabajadora social Nora Luz Arredondo la participación de los sacerdotes,

“ya habían estado todas las peloterías, no sé si usted ha oído hablar de toda la situación con los llamados curas de Golconda, Vicente Mejía, tengo memoria de él en su relación con la gente, promoviendo el movimiento de los tugurianos, enfrentándose ante el conflicto de la erradicación de tugurios en las condiciones que se hacía, porque la erradicación de tugurios no siempre fue para llevarlos a Villa del Socorro, es que les tumbaban los tugurios, eso era una cosa violenta. Con la erradicación se les ofrecía una

²²⁹ Iván Uribe Jaramillo. “Oficio N° 073”. Medellín, agosto 19 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, f. 104.

²³⁰ Fabio Gallego Jaramillo. “Oficio N° 2644”. Medellín, agosto 21 de 1968. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Comunicaciones, C17, L4, ff. 39-41.

²³¹ “Trasladados 100 habitantes de tugurios por la policía”, *El Correo* (Medellín) 9 feb. 1969: 2.

alternativa, pero ya cuando Villa Socorro también fue violenta y las trabajadoras sociales eran las que ponían la cara también en eso”.²³²

A los funcionarios de la Fundación Casitas les preocupaba la transmisión de la religión como mecanismo de disciplinamiento, como factor de cohesión de una comunidad en torno a las mismas creencias, saber a los habitantes de Villa Socorro católicos era para ellos una garantía de control con los sectores populares. Sin embargo, al asignar clérigos que, al convivir con los sectores populares padecieron sus angustias cotidianas, contribuyeron fisurar esos códigos, como consecuencia de la reinterpretación de los principios del catolicismo por parte de los sacerdotes comprometidos con los pobres, quienes comenzaron a cuestionar su aprendizaje en el Seminario, el carácter abstracto de la religión y de una iglesia desconectada de las particularidades de la vida cotidiana y las necesidades de los vecindarios urbanos; aprovecharon las prácticas asociadas a una lucha cotidiana por la supervivencia y la satisfacción de necesidades familiares y comunales para replantear sus referentes y construir un lenguaje común con la gente, predicando el evangelio desde la perspectiva de clase. El sacerdote se situó como sujeto social, criticando el papel de la institución eclesiástica en el mundo moderno; sin embargo, no renunció a ella, y se mantuvo dentro de sus límites, convirtiéndose en un desafío para la jerarquía de la Iglesia y la elite.

El sacerdote optó por conservar su investidura, ya que ahí radicaba su fuerza, les brindó a los ocupantes “legitimidad simbólica e institucional”,²³³ con ella pudo cumplir con el propósito de ayudar a estas gentes. La religiosidad popular reflejaba una posición política, que, en principio, se mantuvo como un discurso oculto, latente, comenzó a gestarse de manera silenciosa, tímida. “Las iglesias, veía el pueblo, eran un fortín de ellos en contra de las autoridades y tenían cura a la disposición lo que les daba una seguridad, no era tanto por su piedad, por su devoción o por su religiosidad sino porque culturalmente el cura era un apoyo para ellos y creo que le pusieron, para defenderse de las autoridades y para aglutinar”.²³⁴ La presencia del sacerdote se convirtió en un arma política esencial para los tugurianos porque era la encarnación de la versión idealizada que la elite había hecho

²³² Entrevista con Nora Arredondo Díaz.

²³³ Calvo y Parra 52.

²³⁴ Entrevista con Vicente Mejía.

de sí misma,²³⁵ es decir, de una sociedad profundamente respetuosa de la religión católica, que buscaba en ella los fundamentos para la acción en su vida cotidiana (privada) y el gobierno de la ciudad (público).

La elite de Medellín consideraba la transformación liderada por sacerdotes como muestra de una actitud revolucionaria, pues a sus ojos la vida del espíritu, la religión y la política solo podían manifestarse mediante ejercicios de contemplación. Por ende, las personas dedicadas a una constante lucha por la satisfacción de necesidades básicas tenían vedado el acceso a los bienes espirituales, condenándolos a la incapacidad para participar en la construcción de nuevos referentes, ajustados a sus particulares circunstancias de vida.

“Es preciso tener en cuenta que cuando las necesidades vitales no están satisfechas, el pensar en valores espirituales es casi imposible, la gente en estas condiciones lleva una vida en la que sólo lucha por sobrevivir, y en esa lucha desgasta su energía y sus ilusiones, dejando a un lado u olvidando totalmente el desarrollo del espíritu. En semejante situación no podrá esperarse pues, que haya vocaciones religiosas en igual número que en ambientes donde las condiciones son más elevadas o por lo menos, satisfactorias”.²³⁶

La religión era un aspecto importante para Casitas de la Providencia, pero el control a través de ella solo era posible a partir de una sola interpretación de sus preceptos, o por lo menos una con la que pudieran compartir ciertos sentidos. ¿Cómo comprender que la religión haya sido un bastión tanto para la dominación como para la resistencia? Por un lado, los sacerdotes a punta de oraciones lograron paralizar la acción policial, encargada de ejecutar los desalojos. Por otro, la alianza entre la curia y la Fundación fue fundamental para poner en cintura a estos sacerdotes rebeldes, constreñirlos no sólo a la interpretación oficial del evangelio, que para la época coincidía con las reivindicaciones que estos sacerdotes hacían: una iglesia del lado de los pobres, sino una restricción de las prácticas. Lo que estaba en juego, más allá del qué, era el cómo, las maneras en que se reivindicaba esa renovada postura del catolicismo. La estrategia de control inicial fue extraer a los padres de esos barrios, que viciaban su formación y desviaban el ejercicio de su ministerio, enviarlos a estudiar fuera del país o asignarlos a nuevas parroquias, en barrios de clase media o alta, donde los problemas de la pobreza no hacían mella en su interpretación y su práctica pastoral.

²³⁵ Scott, *Los dominados* 80.

²³⁶ Vásquez y Villegas 84-85.

Entre el control y la rebelión, el sacerdote encarnaba un personaje que transitaba ambos mundos, su rebeldía implicaba entonces la fractura de la unidad y la apertura de nuevos espacios de sociabilidad, convirtiendo las parroquias en lugares donde se hacía posible la resistencia. En el seno del poder, con la misión de controlar, exigieron de la jerarquía de la iglesia y la elite industrial una materialización del compromiso cristiano con los pobres. Sin embargo, a finales de la década se les niega el papel de interlocución entre los grupos, la elite se rehúsa reconocerse en este grupo sacerdotes, y los señala de estar subvirtiendo los valores religiosos auténticos con la pretensión de inocularlos con nuevas ideologías políticas, en muchos casos, contrarias a la religión. Fue en ese momento cuando los sacerdotes fueron apresados y castigados como civiles, dando un viraje hacia políticas represivas contra expresiones disidentes aún dentro de la iglesia católica. Los sacerdotes como líderes se convierten en personajes especialmente peligrosos para las pretensiones del orden diseñado por la elite, fueron conscientes que tenían el enemigo demasiado cerca, y como es común se perdona más fácilmente la afrenta de un desconocido –Provivienda- que la traición.

3.4 Organización política

Encontrar un barrio sin escuelas, sin parroquia, con calles sin asfaltar y barrancos al lado de las casas, sin senderos para acceder a ellas, carente de espacios públicos o lugares de integración y recreación, como una cancha o un parque, generó indignación en los habitantes de Villa Socorro, sintiéndose engañados por las trabajadoras sociales de Casitas de la Providencia, que prometieron muebles, camas, escuelas y todos los servicios. En principio este descontento estuvo acorde con las expectativas del departamento de servicio social y la junta directiva de la Fundación, quienes suponían que los habitantes, al ser conscientes de la necesidad de proveer al barrio de estos equipamientos y servicios, se verían en la necesidad de organizarse en una junta de vecinos, por medio de la cual gestionarían los materiales y permisos para construirlos. En consonancia con lo esperado e impulsada por Ramón Taborda y Ramón Padierna se creó la junta de Acción Comunal de Villa Socorro, quienes comulgaban con la Central Nacional Provivienda. Estos líderes transaban con el municipio la entrega de materiales para la pavimentación de las calles, y al mismo tiempo hacían campaña en el barrio para que la gente no pagara las cuotas de las viviendas.

La parroquia no fue la única necesidad que movilizó a los habitantes de Villa Socorro, la pavimentación de calles y senderos fue otra de sus prioridades. Mientras la junta de Acción Comunal se dedicaba a la gestión de materiales como gravilla y cemento, los vecinos del barrio se encargaban de la pavimentación de calles los fines de semana. La pavimentación representó para ellos la posibilidad de transitar calles aptas para el acceso los carros, por las que podrían transportar los enfermos y desplazarse sin lidiar con los lodazales de tierra amarilla. Para motivar la participación de los habitantes del barrio en las jornadas de trabajo no remunerado, la Junta de Acción Comunal repartía mercados donados por CARE, según el número de horas laboradas registradas por los líderes de cada sector en listas. (Figura 13)

“Entonces nos puso la condición don Ramón, 'Aquí tenemos unos aceites, unas harinas alimenticias pa' la gente que trabaje en las calles'. Ahí fue donde levantamos cabeza y salió la gente a trabajar, lo que se llama una estadística, ¿usted cómo se llama? Fulana de tal, con tantas horas, usted me mando un documentico a mano escrita. Con Fulano de tal que trabajó tantas horas y tiene derecho a una bolsita con un poco de alimento. Aceite, harina, arroz... Entonces la gente tan pobre, iba a trabajar. [...] Eso nos sirvió mucho para meterle la moral a la gente, porque es que usted sabe que donde trabaja y no hay plata, así sea un beneficio para todo el mundo, pero toda la gente no es consciente de eso, hay gente que trabaja un ratico y luego 'eso pa' qué, que trabajen los burros'. Eso nos duró un poco de tiempo y entonces ahí salía la gente a trabajar, 'Apúnteme don Manuel, apunte que ya llevo tantas horas. Don Francisco apúnteme’”.²³⁷

“La gente empezó a terminar la iglesia, empezamos a hacer convites para arreglar las calles, la iglesia y empezamos a hacer reuniones por sectores del barrio: la parte de abajo, la parte de arriba, etc. La gente empezó a creer en ellos mismos, todo el mundo ayudaba, no faltaban las malas notas [...] Llegaban algunos comestibles a Cáritas y todo se le entregaba a la gente en forma organizada, no era a la que le diera la gana, tratábamos de que alcanzara para todo el mundo, poquito, pero era la gota de leche, la cucharadita de manteca o de aceite pero en todo caso la gente veía que todos estábamos respondiendo, desde el padre y la Provienda que empezó a colaborar”.²³⁸

Organizados por medio de ‘Comités de Sector’, aprovecharon la división que Casitas de la Providencia hizo del barrio. Un líder de sector era el encargado de recibir los materiales y administrarlos entre los vecinos de cada calle. Los habitantes de Villa Socorro recuerdan la pavimentación como evidencia de solidaridad y trabajo mancomunado orientado a suplir una necesidad colectiva. Por medio de autoconstrucción de calles se configuró un espacio de encuentro que reafirmaba la insatisfacción inicial ante el estado de los servicios colectivos y el desengaño que sentían hacia Casitas de la Providencia. Por otro

²³⁷ Entrevista con Manuel Ocampo, Habitante de Villa Socorro, 2015.

²³⁸ Entrevista con Vicente Mejía.

lado, sirvió para consolidar los lazos entre la comunidad, al considerar que, por medio de estos esfuerzos, basados en la organización social, conquistaban una autonomía relativa con respecto a la Fundación. La Junta de Acción Comunal, como intermediaria de los recursos suministrados por la administración municipal para el desarrollo de obras, estaba lejos de ser un simple mecanismo de dominación de clase, constituida por personajes que simultáneamente militaban o simpatizaban con partidos de izquierda como Ramón Padierna, Ramón Taborda, Hernando Lora, Hildebrando Lora, Octavio Marín, Hernán Ríos o Libardo López.²³⁹

Figura 13



Inicio de pavimentación de las calles en Villa Socorro y volqueta del municipio descargando material. Convite en la calle 104 E. Medellín, 1970. Tomado del Periódico Mi Comuna 2 (Abril 2014)

Cuando nos referimos a participación política en sectores populares no aludimos entonces a una relación dicotómica de las relaciones de poder, es decir, una disputa ideológica, de caracteres abstractos, como estaba en boga durante la Guerra Fría, sino a la configuración de prácticas cotidianas de dominación y resistencia en el contexto urbano, donde una y otra parte cosechan beneficios y fracasos, una contienda política constante que moldea y delimita el poder, tanto de los sectores populares como de las instituciones estatales, donde los primeros difícilmente alcanzaran una total autonomía, y el Estado y las

²³⁹ Algunos de ellos militaron en el Partido Comunista, UNO ANAPO, Frente Democrático y la Unión Patriótica. En: Hernán Ríos Arias.

organizaciones transnacionales, por su parte, a través de la entrega de materiales y recursos, se encuentran lejos de dominar a su antojo.

El capital transnacional (víveres donados por CARE y la financiación de escuelas con recursos de la Alianza para el Progreso) sirvió para abrir espacios de intermediación política que fueron instrumentalizados por líderes con intereses personalistas,²⁴⁰ que se opusieron a las imposiciones del gobierno local representado en la Fundación Casitas de la Providencia. Estas formas de intermediación, basadas en el clientelismo, se alimentaron de la apatía generada ante el descontento y la desilusión que los habitantes de Villa Socorro sentían hacia la institucionalidad representada en la Fundación. Buscaron provecho en estas relaciones, votaron o favorecieron a quien contribuía a solventar sus necesidades básicas y materiales, de manera que los programas políticos no fueron la base de la motivación de los sectores populares, las ideas o en el sustrato ideológico, sino, y en última instancia, el provecho de “una red de beneficios electorales a cambio de intervenciones en los espacios urbanos”.²⁴¹

Londoño, Serna y Betancur en *Composición social y movilización política en barrios populares de Medellín* desconociendo las contradicciones en que se desarrolló esta particular relación con la institucionalidad, afirman que “las luchas en torno al lugar de residencia, la dedicación del tiempo libre al trabajo de dotación del barrio, absorben totalmente los esfuerzos organizativos y llega a diluir la lucha de clases en una lucha consumerista”,²⁴² a partir de esto se es posible considerar que en el intercambio entre favores políticos e intervenciones urbanas, los grupos sociales subordinados internalizan las normas creadas por la clase dominante.²⁴³ Esta interpretación contribuye a “naturalizar” el poder estatal, y borrar el conflicto de los procesos de dominación, quitándole “su condición de institución formada, de experiencia política históricamente situada y determinada”.²⁴⁴ En consecuencia, se asume que en la satisfacción de necesidades inmediatas los sectores populares no construyeron formas de participación política, llegando incluso a sugerir que “sus esfuerzos no logren orientarse hacia fines políticos futuros, por esa carencia de tiempo

²⁴⁰ En las entrevistas la mayoría de los pobladores consideraban que algunos líderes aprovecharon su cargo para extraer beneficios económicos para familiares y allegados.

²⁴¹ Juan Carlos Moreno, “De Centros Cívicos a Juntas de Acción Comunal. El cambio de modelo de gestión y participación barrial en Medellín en la segunda mitad del siglo XX” *Estudios Políticos* 45 (2014): 194.

²⁴² Londoño, Serna y Betancur 82.

²⁴³ Scott, *Los dominados* 112.

²⁴⁴ Juan Carlos Vélez, “Prácticas hegemónicas y resistencias cotidianas” *Estudios Políticos* 25 (2004): 91.

físico, ni su mente ocuparse de problemas que requieren una capacidad de abstracción superior”.²⁴⁵

Se define entonces la participación política asociada a partidos o instituciones de gobierno, resumiéndola a relaciones de sujeción y dependencia de entes externos que pretenden dominar y, en consecuencia, la dominación aparece como calculada y sin yerro, aplicada según un libreto. El Estado queda entonces incólume en estos contactos y continúa, a fin de cuentas, imponiendo su voluntad a esta población vulnerable, transformando territorios de pobreza en territorios de dominación. En este proceso parece quedar algo vedado: los silencios, el desinterés y el oportunismo como estrategias por parte de los grupos subordinados, hacen parte de unas prácticas de resistencia construidas colectiva y cotidianamente para establecer y sobrellevar las relaciones de poder, sin olvidar que continúan sometidos a situaciones desventajosas en un contexto de franca desigualdad. Este comportamiento en apariencia “errático” y contradictorio expresa la existencia de un discurso oculto, que sobrevive de forma simultánea a estrategias que se amparan en el discurso público de las elites.

En el contexto de la Guerra Fría los barrios populares fueron vistos como un capital político importante para una y otra corriente ideológica: los capitalistas identificaban estos territorios como focos donde proliferaba la apatía y la rebeldía, donde tenían su campo de acción los grupos revolucionarios, por lo que no tardaron en atribuirles un carácter amenazante. Por su parte, los comunistas buscaban el favor de esta población para fortalecerse políticamente, aunque terminaron siendo presas del desengaño ante la asimilación particular que estos pobladores hicieron de conceptos como propiedad privada, explotación, lucha de clases y revolución, atribuyéndoles un comportamiento errático, por la contradicción entre sus condiciones de vida, casi miserables, y la reafirmación de estructuras de dominación que perpetuaban y en muchos casos profundizaban su dependencia en un contexto de evidente desigualdad social. Paradójicamente, ambas posturas llegaron a la conclusión de que era difícil controlar esta población para favorecer su proyecto político. Ante la preocupación por garantizar la subsistencia de sus familias y la satisfacción de necesidades vitales, a estas personas se les atribuyó una capacidad de abstracción menor para acceder a una de orientación y educación en los ‘verdaderos’

²⁴⁵ Londoño, Serna y Betancur 202.

valores políticos, que cada vez revestían características más abstractas, lejos de la vida cotidiana y de las preocupaciones mundanas.

Más allá de la legitimación de formas de dominación o de ser la puerta de entrada del comunismo, Villa Socorro fue un escenario de cotidianas transformaciones que emergieron en medio de diferentes instituciones y organizaciones de diversa índole. Los habitantes de este barrio forjaron particulares formas de organización política y social, sustentadas en la solidaridad y en formas de resistencia cotidiana. En un esfuerzo por conseguir aquello de lo que carecían pactaron con uno y otro bando sin comprometerse formalmente, prefirieron expresiones endémicas de identidad, discurso y organización, ajustadas a su particular visión del mundo, la política y la sociedad. En este territorio, donde tantos buscaban gobernar, los sacerdotes y miembros de Provivienda tuvieron más eco y ejercieron un liderazgo más activo que cualquier trabajadora social o funcionario estatal. La presencia de sacerdotes en el barrio, no debe interpretarse como el triunfo de la dominación simbólica por medio de la religión, ya que la experiencia de sacerdotes jóvenes en parroquias de barrios recién fundados y la convivencia con la gente en estos territorios de pobreza, fortaleció nuevas interpretaciones sobre la labor de la iglesia que, aunque expresaban una tendencia mundial de la iglesia católica, sólo en la práctica y a nivel local esas nuevas ideas fueron materializadas.

Los agentes de cambio designados por el Estado, trabajadoras sociales y sacerdotes, quienes tenían la misión de controlar esta población para favorecer los intereses de la elite local y el triunfo de la Alianza para el Progreso, transformaron sus propios referentes y en muchos casos se convirtieron en los principales aliados de los sectores populares, alejándose progresivamente de las pretensiones de control social de las elites. Los sacerdotes de estos barrios se radicalizaron en el ejercicio de su ministerio, enfrentándose a la policía e impidiendo el desalojo de familias, incluso llegando a liderar invasiones de terrenos. Las trabajadoras sociales se opusieron a su manera, al ser marginadas de sus funciones como “educadoras” para el cambio social, viéndose en la necesidad de replantear los referentes teóricos y los metodológicos con los que pretendían incidir en la sociedad.

¿Por qué desapareció la Fundación Casitas de la Providencia? La Fundación quedó inerte ante las críticas que recibía por parte de otras instituciones, que se sumaron a la atmosfera de división al interior. El desarrollo de las circunstancias hizo ver su modelo

como obsoleto, varios funcionarios propusieron de dar un viraje para emprender nuevos proyectos, distintos a programas de vivienda para familias pobres y la erradicación de tugurios en la zona central, acordes con las propuestas internacionales, que cada vez hacían más hincapié en modelos de autoconstrucción. La dimensión social del programa de Casitas, centrado en la rehabilitación había provocado efectos adversos a la acción institucional.

El 10 de julio de 1973 el arquitecto William Hinestrosa Tirado, director de la Fundación, presentó un balance sobre el estado de los tugurios en Medellín. Según el informe existían 7.150 tugurios dispersos en la ciudad, que albergaban a unas 7.500 familias y una población de 50.000 personas, aproximadamente el 5% de la población del municipio. En contraste con los asentamientos en zonas centrales de la década anterior, éstos se presentaban “en forma de invasión masiva e incontrolada en la periferia de la ciudad, lo que ha llevado al establecimiento caótico de grandes extensiones de vivienda carentes de las más elemental infraestructura, donde las edificaciones de material de desecho se aglomeran en un irregular y caprichoso miniloteo”.²⁴⁶ Era la primera vez que un funcionario de Casitas manifestaba preocupación ante el crecimiento de los tugurios en la periferia de la ciudad, quedando en evidencia un tratamiento diferencial que habían dado a los tugurios: los localizados en áreas céntricas y los de áreas periféricas. Los primeros situados en terrenos de propiedad oficial, característicos del patrón de poblamiento predominante en la década de 1960, para la década de 1970 se presentaba con menor intensidad; al ubicarse en áreas destinadas a otros usos (comerciales o industriales) exigían como única solución la erradicación. El segundo tipo, localizado en “puntos distantes del centro de la ciudad, en zonas de difícil acceso y por tanto de poco control”,²⁴⁷ usualmente en terrenos de propiedad oficial o de propietarios particulares con títulos dudosos; al estar ubicados en zonas destinadas a vivienda, el tratamiento indicado para ellos era la remodelación en el mismo sitio.

En esta oportunidad la Fundación se interesó en mostrar una radiografía completa de las zonas de invasión en la ciudad, evidenciando la importancia que el poblamiento de

²⁴⁶ William Hinestrosa Tirado. “Informe: Problema de los tugurios en Medellín”. Medellín, julio 10 de 1973. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L5, f. 42.

²⁴⁷ William Hinestrosa Tirado. “Informe: Problema de los tugurios en Medellín”. Medellín, julio 10 de 1973. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L5, f. 44.

las laderas tenía en la configuración urbana de Medellín. Se refería a las invasiones en la periferia como una especie de explosión de tugurios, a pesar de que muchos de ellos se desarrollaron de forma simultánea o a los del centro de la ciudad. El silencio había sido la regla, una invisibilización que denotaba el tratamiento diferencial con respecto a los barrios de invasión, emprendiendo una campaña de remoción de los ubicados en áreas céntricas, en los que habían centrado su interés, sacando de su campo de visión lo que ocurría en las montañas, solo hasta que adquirió mayores dimensiones y la Fundación, por sus propias dinámicas y dificultades se vio obligada a replantearse, a intentar salvaguardarse del desahucio ocasionado por la desfinanciación y obsolescencia de sus programas, encontró en ellos la oportunidad para pervivir gracias a un nuevo enfoque, después de resguardar el corredor del río como centro de la ciudad, y conquistar su ‘corazón’ para gobernar desde él, emprendió una nueva contienda por la delimitación del perímetro urbano. Propuso un programa de granjas y parcelas, teniendo como escala de acción el área metropolitana. Con miras a delimitar un cordón verde que frenara el crecimiento ‘caótico’ de la ciudad, se adecuaron los terrenos del municipio en San Cristóbal y Villa Tina, dotándolos con letrinas y viviendas económicas, que “mejoraría[n] la higiene ambiental y propiciaría una economía de subsistencia para un considerable número de familias”.²⁴⁸

En septiembre de 1975 el Concejo de Medellín por medio de Acuerdo 40, dio vida a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE), a la que atribuía la facultad para efectuar compras de tierra y concedía la potestad de encargarse no sólo de planes de vivienda sino del desarrollo urbano, adquiriendo un nuevo campo de acción y recursos de las entidades encargadas de financiar esta clase de proyectos, como el Ministerio de Agricultura, ICA, la Caja Agraria, INDERENA, INCORA, CORFORESTAL, IDEMA y el SENA, quienes le brindarían asistencia técnica.

La Fundación cedió progresivamente al Instituto de Crédito Territorial varios de los proyectos de erradicación, acorde con una solicitud hecha por esta institución, que deseaba asumir las riendas de estos procesos con la idea de aplicar nuevos paradigmas. El director regional, Diter Castrillón, consideraba que los gastos administrativos generados por la Fundación Casitas eran muy altos, además aseguraba que adolecía de “deficiencias

²⁴⁸ William Hinestrosa Tirado. “Informe: Problema de los tugurios en Medellín”. Medellín, julio 10 de 1973. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho del alcalde, S. Actas, C17, L5, f. 54.

técnicas”, por lo que propuso la liquidación de la entidad, afirmando que el Instituto de Crédito era el organismo encargado de solucionar los ‘problemas’ urbanos.²⁴⁹

El gerente regional del Instituto de Crédito Territorial implementó novedosos métodos de erradicación con las familias que habitaban Tenche, encomendada por la administración municipal y legada por Casitas de la Providencia. A manera de una operación secreta, sin generar muchos escándalos que pudiesen alertar a la prensa, las familias fueron trasladadas a diferentes barrios de la ciudad, buscando desarticular cualquier germen de organización política que les permitiera resistir. Las trabajadoras sociales intervinieron en el proceso con la misión de seducir, de convencer a los pobladores, y así facilitar el desalojo. Con estas estrategias quedaban en el pasado la aspiración de construir comunidades, de colocarlas bajo supervisión atenta, el propósito de controlarlas. Al referirse a esta estrategia, Diter Castrillón, señala:

“Lo único que yo le pedía a las trabajadoras sociales es que, lo único que me tienen que ayudar es que una familia se desplace, o acepte. Porque ellos dijeron no nos vamos de aquí, nos tienen que sacar muertos, lo de siempre, de aquí no nos vamos y esas cosas. Mejor dicho, logramos que una familia se montara en una volqueta y dijera nos vamos, y eso fue pues, lo que yo tenía programado para tres días, se hizo en un solo día. Y esos los trasladamos a una serie de barrios de Medellín, y no hicimos un gueto. [Yo detesto los guetos, no soporto pues esos barrios unificados y toda la cosa. Entonces, en barrios de la comuna noroccidental como el 12 de Octubre, los pusimos una manzana si -como en ajedrez, pero yo no quería que fuera un barrio [...]] Mejor dicho, yo me llevé la gente y prácticamente, y digamos con un poquito de petulancia, el único que sabe dónde están ellos soy yo. Hoy nadie sabe dónde están los de Tenche, pónganse a buscarlos y no los encuentran”.²⁵⁰

La construcción de barrios y los experimentos sociales fueron tachados como inútiles intentos de transformar las actitudes de los pobres de la ciudad, que evidenciaban una postura anticuada y prepotente por parte del Estado, que cada vez tenía menos presencia en los programas de vivienda, que adquirirían progresivamente un cariz técnico, preocupado por aspectos como los materiales de construcción, centrados en la ayuda mutua y los procesos de autoconstrucción. La Fundación había cumplió con su misión, aunque con sinsabores, consiguió erradicar tugurios de espacios estratégicos del centro de la ciudad, contribuyó en la consolidación del eje del río como centralidad y la segregación socioespacial como modelo de poblamiento de la ciudad.

²⁴⁹ Diter Castrillón. “Carta a Ignacio Vélez Escobar”. Medellín, mayo 27 de 1970. AHM, Medellín. F. Alcaldía, S. Despacho, S. Comunicaciones, C18, L16, f. 45.

²⁵⁰ Entrevista con Diter Castrillón, realizada por Natalia García, Oscar Calvo y Lisette Martínez Medellín, 20 de octubre de 2011.

Conclusión

La particularidad de la Fundación Casitas de la Providencia la constituye su interés por los proyectos de renovación urbana, lo que tuvo profundas implicaciones en la configuración del tejido urbano de Medellín, al efectuar las erradicaciones y la construcción de barrios en el norte de la ciudad, incentivó y consintió el crecimiento de este sector, ayudando a gestar y consolidar las comunas más populosas de la ciudad. El tratamiento diferencial de los tugurios devela los intereses en juego y las disputas que se entablan para hacerse con zonas de la ciudad, conflictos sociales que se materializan en el espacio. A la par fue un intento de emprender, bajo la premisa que era posible y necesario conducir el cambio social, crear una comunidad, con aspiración de controlar casi la totalidad de los aspectos de la vida de las familias erradicadas del centro de la ciudad, en un esfuerzo por moldear las conductas, de educar para habitar, de dominar a una población que se representaba como inculta, agreste y potencialmente rebelde, a través de un modelo de intervención y asistencia social que marcó la historia de Villa Socorro, como epicentro de un experimento social que irradió consecuencias inéditas a otras experiencias urbanas, simultáneas y posteriores en otros barrios de invasión, que calaron en los referentes y prácticas de quienes eran los encargados de infundir el orden social: sacerdotes y trabajadoras sociales, que a pesar de estar adscritos a estos proyectos, transformaron la religión y ciencias sociales a través de la práctica y de nuevos enfoques, que les permitieron representarse de otra manera a los sectores populares. El contacto y la cercanía adquirida gracias al trabajo cotidiano los obligó a distanciarse de las directrices aprendidas en el Seminario y la Universidad, y en muchos casos los obligaron a transitar por nuevas sendas.

La presencia de Provivienda en Villa Socorro y el apoyo de sacerdotes, quienes por su posición podía transitar entre el discurso de la elite y el oculto de los sectores populares, fue aprovechado por los habitantes de Villa Socorro para desacatar las directrices de la Fundación y fracturar el modelo desde dentro.

El modelo de la Fundación Casitas de la Providencia se agotó por los conflictos sociales que tuvo que enfrentar y que sobrepasaron su capacidad, fue cediendo ante las circunstancias y en buena medida fue arrasada por ellas. El declive de la Fundación Casitas

de la Providencia fue evidenciando la consideración diferencial con respecto a los barrios de invasión en el centro y la periferia de la ciudad, y fue dejando espacios para modelos de intervención directa, basados en el control policial y las directrices de criterios técnicos prevaleciendo sobre la dimensión social que, de una u otra manera, caracterizaron a la Fundación por más de una década. Cada vez más encarnaba las formas de una quimera la pretensión de construir comunidades, cuando la ciudad planificada, para muchos, ideal, se convirtió en la ‘ciudad infernal’. Villa Socorro fue el hito de una urbanización a gran escala, un experimento social que para la Fundación había fracasado, para sus habitantes y aliados significó una escuela, un campo fecundo con consecuencias inéditas y fundamentales para la organización política de barrios populares, para el emprendimiento de alternativas que permitieron definirse como sujetos sociales, que, a través de la resistencia y la solidaridad, lograron presionar a la institucionalidad para tener en cuenta sus opiniones, conquistando espacios para la participación política. Estas formas de organización evidenciaron la dificultad de dirigir y controlar una población que se diversificaba a cada instante, y se nutría con nuevas ideas y prácticas, denotando nuevas experiencias de habitar la ciudad.

La transformación de Casitas y la observación de otras iniciativas institucionales, precedentes, simultáneas y posteriores, evidencian la plasticidad de las interpretaciones con respecto a lo social, la pobreza y la marginalidad como nociones que sustentan proyectos públicos y privados de intervención y tratamiento de comunidades. Un acercamiento al funcionamiento de diferentes instituciones, su capacidad de acción, composición, referentes y prácticas, testimonian cómo se construye y se ejerce el poder en el ámbito urbano. De manera que las instituciones de planificación y control social, que están íntimamente relacionadas con universidades y centros de investigación, deben ser analizadas desde una perspectiva histórica y territorial que asuma la dimensión de escala espacial y temporal, pues sus transformaciones tienen lugar como resultado de conflictos sociales que se expresan en todos los ámbitos de la vida social, desde la intrincada configuración de barrios de invasión, por la celeridad de establecerse ante las presiones de la acción policial; los proyectos de urbanización institucional, inspirados en teorías discutidas en el ámbito internacional —congresos, seminarios, talleres, conferencias—, encuentros donde técnicos, ingenieros, arquitectos, trabajadoras sociales y funcionarios aprehenden las directrices y

concepciones de un determinado momento; nos permiten analizar, en última instancia, la intervención u omisión del Estado y sus implicaciones en los procesos de poblamiento de la ciudad.

Los proyectos emprendidos por el poder estatal se encuentran lejos de ser monolíticos e impuestos a la sociedad de forma unilateral. En contraste, a partir de ellos emergen consecuencias inusitadas que abren espacios para la participación política de los sectores populares. Más allá de la experimentación, vista a través de planes y programas sustentados en un cálculo de probabilidades de respuesta (estímulo y control), la vida social discurre como experiencia social, en un devenir que va generando inesperadas dinámicas en las que todos los sujetos sociales tienen capacidad de incidir.

Por último, es imprescindible adoptar una interpretación de las relaciones de poder que nos permita valorar tanto las prácticas cotidianas de dominación, el funcionamiento de las instituciones, los proyectos, las estrategias de control; así como las transformaciones, los fracasos, las prácticas cotidianas, de adaptación y resistencia, por parte de sectores populares, que aprovechan los espacios de inflexión del poder estatal y privado para disputarles beneficios materiales y simbólicos. Debemos resaltar los esfuerzos emprendidos por comprender los vecindarios urbanos a través de sus propios referentes, contruidos a partir de una interpretación de la política que devuelva el valor a los sentidos, prácticas y formas organización política, ya sea que se trate de barrios de invasión, autoconstrucción, obreros o institucionales, es necesario un cuestionamiento por la vida cotidiana y la asimilación de proyectos, ideas y relaciones con funcionarios, partidos políticos e instituciones que buscan incidir en la vida comunitaria de los barrios.

Fuentes y bibliografía

Fuentes manuscritas

Archivo Histórico de Medellín (AHM), Medellín

Fondo Alcaldía, Sección Despacho del Alcalde.

Fondo Alcaldía, Sección Departamento Administrativo de Planeación.

Centro de Documentación de Planeación Municipal (CDPM), Medellín.

Historias de mi barrio.

Fuentes orales

Arroyave, Ángela y Arroyave, Margarita, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 6 de mayo de 2015.

Arredondo, Apolinar, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 5 de mayo de 2015.

Zapata, Edgar, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 23 de mayo de 2015.

Acevedo, Genibora y Crespo, Jorge, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 9 de junio de 2015.

Velásquez, Carlos, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 22 de mayo de 2015.

Ocampo, Manuel, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 4 de mayo de 2015.

Giraldo, Marta, entrevista realizada por Kelly López. Medellín, 6 de mayo de 2015.

Arredondo, Nora, entrevista realizada por Kelly López. Bello, 27 de mayo de 2015.

Ríos, Virginia, entrevista realizada por Kelly López. Envigado, 11 de mayo de 2015.

Mejía, Vicente, entrevista realizada por Óscar Calvo. Ibarra, Ecuador, febrero de 2012.

Castrillón, Diter, entrevista realizada por Óscar Calvo, Lissette Martínez y Natalia García. Medellín, 20 de octubre de 2011.

Periódicos

El Correo (Medellín), 1968-1969

El Tiempo (Bogotá), 1970

Fuentes visuales

Fundación de Atención a la Niñez (FAN), Medellín.

Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Medellín

Fondo Carlos Rodríguez

Periódico Mi Comuna 2, Medellín

Centro de Documentación de Planeación Municipal (CDPM), Medellín.

Aerofotografías.

Bibliografía

- Abrams, Philip. “Notas sobre la dificultad de estudiar el estado (1977).” *Virajes*, 2.2 (2000): 79-98.
- Albano, Josephina. *El factor humano en los programas de rehabilitación de tugurios*. Bogotá: Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento, 1957.
- Arango, Carlos. *La lucha por la vivienda en Colombia*. Bogotá: ECOE, 1986.
- Arango, Luz Gabriela. *Mujer, religión e industria. Fabricato 1923-1982*. Medellín: Universidad de Antioquia, 1991.
- Arcila, Luz Marina, Consuelo Bustamante, Diana Praolini, y Cecilia Jaramillo. *Evaluación y alternativas para la organización de la Corporación de Papeleros de Colombia (COPAC)*. Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1975.
- Arredondo, Nora Luz, Fabián Ospina, y Elba Ortíz. *Análisis Administrativo de la Fundación Casitas de la Providencia como institución de vivienda de interés social*. Especialización Administración Social, Medellín: Universidad de Antioquia, 1970.
- Arredondo, Nora Luz, y Rocío Atehortúa. “Estudio socio-económico, familiar y de vivienda.” *Universidad de Antioquia*, 170 (1968): 1069-1108.
- Calvo, Oscar, y Mayra Parra. *Medellín (rojo) 1968. Protesta, secularización y vida urbana en las jornadas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano*. Bogotá: Planeta, 2012.
- Donzelot, Jacques. *La policía de las familias*. España: Magazín de troncos, 1990.
- Dube, Saurabh. “Historias desde abajo en India.” *Estudios de Asia y África*, 32.2 (1997): 217- 270.
- Elias, Norbert. “La relación entre establecidos y marginados.” En *El extranjero. Sociología del extraño*, 57-86. Madrid: Sequitur, 2012.

- Estrada, William, y Adriana Gómez. *Somos historia comuna nororiental*. Medellín: [s.d], 1992.
- Instituto de Crédito Territorial. *Chambacú. Regeneración de una zona de tugurios*. Bogotá: Instituto de Crédito Territorial, 1955.
- INURBE. *Estado, ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura estatal en Colombia, 1918-1990*. Bogotá: Puntos Suspensivos, 1996.
- Leal, Gloria. “Las Escuelas de Servicio Social en Colombia, 1936-1958.” *Tendencias & Retos*, 20.1 (2015): 35-49.
- López, Ruth. “Una agenda política para las mujeres desde las prácticas. El caso de las Residencias y Secretariados Sociales de Medellín, 1945-1960.” *Historia y Sociedad*, 15 (2008): 89-113.
- Migdal, Joel. *Estados débiles, Estados fuertes*. México: Fondo de Cultura Económica, 2011.
- Migdal, Joel. “Estudiar el estado.” *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, 8 (2008): 1-41.
- Moreno, Juan Carlos. “De Centros Cívicos a Juntas de Acción Comunal. El cambio de modelo de gestión y participación barrial en Medellín en la segunda mitad del siglo XX.” *Estudios Políticos*, 45 (2014): 105-203.
- Naranjo, Inés, y Margarita Quijano. *Cómo afecta la organización familiar el ambiente de la vivienda-tugurio*. Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1963.
- Park, Robert. *La ciudad y otros ensayos de ecología urbana*. Barcelona: Ediciones Serbal, 1999.
- Rúa, Darío, y Héctor Lopera. *Barriadas marginales. Un problema social*. Tesis pregrado, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1966.
- Scott, James. *Los dominados y el arte de la resistencia*. México: ERA, 2004.
- . *Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press, 1998.
- Serna, Alba, Patricia Londoño, y Jhon Betancur. *Composición social y movilización política en barrios populares de Medellín*. Medellín: Departamento de Sociología-Centro de Investigaciones Sociales. Universidad de Antioquia, 1981.
- Simmel, Georg. *El Pobre*. Madrid: Sequitur, 2011.

- Stoler, Ann. "Archivos coloniales y el arte de gobernar." *Revista Colombiana de Antropología*, 46.2 (2010): 465-496.
- Thompson, Edward. "Tiempo, disciplina y capitalismo." En *Tradicón, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, de Edward Thompson, 237- 293. Barcelona: Editorial Crítica, 1984.
- Uribe, María Cristina, y María Helena Penagos. *El Servicio Social en los programas de la Fundación Casitas de la Providencia*. Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1961.
- Utria, Darío. *Bases de la rehabilitación urbanística*. Bogotá: Consejo Nacional de Estudios Sociales, 1956.
- Vargas, María. *Historia Barrio Los Caunces N° 2: Barrios de Jesús*. Medellín: [s.d], 1986.
- Vasquez, Luz Estela, y Gabriela Villegas. *Cambio de vivienda. Estudio de los efectos que produce en el funcionamiento social según investigación realizada sobre setenta familias trasladadas al barrio Villa Socorro*. Tesis, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1965.
- Vélez, Juan Carlos. "Prácticas hegemónicas y resistencias cotidianas." *Estudios Políticos* (Estudios Políticos), 2004: 89-111.
- Ward, David. "The Victorian Slum: An Enduring Myth?" *Annals of the Association of American Geographers*, 66.2 (1976): 323-336.
- Ware, Caroline. *El Servicio Social y la vivienda*. Bogotá: Centro Interamericano de Vivienda, 1953.
- Weber, Max. *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Barcelona: Península, 1999.